

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR - MATRIZ

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

**TESIS DE MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON
MENCIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES**

**DEFINICIÓN DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE
LAVADO DE ACTIVOS EN COMPAÑÍAS DE SEGUROS
INTERNACIONALES QUE OPERAN EN LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR**

LCDA. EUGENIA FERNANDA GONZÁLEZ OVIEDO

DIRECTOR: ING. MARIANO MERCHÁN FOSSATI, MBA.

QUITO, 2014

DIRECTOR:

Ing. Mariano Merchán Fossati, MBA.

INFORMANTES:

Ing. Rodrigo Saltos Mosquera, MBA.

Ing. Patricia Salazar Santamaría, MBA.

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO.....	viii
INTRODUCCIÓN.....	1
1 EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL.....	3
1.1 IMPACTO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y LOCALES.....	3
1.1.1 Reseña Histórica de la Actividad Aseguradora.....	3
1.1.2 Referencia histórica del lavado de dinero	7
1.1.3 El fenómeno del lavado de activos como problema de alcance mundial.....	9
1.1.4 Las consecuencias económicas y sociales del lavado de dinero	11
1.1.5 Problemática Global.....	18
1.2 EL LAVADO DE ACTIVOS Y SUS ETAPAS	19
1.3 PARAÍÇOS FISCALES Y ESTADOS PERMISIVOS.....	23
1.3.1 Entidades Financieras Offshore	23
1.3.2 Su papel en el proceso de lavado	26
1.3.3 Refugios Financieros.....	27
1.3.4 Regiones.....	28
1.3.5 El Caribe del Este.....	29
1.4 ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.....	30
1.4.1 Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI.....	30
1.4.2 Composición del Grupo Acción Financiera Internacional.....	31
1.4.3 40 + 9 Recomendaciones del Gafi	33
1.4.4 Grupos de Acción Financiera Regionales, Miembros y Organismos Asociados.....	34
1.4.5 Grupos regionales de América Central y de Sudamérica.....	36
1.4.5.1 Grupo de Acción Financiera Internacional del CARIBE	36

1.4.5.2	Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD).....	39
1.5	ORGANISMOS ASOCIADOS A GRUPOS REGIONALES DE AMÉRICA.....	41
1.5.1	La CICAD	41
1.5.2	Grupo EGMONT.....	45
1.5.2.1	Países que conforman el Grupo Egmont.....	46
1.5.3	Grupo WOLFSBERG	47
1.5.4	Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional	52
1.5.5	FELABAN	55
1.5.5.1	Objetivos y contenido del trabajo de investigación	57
1.5.6	Legislación Internacional	58
1.5.6.1	La Convención de Palermo	58
1.5.6.2	El Comité de Basilea.....	61
1.5.6.3	La CICAD y la Inteligencia Financiera	62
1.5.6.4	La Ley de Secreto Bancario (Estados Unidos de Norteamérica)	62
1.5.6.5	Ley Usa Patriot	63
1.6	OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS EN ESTA MATERIA	66
1.7	SITUACIÓN ACTUAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR FRENTE AL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI).....	68
2	EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA ACTIVIDAD ASEGURADORA	84
2.1	TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR ASEGURADOR INTERNACIONAL	84
2.2	ELEMENTOS DEL RIESGO DE LAVADO DE DINERO EN EL NEGOCIO ASEGURADOR.....	91
2.2.1	Mercado.....	92
2.2.2	Clientes.....	96
2.2.3	La Póliza.....	100
2.2.3.1	Contenido Obligatorio de la Póliza.....	101
2.3	TIPOS DE SEGUROS.....	110
2.3.1	Seguro marítimo	110

2.3.2	Seguro de transporte.....	110
2.3.3	Seguro de vida.....	110
2.3.4	Pólizas ocasionales.....	111
2.3.5	Pólizas abiertas.....	111
2.3.6	Seguro de incendio.....	111
2.3.7	Seguro de automóviles.....	112
2.3.8	Seguro contra fidelidad de empleados.....	112
2.3.9	Seguro contra robo y asalto.....	112
2.3.10	Seguro de lucro cesante.....	112
2.3.11	Seguro de responsabilidad civil.....	112
2.3.12	Seguro de ramos técnicos.....	113
2.3.13	Seguro domiciliario.....	113
2.3.14	Seguro de rotura de maquinaria.....	113
3	LOS SISTEMAS DE CONTROL Y AUTORREGULACIÓN.....	115
3.1	TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES E INTERGUBERNAMENTALES VIGENTES.....	115
3.1.1	Convención Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.....	115
3.1.2	Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.....	117
3.1.3	Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.....	118
3.2	LA LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS: TIPIFICACIÓN DEL DELITO Y OBLIGACIONES.....	119
3.3	NORMAS REGLAMENTARIAS Y TÉCNICAS: JUNTA BANCARIA Y UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA.....	122
3.4	INSUFICIENCIA DE NORMAS Y SUS EFECTOS.....	129
3.5	NECESIDAD DE LA AUTORREGULACIÓN.....	130
3.6	EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS.....	132
3.6.1	Administración Integral de Riesgos.....	132
3.6.2	Riesgos asociados.....	138
3.7	POLÍTICAS Y SISTEMAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN EN EL SECTOR ASEGURADOR.....	141

3.7.1	Políticas generales	142
3.7.2	Políticas operativas: requisitos básicos	142
3.7.2.1	Identificación y comprobación del cliente.....	142
3.7.2.2	Debida diligencia	143
3.7.2.3	Operación inusual e injustificada.....	145
3.7.2.4	Monitorización de las transacciones	145
3.7.2.5	La monitorización también se basa en el riesgo	145
3.7.2.6	Redacción de informes.....	146
3.7.2.7	Rescisión de una relación.....	146
3.7.2.8	Mantenimiento de registros.....	146
3.7.2.9	Estándares operativos: control y redacción de informes.....	146
3.7.3	Estándares operativos: programas de país.....	147
3.7.3.1	Programas de Prevención de Lavado de Activos en el país: precontrato.....	147
3.7.3.2	Programas de Prevención de Lavado de Activos en la: gestión de reclamos, evaluaciones	147
4	MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS APLICABLES AL SECTOR ASEGURADOR.....	149
4.1	SISTEMA ORGÁNICO DE CONTROL INTERNO	149
4.1.1	Comité de riesgos	150
4.1.2	Comité de Cumplimiento	153
4.1.3	Comité de Ética	158
4.1.4	Comité de Auditoría	161
4.2	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	166
4.2.1	Definición del Oficial o funcionario de Cumplimiento	166
4.2.2	Funciones y Responsabilidades.....	169
4.3	POLÍTICAS DE DEBIDA DILIGENCIA	191
4.4	LISTAS “NEGRAS” INTERNACIONALES.....	194
4.5	SEÑALES DE ALERTA POR OPERACIONES DE RIESGO Y MECANISMOS DE DETECCIÓN DE CASOS	196
4.6	REPORTES DE INFORMACIÓN.....	200
4.6.1	Reportes Internacionales	202
4.6.2	Locales	203

4.7	CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS.....	205
4.8	DEFINICIÓN DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN COMPAÑÍAS DE SEGUROS INTERNACIONALES QUE OPERAN EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.....	206
4.8.1	Elementos del Gobierno Corporativo.....	207
4.8.2	Procedimientos específicos de prevención.....	209
4.8.3	Generación de matrices de Riesgo	212
4.8.4	Personas Políticamente Expuestas (PEPS).....	212
4.8.5	Reportes de información a entidades de control	213
4.8.6	Capacitación	214
5	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	215
5.1	CONCLUSIONES	215
5.2	RECOMENDACIONES	217
	BIBLIOGRAFÍA	220
	ANEXOS	224
	ANEXO 1	225
	ANEXO 2	245
	ANEXO 3	249

RESUMEN EJECUTIVO

El delito de lavado de activos viene generando distintos debates, a nivel doctrinario y político desde que fue catalogado como una actividad delictiva tanto a nivel internacional cuanto a nivel local, ya que para cada uno de los países constituye un desafío constante puesto que genera un flagelo para el funcionamiento de las instituciones económicas, sociales y políticas de toda sociedad. La presente tesis pretende definir los elementos técnicos, a nivel nacional e internacional, necesarios para establecer mecanismos adecuados de prevención del delito de lavado de activos en compañías de seguros internacionales.

Para lograr la finalidad de esta tesis se inició analizando una visión del lavado de activos en el contexto internacional principalmente en lo que se refiere al impacto de este delito en los mercados internacional y local respecto a sus etapas, paraísos fiscales y estándares internacionales de prevención. Posteriormente se realizó un análisis del lavado de activos y la actividad aseguradora en lo que tiene que ver con tipologías y elementos de riesgos del negocio asegurador, para continuar con un estudio de los sistemas de control y autorregulación. Finalmente se buscó determinar los mecanismos de prevención de lavado de activos aplicables al sector asegurador ecuatoriano.

Como resultado de este trabajo de investigación se puede mencionar que el sector de seguros corre el riesgo de que se lo emplee indebidamente para actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Si bien organismos internacionales como la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) no considera que el sector asegurador es tan vulnerable como los demás sectores que prestan servicios financieros, es un posible blanco para quienes necesitan lavar dinero.

Por lo antes mencionado se estableció los mecanismos técnicos, idóneos y específicos que permitan la efectiva aplicación en el sector asegurador de sistemas de prevención que deben estar básicamente fundamentados en principios y elementos técnicos que han sido

sugeridos por las organizaciones internacionales especializadas en el tema así como en la verdadera esencia de la prevención en materia de lavado de dinero es decir que los propios sujetos obligados denuncien todo hecho que conlleve este delito y desarrollen e implementen sistemas de control y prevención en sus organizaciones los cuales deben estar enfocados en educación a clientes, formación de personal con cultura corporativa en materia de lavado de activos, y apego al marco regulatorio.

INTRODUCCIÓN

Muchas definiciones técnicas se han dado en materia de lavado de dinero, conociendo la importancia que el dinero en si tiene como término de intercambio para el comercio, la industria y los servicios. La preocupación para garantizar su legitimidad y dar seguridad a las transacciones y confianza a los agentes intervinientes, es y ha sido una constante preocupación en la comunidad económica internacional.

El concepto de dinero no alcanza sólo al dinero en efectivo sino a las diversas formas, instrumentos y características que éste adopta. La tecnología ha creado distintos medios para ser más sofisticado el ámbito transaccional, tal es el caso del dinero electrónico y el dinero plástico, entre otros algunos de los ejemplos que podemos mencionar.

El proceso de lavado de activos procura justificar legalmente e incorporar a la economía real capitales de origen ilegal creando una simulación transaccional operativa que permita ver lo ilegal como legal.

Este proceso se presenta en etapas y muchas veces no se sabe con claridad dónde comienza y menos aún dónde termina, ya que mantiene una dinámica de mutación permanente, empieza colocando en el sistema financiero dinero proveniente de actividades ilícitas; este dinero recorre diferentes instancias con variados instrumentos diversificándose en el sistema y, finalmente se canjea por instrumentos monetarios y/o financieros negociables logrando mutar su origen para luego continuar a su destino final, la integración.

Las empresas de seguros al formar parte del sistema financiero están expuestas a que el delito de lavado de activos actúe como un virus que penetra en sus estructuras afectando la rentabilidad, credibilidad e imagen de las instituciones.

El lavado de dinero trasciende la realidad nacional e internacional, produciendo severas consecuencias políticas, sociales y económicas. Los negocios criminales y su asociación

con la política ponen en serio riesgo las instituciones, debilitan su legitimidad, ponen en riesgo la seguridad jurídica disminuyendo la inversión extranjera afectando los mercados y a su vez los niveles de precios y salarios. En lo social este delito crea la falsa imagen que permite un acceso inmediato a un bienestar económico al obtener rentas atractivas inmediatas, ignorando que la mayoría de la población sufre las consecuencias de los crímenes que le dan origen.

Es por estas situaciones es que a partir de la década de los ochenta la comunidad internacional empieza a regular y resguardar el orden socioeconómico global a través de acuerdos internacionales que no solo contemplaron filtros administrativos, controles policiales y sanciones penales, sino un amplio campo tendiente a regular las prácticas económicas y financieras internacionales. Adicionalmente abarcó la conformación de grupos y redes internacionales destinados al procesamiento y monitoreo de diferentes fuentes de información.

En el marco de este proceso podemos observar convenciones de la Organización de las Naciones Unidas, acuerdos celebrados en cumbres presidenciales, adhesiones a convenios regionales, iniciativas policiales, las cuales han derivado en la creación de organizaciones supranacionales dedicadas al monitoreo de los sistemas financieros y al reforzamiento del control policial internacional.

Por todo lo antedicho, la comunidad internacional, los Estados, y las sociedades en general han convenido en que la prevención es el mejor remedio para erradicar este delito, por ello es necesario capacitar a los agentes que intervienen en la actividad económica con el objeto de crear una red de contención contra el delito en mención. Capacitar significa convertir a cada integrante de las instituciones en un potencial denunciante que active el sistema de prevención e impida el uso y goce de los rendimientos económicos del delito.

La presente tesis analiza cada uno de los tópicos precedentes y propone una definición de mecanismos de prevención del delito de lavado de activos en compañías de seguros internacionales que operan en el Ecuador.

1 EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1 IMPACTO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y LOCALES

1.1.1 Reseña Histórica de la Actividad Aseguradora

Nadie puede aseverar que el seguro nació en una fecha determinada ya que es una consecuencia de la necesidad del hombre de mitigar los riesgos de toda índole que pesan sobre él, su familia y sus activos.

Es así como dos mil años antes de Cristo, en el código de Hamurabi, se encuentra descrita una forma de unión de los viajeros para protegerse del riesgo que representaban los malhechores en el desierto, que consistía en la reparación por el grupo de los daños que recibían uno o más de los viajeros; es decir que entre todos compartían las pérdidas. Hoy técnicamente una aseguradora reemplaza la indemnización que éstos hacían, otorgando un seguro, a cambio de un precio (prima), y respondiendo con su patrimonio por el pago del seguro, valor que nuestra Ley denomina indemnización.

También en el Código de Hamurabi¹ (Diccionario Enciclopédico Larousse) y en el Talmud² (Diccionario Enciclopédico Larousse) se preveía una asociación, en la cual, con la unión de todos los miembros se reparaba la pérdida de una nave con la entrega de otra. Gratton comentando sobre el particular transcribe el texto del Talmud en los siguientes términos: “Los marinos pueden hacer entre ellos un convenio por el cual si uno de ellos ha perdido su embarcación por su culpa, no habrá obligación de darle otra. Si la perdió sin

¹ El Código de Hammurabi, creado en el año 1760 A.C. (según la cronología media) por el rey de Babilonia Hammurabi, es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado, está escrito sobre una estela de basalto negro. Constituye una fuente única para el conocimiento de la sociedad Mesopotámica del segundo milenio AC. Diccionario Enciclopédico Larousse, Editorial Planera Internacional S.A., Barcelona, Volúmen 4.

² El Talmud es una de las obras más importantes del judaísmo, en hebreo significa “estudio” que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, historias y leyendas. Editorial Planera Internacional S.A., Barcelona, Volúmen 8.

culpa, se le construirá otra. Si la perdió mientras iba a una distancia donde las embarcaciones no van ordinariamente, no habrá obligación de construirle otra” (Gratton, 1955, p. 17), es decir que existía la presencia de lo que hoy universalmente se conoce en las pólizas como exclusiones. (Palacios, 2007, pp. 4-7)

Adicionalmente existía el acuerdo al cual llegaron los burreros de Palestina: “A aquél de nosotros que haya perdido su burro a causa de los ladrones o las fieras, le procuraremos otro burro” (Palacios, 2007, p. 17), y en Rodas (siglo XVIII) aparecen asociaciones de marineros con el objeto asegurarse mutuamente contra los riesgos propios del transporte marítimo.

En la antigua Roma se destacan las asociaciones de militares –“collegia militum- las cuales mediante cuota de ingreso, bastante elevada, amparaban los gastos de viaje del militar en aquellos casos de traslados de guarnición, y lo proveían, en caso de retirarse, de un determinado capital, o a sus herederos en caso de muerte natural, no sí ésta ocurriera en batalla. También existían las asociaciones entre artesanos, las cuales mediante una reducida cuota de ingreso, y una suma periódica también reducida otorgaban un sepelio honesto al asociado”. (Palacios, 2007, p. 5).

En la antigua Roma existieron asociaciones de militares – collegia militum – las cuales una cuota de ingreso, bastante considerable, amparaban los gastos de viaje del militar en los casos de traslado de guarnición, y lo proveían en caso de retirarse, de un determinado capital, o a sus herederos en caso de muerte natural, no si esta ocurría en batalla. También existieron las asociaciones de artesanos, que por una reducida cuota periódica, al asociado le otorgaban un sepelio honesto.

Es importante mencionar en esta reseña histórica a las asociaciones llamadas Guildas, ya conocidas en Inglaterra en el siglo IX D.C. Originariamente eran asociaciones de defensa mutua o religiosa que mensualmente “se reunían los miembros de la Guilda en un banquete o festín, en el cual se deliberaba y discutía sobre sus intereses comunes. Los efectos, como los odios, se sentían en común. Un insulto hecho a uno de sus miembros era considerado como ofensa para todos los que constituían la Guilda, tomando la venganza un carácter colectivo”. (Benítez, 1955, p. 63). La corporación no permitía que quedara en la miseria un cófrade víctima de un siniestro a no ser que la causa de ésta fuera inmoralidad. Había

un fondo común proveído por aportes anuales de los asociados. Estos juraban auxiliarse entre sí ante el acaecimiento de un siniestro.

Con la caída del feudalismo toma especial auge el concepto de propiedad privada, lo cual da origen a un gran desarrollo de la industria y el comercio. Con el crecimiento de éste nace la necesidad por parte de los comerciantes de proteger el fruto de sus industrias contra los riesgos propios del transporte marítimo y terrestre. De esta manera se comienza a poner en práctica el concepto de seguro dentro de organizaciones que a través de un proceso de formación y desarrollo se asemejaron cada vez más a la empresa de seguros de nuestros días. Así por ejemplo, a principios del siglo XV se aplican los primeros seguros marítimos; en 1309 se emplea por primera vez la palabra Seguro en el decreto dado por Duque de Génova. En 1347 se celebra el primer contrato de seguro marítimo en Génova. En el año de 1370, también en Génova se reparte el riesgo entre varias personas cuya actividad es señalada con el nombre de Securare, Sigurare o Assicurare.

A mediados del siglo XVI existía una especie de seguro obligatorio en Portugal, bajo la inspección o control del Estado para los navíos de más de 50 toneladas, el 20% de los beneficios de cada viaje engrosaba un fondo común destinado a cubrir los riesgos. En 1424, una sociedad en Génova asumía toda clase de seguros tanto en mar como en tierra. En 1601, en Inglaterra, se crea la Corte o Tribunal de Seguros para regular los conflictos entre aseguradores y asegurados. En 1666, estalló en Londres “The Great Fire, que durante cuatro días consumió dos terceras partes de Londres, destruyendo más de 18.000 casas y dejando 20.000 familias sin techo. Nicolás Barbón, ex - médico, ex - diputado en los comunes que había pasado su vida defendiéndose de los acreedores, rozando continuamente la prisión por deudas y encontrando siempre la manera de eludirla, concibió la idea de abrir una oficina para tomar seguros de daños de los incendios que fue conocida con el nombre de The Fire Office”. (Gratton, 1955, p. 96). Este fue el comienzo de las entidades aseguradoras de incendio. En 1668, se crea la primera compañía aseguradora de vida, “The Mercer Company”, debido al doctor Asshton; y precisamente por esta fecha, a fines del siglo XVII, nació el Lloyd’s de Londres.

Cabe anotar que desde esas épocas las compañías de seguros sufrían las consecuencias de las actitudes dolosas por parte de algunos aseguradores deshonestos, es así como las ordenanzas de Barcelona de mediados del siglo XIV indican:

Y por cuanto algunas personas, poco temerosas de Dios, se han hecho reintegrar de algunos seguros, sin que jamás hubiesen sido cargados efectos y mercaderías, ni los navíos hubiesen entrado ni salido, ni los cambios se hubiesen dado; por tanto dichos Concelleres y Prohombres ordenaron: que de hoy en adelante, si alguna persona se hiciere para algún seguro no habiéndose las mercaderías cargado, o los navíos entrado ni salido, o los cambios dado; en tal caso incurran los sujetos que esto hicieren en otros dos sueldos por libra, además de los dos arriba expresados, de la cantidad que se hubiesen hecho asegurar. Y de esta multa de los sueldos por libra, se aplicará la tercera parte a dichos Cónsules, que la pondrán en la cuenta de las sentencias; la otra tercera a los aseguradores; y la otra restante a la fábrica de la Lonja”. (Bellver, 1947, p. 39)

En las Ordenanzas de Burgos, publicadas en el año 1537, se previene y establece lo siguiente:

Porque muchas veces se ha hallado que con siniestras certificaciones e probanzas, algunas que se han hecho asegurar, cuando son perdidas las naos, cobraban de los aseguradores fletes que en la verdad no los llevan, puesto que fueran en salvo, y así hacían pagar lo vacío por lleno; e por consiguiente cuando esto cesaba e iban e salvo, casi muy ordinario echaban cables y otros aparejos viejos a la mar con pequeña ocasión, e los tasaban e cobraban como nuevos, y es bien evitar el daño de la Universidad e de las conciencias. (Bellver, 1947, p. 39).

Gracias a los estudios de Blas Pascal sobre el cálculo de probabilidades, de Edmund Halley sobre las leyes de la mortalidad humana, de Newton, entre los principales, se desarrolló la técnica de las Compañías de Seguros, así, en 1762, nace la primera Compañía de Seguros de Vida organizada de acuerdo a la moderna ciencia actuarial: “The Society For Equitable Assurance On Lives and Survivorships”. En 1710 aparece la primera sociedad anónima de seguros, “The Sun Fire Office. Otras importantes compañías que se fundaron por la época fueron: “Unión” en 1714, Westminster Fire Office” en 1717, The London Insurance Corporation” en 1820. Para el año de 1816 ya existían 16 compañías y 4 mutualidades que practicaban el seguro de vida”. (Benítez, 1955, p. 63).

En esta forma y con los grandes avances de la ciencia se fue desarrollando la empresa de seguros hasta alcanzar los niveles técnicos que hoy presenta.

1.1.2 Referencia histórica del lavado de dinero

El término de “lavado” se origina en los Estados Unidos de Norteamérica y se remonta a la época de la prohibición de venta de alcohol por el año de 1920, por un afamado mafioso de nombre Meyer Lanski. (Association of Certified Anti – Money Laundering Specialists, 2010, p. 17)

Lanski había creado en la Ciudad de Nueva York toda una cadena de “lavaderos” (casas de juego), que servían para “blanquear” los fondos provenientes de la explotación de casinos ilegales. Bastaba con poner las cantidades importantes de efectivo que recogía gracias a sus casinos, dentro de las cajas registradoras de su cadena de “lavaderos”. Así, después podía colocar esos fondos ilegales dentro del circuito bancario norteamericano para que éstos se integraran al circulante monetario y quedaran finalmente legitimados.

Otro antecedente, es el relativo a los bienes que los nazis en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), lograron sustraer de los países ocupados como Polonia, Francia, Checoslovaquia y Holanda, entre otros, en las que el oro y las obras de arte eran enviados principalmente a Suiza para que el primero se fundiera y se vendiera junto con las obras a efecto de obtener dinero de curso legal.

De esta forma, con el producto de la venta se alimentaba la maquinaria de guerra alemana y se enriquecían los altos mandos del Ejército Nazi. Hubo países que se mantuvieron al margen de la guerra, tal como Suiza, que logró su neutralidad, otros, como Bélgica, consiguieron sacar el oro que tenía acumulado en gran cantidad por la explotación de las minas de África, donde mantenían el dominio sobre el Congo (actualmente Zaire). Bélgica mandó su oro a Forth Knox, Estados Unidos, donde todavía se encuentra.

Otro país que sufrió los embates de la Segunda Guerra Mundial fue Polonia, y en Auschwitz en 1940, se creó un campo de concentración nazi, donde llevaban detenidos a soldados rusos, checoslovacos, yugoeslavos, franceses, austriacos y a la gente judía, éstos últimos muchas veces engañados ya que se les informaba que iban a poblar nuevos territorios en el Este Europeo, y que podían llevar hasta 50 kilos en pertenencias, por lo que muchos transportaban dinero, joyas y lo más valioso que tenían en sus ciudades de origen.

Una vez en el campo de concentración, los nazis los despojaban de todas sus pertenencias y los asesinaban en cámaras de gas, a los muertos les sacaban los dientes de oro que tenían y los fundían, a las mujeres les cortaban el cabello y lo enviaban a fábricas para la confección de telas.

La historia registra una declaración del propio jefe del campo de concentración, Rudolf Hess, quien manifestó que del 70% al 75% de los deportados, pasaban directamente a la cámara de gas, en la cual se utilizaba un gas conocido como Zyklon B, que resultaba más económico que las balas, puesto que con una lata de gas podían morir hasta 100 personas.

A través de un estudio especial norteamericano publicado en 1997, titulado “El misterio del oro Nazi”, se indicaba que por investigaciones realizadas por Estados Unidos de Norteamérica, lograron demostrar que el robo de gran parte del oro y otros objetos valiosos tomados por los alemanes en los países invadidos durante la guerra, fueron a Suiza, cuyos bancos se prestaron a “lavar” esos bienes. (Association of Certified Anti – Money Laundering Specialists, 2010, p. 17)

Datos de interés destacan que una comisión norteamericana se entrevistó en 1996 con representantes de la Asociación de Bancos Suizos donde mostraron documentos entre los que evidenciaban la transferencia de tres toneladas de oro de Berlín al Bank of International Settlement de Berna, fechados el 1 de abril de 1945.

Según un informe del gobierno Británico después de la guerra, los alemanes robaron 40 millones de dólares sólo en Austria y Checoslovaquia (dólares de hace casi siete décadas con un valor mayor al actual de acuerdo a economistas). Holanda le reportó a Alemania 193 millones y Hungría 24 millones de dólares, así el oro y las joyas preciosas eran enviadas al Banco Central Alemán, donde se organizó con banqueros suizos una compleja red financiera para triangular fondos y lavar divisas. Berna envió dinero a los países neutrales y a Buenos Aires y se sospecha que hasta la ciudad de Londres. (Association of Certified Anti – Money Laundering Specialists, 2010, p. 18)

Especialistas afirman que en los seis años de combate los alemanes depositaron en Suiza por lo menos 360 toneladas de oro, equivalentes a 3600 millones de dólares a precios de

hoy. Desde entonces, todo intento de recuperar esa fortuna ha sido rechazado sistemáticamente por los suizos.

En 1946 cuando los aliados habían congelado los fondos suizos en todo el mundo, el pequeño país neutral aceptó devolver parte del dinero nazi. Fueron sólo 58 millones de dólares que los suizos describieron como “oro no monetario”, o sea procedente de joyas y lingotes no numerados.

1.1.3 El fenómeno del lavado de activos como problema de alcance mundial

A inicios de la década de los ochenta los gobiernos empezaron a preocuparse con mayor interés en descubrir dónde se encontraban las ganancias obtenidas del producto de hechos ilícitos y cómo era invertidas para obtener dinero reciclado y limpio.

En 1980, en los Estados Unidos de Norteamérica, la Drug Enforcement Administration (DEA) había detectado fugas de capitales hacia cuentas bancarias fuera de su territorio por más de dos millones de dólares debido a la venta de cocaína y marihuana, un buen número de los bancos que facilitaron la fuga de capitales se encontraban en Miami siendo algunos de propiedad de narcotraficantes. El dinero era trasladado a otros bancos de Suiza, Bahamas o Panamá y, ya lavados regresaban nuevamente a los Estados Unidos de Norteamérica para adquirir inmuebles en Nueva York o en la Florida.

Cabe señalar que los Estados Unidos de Norteamérica es el país más “beneficiado” desde el punto de vista de las ganancias ilícitas, si se toma en cuenta que el ingreso generado por las drogas es inmenso debido al alto nivel de demanda de sus más de 20 millones de consumidores.

El secreto bancario ha sido una garantía para el cliente, quien siempre busca la mayor discreción, es así como Suiza es el país considerado como un paraíso para el lavado de dinero debido al secreto bancario que se opera por toda la banca helvética.

El fenómeno de Lavado de Activos como delito es de vida reciente, es el 19 de diciembre de 1988 en la Ciudad de Viena, Austria, cuando se lleva a cabo “La Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”,

convención en la que se acuerda combatir el tráfico de narcóticos, para lo cual entre otras medidas, se decide elaborar legislaciones en los países para que prevengan y combatan el lavado de dinero proveniente de tal ilícito.

Los circuitos, procedimientos y los flujos de fondos involucrados en el delito de lavado de activos son cada vez más complejos; la globalización, las nuevas tecnologías y la economía digital internacionalizan este fenómeno y dificultan su control.

La mejor manera de luchar contra este delito es conformar verdaderas políticas de prevención que permitan evitar este proceso desde su inicio.

Poner énfasis en la prevención tiene como primer escalón, capacitar a los agentes que intervienen en la actividad económica, con el objetivo de construir una verdadera red que impida penetrar el sistema. Capacitar significa convertir a cada integrante de las instituciones en un potencial denunciante que active el sistema de prevención e impida el uso y goce de los rendimientos económicos de este delito.

La verdadera esencia de un sistema de prevención del lavado de activos está en las propias entidades, teniendo en consideración que el lavado de dinero trasciende la realidad nacional e internacional produciendo severas consecuencias políticas, sociales y económicas.

En la actualidad, varios especialistas en prevención de lavado de dinero coinciden en que un pilar fundamental para el tratamiento y control del problema, que muchas instituciones financieras han logrado alcanzar, ha sido la instauración de un sistema integrado basado en principios y estándares de buen manejo de riesgo.

La prevención del lavado de dinero es entonces un proceso multietapas que se extiende a través de todo el entorno empresarial, financiero y regulatorio, este proceso se compone de seis elementos indispensables.

Estos elementos conforman, en muchos sentidos, una especie de estrategia antilavado donde las autoridades reguladoras y el sector empresarial han encontrado resultados efectivos.

Concretamente, los seis elementos son:

1. Contar con estructuras legales y regulatorias establecidas por la autoridad gubernamental.
2. Tener una declaración de objetivos institucionales, políticas y procedimientos a los que se comprometen los bancos y otras instituciones afines al sector.
3. Tener estructuras organizacionales bien definidas para instrumentar y mantener dichas políticas y procedimientos al interior de las instituciones financieras.
4. Diseñar los controles y procedimientos analíticos correctos para la revisión de operaciones bancarias y financieras.
5. Llevar a cabo una capacitación continúa a los niveles adecuados de la organización.
6. Mantener procesos de auditoría y una función de cumplimiento interno eficaz en todas las instituciones de los sistemas financieros y económicos.

1.1.4 Las consecuencias económicas y sociales del lavado de dinero

El Lavado de dinero amenaza los sistemas financieros y económicos en muchos países y la comunidad financiera internacional debe apoyar con firmeza los esfuerzos antilavado.

El lavado de dinero y la financiación al terrorismo pueden tener consecuencias devastadoras en los aspectos económicos, de seguridad y sociales. Si bien estos delitos pueden ocurrir en cualquier país, ellos tienen consecuencias particularmente importantes en lo económico y social para los países en desarrollo, o en los mercados y países emergentes con sistemas financieros frágiles. Los impactos negativos del lavado de dinero tienden a aumentar en estos mercados debido a que son más susceptibles a ser alterados por influencias delictivas o de terrorismo. (Association of Certified Anti – Money Laundering Specialists, 2010, p. 44)

Algunos de los efectos del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son:

Aumento de Delito y la Corrupción.- El lavado de dinero ayuda a mejorar los aspectos rentables de las actividades criminales.

Cuando un país es considerado como un paraíso para el lavado de dinero, atraerá a gente que cometerá delitos. Generalmente, los paraísos para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo tienen:

- Cantidad ilimitada de delitos subyacentes para el lavado de dinero.
- Una definición restringida de las instituciones cubiertas por las leyes y regulaciones antilavado.
- Pobre control de las leyes, sanciones leves normas que dificultan el decomiso o el congelamiento de activos relacionados con el lavado de dinero.

Si el lavado de dinero está extendido, también habrá más corrupción, porque los delincuentes tratarán de sobornar a los funcionarios gubernamentales, abogados y empleados de las instituciones financieras y no financieras para que puedan continuar haciendo sus negocios ilegales.

Debilitamiento del Sector Privado Legítimo.- Uno de los efectos microeconómicos más serios del lavado de dinero recae sobre el sector privado. Es conocido que los lavadores de dinero utilizan compañías pantalla o negocios que aparentan ser legítimos y realizan actividades legítimas, pero en realidad son controlados por los delincuentes y mezclan los fondos provenientes de actividades ilícitas con fondos legítimos, para esconder el dinero mal habido.

Estas compañías pantalla tienen acceso a grandes sumas de fondos ilícitos, lo que les permite subsidiar a los productos y servicios a niveles muy por debajo de los índices de mercado. Ahí, las compañías pantalla, tienen una ventaja competitiva sobre las compañías legítimas que reciben fondos de los mercados financieros. Esto hace difícil, sino imposible que los negocios legítimos puedan competir contra las compañías pantalla. Claramente,

los principios gerenciales de estas compañías delictivas, no son consistentes con los principios de mercado libre tradicionales de los negocios legítimos, que resultan en efectos macroeconómicos negativos mayores.

Finalmente al utilizar las compañías pantalla y otras inversiones en compañías legítimas, los fondos del lavado de dinero pueden ser utilizados para controlar a industrias enteras o a sectores de la economía de ciertos países. Esto aumenta el potencial para la inestabilidad monetaria y económica debido a la asignación inadecuada de recursos y distorsiones artificiales de precios de activos y commodities. También brinda un vehículo para la evasión fiscal, de esta forma privando de recursos al país.

Debilitamiento de las Instituciones Financieras.- El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo pueden perjudicar la eficiencia del sector financiero de un país. Pueden afectar negativamente la estabilidad de los bancos o de otras instituciones financieras en forma individual, como las compañías de seguros. De hecho, la actividad criminal ha estado asociada con una cantidad de fracasos bancarios en todo el mundo, incluyendo el fracaso del primer banco en Internet, el European Union Bank. Más aún, algunas crisis financieras de los años 90, como el escándalo de fraude y lavado de dinero del BCCI y el colapso del Barinas Bank en 1995 tras un esquema fraudulento en el mercado de derivados realizado por un empleado; estos eventos tenían significativos componentes criminales o de fraude. Las instituciones financieras que cuentan con fondos procedentes de delitos tienen desafíos adicionales para administrar adecuadamente sus activos, deudas y operaciones. Las consecuencias adversas del lavado de dinero son generalmente descritas como de reputación, operativas y de concentración de riesgos. Ellas están interrelacionadas a cada consecuencia financiera como:

- Pérdida de negocios rentables.
- Problemas de liquidez a través de extracciones de fondos.
- Cese de servicios de banca corresponsal.
- Costos de investigación y multas.
- Decomisos de activos.
- Pérdidas de Préstamos.
- Reducción del valor de las acciones de las instituciones financieras.

El riesgo a la reputación es la posibilidad de que publicidad adversa sobre las prácticas comerciales y asociaciones del banco, sean exactas o no, causen una pérdida de confianza pública en la integridad de la institución. Los prestamistas, depositantes e inversionistas pueden cesar de hacer negocios con la institución a raíz de un escándalo de lavado de dinero que involucre a la institución. La pérdida de prestatarios de alto nivel reduce los préstamos rentables y aumenta el riesgo del portafolio en general. Los depositantes pueden retirar sus fondos; más aún, los fondos colocados en depósito con un banco por los lavadores de dinero no pueden ser considerados como una fuente estable de financiación.

Grandes sumas de fondos lavados a menudo están sujetas a extracciones anticipadas mediante transferencias o confiscaciones de las autoridades, causando posibles problemas de liquidez.

El riesgo operativo es aquel que puede provocar pérdidas debido a errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas y como consecuencia de acontecimientos externos. El riesgo operacional es inherente a todas las actividades, productos, sistemas y procesos, y sus orígenes son muy variados (procesos, fraudes internos y externos, tecnológicos, recursos humanos, prácticas comerciales, desastres, proveedores). Los riesgos operacionales facilitan el proceso de lavado en las instituciones por la falta de acciones de previsión.

El riesgo legal es aquel al que se enfrenta una institución cuando existe la posibilidad de demandas judiciales, sentencias judiciales adversas, contratos inejecutables, multas y sanciones que generen pérdidas, aumentando los gastos de una institución o incluso el cierre de la institución.

El proceso de lavado de dinero involucra a delincuentes en casi todos sus aspectos. Como consecuencia de ello, los clientes legítimos también pueden ser víctimas de un delito financiero, perder dinero y demandar a la institución reclamando los reembolsos. Puede haber investigaciones, realizadas por autoridades bancarias o de control legal que resulte en incrementos de costos, así también como en multas y otras sanciones. También, ciertos contratos pueden ser inejecutables a causa del fraude existente por parte del cliente delincuente.

El riesgo de concentración es la posibilidad de pérdida resultante de la excesiva exposición del crédito o de préstamos a un prestatario. Las regulaciones generalmente restringen la exposición de una entidad financiera a un único prestatario o un grupo de prestatarios relacionados. La falta de conocimiento de un cliente en particular o quién está detrás de ese cliente, o de la relación de un cliente con otros prestatarios, pueden colocar al banco en situación de riesgo en este aspecto. Esto es un punto de interés cuando existen contrapartes relacionadas, prestatarios conectados y una fuente común de ingresos o activos para realizar los repagos. Las pérdidas de préstamos también pueden resultar, por supuesto, de contratos inejecutables y contratos hechos con personas ficticias.

Por estas razones, el Comité de Basilea ha emitido declaraciones sobre Supervisión Bancaria, como el Documento sobre Debida Diligencia sobre Cliente para Bancos (2001), sobre la prevención del uso delictivo de los sistemas bancarios de sus miembros, con el propósito de lavar dinero.

Pérdida de control o errores en las decisiones relacionadas con la política económica.-

Debido a las grandes sumas de dinero involucradas en el proceso de lavado de dinero, en algunos países de mercados emergentes estos fondos ilícitos pueden disminuir los presupuestos gubernamentales, resultando en una pérdida de control de la política económica por parte de los gobiernos o en errores de política debido a errores en la medición de estadísticas macroeconómicas resultantes del lavado de dinero.

El lavado de dinero puede afectar adversamente las monedas y las tasas de interés ya que los lavadores reinvierten los fondos donde sus planes de fraude tiene menos posibilidades de ser detectados, en lugar de colocarlos donde las tasas de retorno son mayores. También pueden presentarse la volatilidad en las tasas de cambio e interés en razón de transferencias de fondos internacionales no anticipadas. En la medida en que la demanda de dinero cambie de un país a otro por el lavado de dinero los resultados en información monetaria será engañosa y tendrá consecuencias adversas para la volatilidad de las tasas de interés y cambio, particularmente en las economías dolarizadas, ya que el rastreo de acumulados monetarios se vuelve más incierto. El lavado de dinero puede aumentar la amenaza de inestabilidad monetaria debido a la asignación errónea de recursos y distorsiones artificiales en los precios.

Distorsión e Inestabilidad Económica.- Los lavadores de dinero no están interesados en la generación de ganancias provenientes de sus inversiones sino en proteger sus fondos y ocultar el origen sucio de los mismos. Así, ellos “invierten” el dinero en actividades que no necesariamente son beneficiosas económicamente en el país donde los fondos están ubicados. Más aún, en la medida en que el lavado de dinero y los delitos financieros dirigen los fondos de inversiones exitosas hacia inversiones de menor calidad, puede verse dañado el crecimiento económico. En algunos países, industrias enteras, como la construcción y la hotelería, han sido financiadas no por su demanda real, sino por los intereses de corto plazo de los lavadores de dinero. Cuando estas industrias no les sirve más a los lavadores de dinero, ellos les abandonan, causando un colapso de estos sectores y un daño inmenso a las economías que mal podrían soportar estas pérdidas.

Pérdidas de Ingresos por Impuestos.- De las formas subyacentes de actividades ilegales, la evasión fiscal es, tal vez, la que tiene un impacto macroeconómico más evidente. El lavado de dinero disminuye el ingreso por impuestos y por ende indirectamente perjudica a los contribuyentes honestos. También hace que el cobro de impuestos por parte del estado sea más difícil. Esa pérdida de ingresos generalmente se traduce en mayores alícuotas impositivas de lo que normalmente sería si los fondos procedentes del crimen no gravado fueren legítimos.

El déficit gubernamental está en el centro de las dificultades económicas de muchos países, y corregirlo está en el foco principal de la mayoría de los programas de estabilización económica. El FMI ha estado participando en esfuerzos para mejorar las capacidades de cobro de impuestos de sus países miembros. Aunque el sector de pequeños negocios es un nexo importante, también genera crecimiento económico, por ende es posible que en países que se encuentran en una etapa relativamente temprana del desarrollo económico sean especialmente proclives a la evasión fiscal y al lavado de dinero asociado a la misma.

Riesgos para los esfuerzos de privatización.- El lavado de dinero amenaza los esfuerzos de muchos estados por introducir reformas en sus economías a través de la privatización. Las organizaciones criminales pueden hacer ofertas más altas que los compradores legítimos de compañías que antes eran estatales. Más aún, si bien las iniciativas de privatización generalmente son beneficiosas económicamente, también pueden servir como un vehículo para lavar fondos. En el pasado, los delincuentes han podido adquirir

complejos hoteleros, casinos y bancos para ocultar sus fondos ilegales y seguir con sus actividades delictivas.

Riesgo para la reputación de un país.- La reputación de ser un paraíso de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo podría generar efectos negativos para el desarrollo y crecimiento económico de un país. Disminuye las oportunidades globales legítimas porque las instituciones financieras extranjeras pueden decidir limitar sus transacciones con instituciones de paraísos de lavado de dinero, dado que el escrutinio extra necesario las hará más onerosas. Los negocios legítimos ubicados en paraísos de lavado de dinero pueden sufrir el acceso reducido a los mercados mundiales (o tendrán que pagar más para tener acceso) en razón del mayor escrutinio de los sistemas de titularidad y control. Una vez que la reputación financiera del país es dañada, revivirla es muy difícil y requiere de significativos recursos gubernamentales para rectificar un problema que podría haber sido evitado con controles antilavado adecuados. Otros efectos son las contramedidas especiales tomadas por organizaciones internacionales y otros países, como la elegibilidad reducida para obtener asistencia gubernamental.

Costos Sociales.- Importantes costos y riesgos sociales están asociados con el lavado de dinero. El lavado de dinero es un proceso vital para continuar cometiendo ciertos delitos. Permite a los traficantes de drogas, contrabandistas y otros delincuentes ampliar sus operaciones. Esto aumenta el costo gubernamental debido a la necesidad de incrementar los gastos de control legal y salud (por ejemplo para el tratamiento de adictos a las drogas) para combatir las consecuencias serias que resultan de tal actividad.

La magnitud externa del poder económico que resulta del lavado de dinero tiene un efecto de corrupción sobre todo los componentes de la sociedad. Incluso podría llevar a una virtual compra de gobiernos legítimos. Entre sus otros efectos socio-económicos negativos, el lavado de dinero transfiere poder económico del mercado, el gobierno y los mismos ciudadanos a los delincuentes.

1.1.5 Problemática Global

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)³, las empresas occidentales anualmente emplean en sobornos alrededor de 80 millones de dólares con objetivo influir en decisiones contractuales favorables.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), con base en información financiera que ha venido analizando desde 1996, estima que el dinero lavado en la economía global es equivalente entre el 2 y 5 por ciento del Producto Nacional Bruto mundial, por lo que asciende a ¡cifras inimaginables de entre 600,000 y 1'500,000 millones de dólares al año. (2004)

En realidad, estas fuentes deben tomarse con reservas, ya que lejos de aportar certidumbre, introducen confusión sobre el valor económico de los recursos de procedencia ilícita en las economías de la región de América Latina, que siguiendo la misma tónica del FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que la región lava activos en el orden de entre el 2.5 y 6.3 por ciento del Producto Interno Bruto Regional. (2004). Se trata en todo caso, de cifras que no pueden sustentarse metodológicamente con seriedad, ya que no existe ningún documento en el que se transparente el método seguido para su determinación, en virtud de que tiene más un carácter de declaración política que del resultado de alguna investigación científica.

Todos hemos escuchado en los medios de comunicación, noticias en torno a decomisos de droga, a lavado de activos, a la existencia de paraísos fiscales, al aseguramiento de grandes cantidades de dinero en aeropuertos, en casas habitación, en puntos fronterizos o en exorbitantes cuentas bancarias donde comúnmente no concuerda la cantidad de dinero en movimiento, con la principal fuente de ingresos del propietario.

El lavado de activos es la última parte de la cadena productiva ilícita asociada, por ejemplo, al narcotráfico, la trata de personas, contrabando o venta ilegal de armas, entre muchas otras actividades ilegales.

³ La Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero también conocida por su nombre en francés como Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el G7. El propósito de la FATF es desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

1.2 EL LAVADO DE ACTIVOS Y SUS ETAPAS

Corresponde a las tres fases en que se divide el circuito operativo del proceso de lavado de dinero, cuya tipificación está dada por las características de las actividades económico-financieras que realizan en cada una de ellas y las formas que adopta el componente de simulación, presente en todo el proceso. La definición de las etapas del proceso, esquema aceptado internacionalmente, comenzó a fines de la década de los 70's, y comienzos de la del 80, a tal punto que se centró la atención del problema en la Convención de Viena de 1988.

Así, la primera etapa, originalmente denominada de **Situación o Colocación**⁴, involucra el ingreso de los fondos al sistema financiero mediante múltiples depositantes y por importes no significativos para no llamar la atención o evitar los controles por determinadas sumas, que se van acumulando en una cuenta bancaria determinada, para a partir de allí, comenzar su camino de legitimación. En esta etapa es donde físicamente el lavador coloca su efectivo, inyecta su ganancia proveniente del delito original, por primera vez, usando depósitos o compras de instrumentos monetarios de instituciones financieras. (Association of Certified Anti – Money Laundering Specialists, 2010, p. 41)

Es esta etapa la más débil del proceso y la que brinda mayores posibilidades de detectar operaciones sospechosas, ya que se maneja fundamentalmente dinero en efectivo, y de acuerdo con la actividad de los depositantes y el análisis de sus capacidades económico-financieras, debe aplicarse la política “conozca a su cliente”, con la cual se puede observar si se desarrollan operaciones inusuales. (Pérez, 2006)

⁴ Se introduce el dinero procedente de actividades delictivas en instituciones financieras on no financieras.



Figura N° 1. Colocación

En la segunda etapa del proceso que es la **Estratificación o Diversificación**⁵, los lavadores separan el lucro de su origen, intercalando operaciones financieras complicadas que disfrazan el origen, su posesión y el destino. (Association of Certified Anti – Money Laundering Specialists, 2010, p. 41)

Una vez colocado su dinero en el sistema financiero del mundo, retiran del sistema su efectivo pero en forma de cheque, cartas de crédito, acciones, bonos, giros electrónicos u otros. La ventaja de estos instrumentos es que facilitan el traslado de ganancias de un país a otro, donde se depositan varias cuentas. En esta etapa los lavadores también convierten su lucro en bienes, incluyendo bienes raíces, vehículos, arte, joyería u oro; estos bienes se venden o se exportan para el comercio en el exterior y al hacerlo cobran en instrumentos monetarios y no en efectivo.

A partir de esta etapa comienza a complicarse la visualización del origen, pues los fondos depositados en pequeñas sumas en la fase anterior, y que a esta altura alcanzaron montos considerables, se han abierto y diversificado en transacciones que mayoritariamente son de ida y vuelta, y hacen perder el rastro dificultado su seguimiento, lo cual torna muy difícil determinar su origen ilícito.

⁵ La desvinculación de los ingresos procedentes de una actividad delictiva en su origen, mediante la utilización de diversas operaciones financieras o no financieras.

Aquí los fondos vuelven a juntarse, bajo una gran máscara de legalidad, para penetrar en la tercera y última etapa del proceso como una gran inversión. (Pérez, 2006)



Figura N° 2. Diversificación

En la tercera etapa que es la **Integración**⁶, el lavador de dinero está listo para integrar su dinero creando lo que parece ser una justificación para su riqueza mal lograda; puede que establezca “empresas fantasmas” en países con fuerte secreto bancario o, donde se permitan empresas con acciones al portador, probablemente se convierta en subsidiario local de los grandes supermercados multinacionales, quizás obtenga la autorización para prolongar las cadenas hoteleras líderes en plazas emergentes, posiblemente participe en obras del sector público o le adjudiquen privatizaciones en los países menos desarrollados, y todo esto hace suponer que se trata de dinero legítimo. (Association of Certified Anti – Money Laundering Specialists, 2010, p. 42)

Se trata de la tercera etapa del proceso de lavado de dinero, lo que para muchos, se conforma los capitales ya legitimados. (Pérez, 2006)

Sin importar el grado de sofisticación, el lavado de dinero se ejecuta en las tres etapas expuestas precedentemente, en las que a partir del componente de penetración (etapa de colocación), las organizaciones delictivas dedicadas a la actividad delictiva determinarán

⁶ Retorno de los ingresos blanqueados al sector de la economía del que procedían o a otro sector diferente, pero con apariencia de legitimidad.

las plazas y mercados en los cuales actuar y, dado que es un delito esencialmente transnacional, utilizarán varios en forma simultánea.

Aplicarán, de modo constante y permanente, en todo el desarrollo del proceso el componente de simulación, para encubrir el origen de los capitales ilícitos en circulación y darles aspecto legal mediante las transacciones desarrolladas en las tres etapas de este proceso.



Figura N° 3. Integración

Las etapas del proceso de lavado de dinero así explicadas obedecen a un concepto clásico entre los analistas de esta problemática, pero si bien conceptualmente aún no han perdido vigencia y la esencia de sus aspectos teórico-prácticos es válida, es de entenderse que la evolución tecnológica, la sofisticación de los mercados junto con la apertura y globalización, también han sido acompañadas por la evolución de la delincuencia, por lo que corresponde revisar algunos conceptos hasta hoy aceptados y que han variado con el paso del tiempo:

Si el ingreso de capitales al sistema se produce mediante una gran inversión, esto significa que la segunda etapa ya no es sólo la caracterizada por la estratificación o diversificación a través de instrumentos financieros, sino por la concentración de fondos para orientarlos a inversiones de mayor alcance, se plantea como métodos de esta fase: fusiones, control de empresas, préstamos entre compañías del mismo grupo, creación de entes jurídicos.

Si aceptamos que esto es así, de la misma forma vemos que la segunda etapa del proceso se confunde con la primera: ingreso de fondos al sistema; o se trata de una mezcla con la tercera, que los asume como capitales legítimos.

Ello significa que los fondos ilegales que pasan por esta etapa ya están protegidos con cierto manto de legalidad, lo que permite acelerar su desvinculación del origen y ampararse en negocios de mayor amplitud, convirtiendo a ésta en la etapa de encubrimiento.

Lo expresado anteriormente suele ser el caso típico de empresas transnacionales o grupos económicos con esas condiciones, los cuales, junto con su diversidad de negocios, también se dedican a la legitimación de dinero sucio y mezclan activos de ambas procedencias.

Los sobornos, el fraude, el cohecho, que de antiguo eran factores extremos y repudiados, en la actualidad se han convertido en moneda corriente para satisfacer las ambiciones desmedidas, que para efecto, defecto y desgracia de la sociedad es cada día más numerosa, en muchas partes del mundo.

1.3 PARAÍOS FISCALES Y ESTADOS PERMISIVOS

1.3.1 Entidades Financieras Offshore

Financieramente la palabra “offshore” se utiliza para describir una actividad económica o inversión que se realiza fuera del país de residencia. A partir de la década de los 80 esta palabra fue perdiendo fuerza y fue convirtiéndose en una terminología de “extraterritorial”, y de esta manera se entendía que realizar una transacción extraterritorial tenía ciertas ventajas como beneficios fiscales, facilidad de trámites, estrictas leyes de privacidad “secreto o sigilo bancario”, entre la más importantes.

Estas transacciones y condiciones básicamente se realizan en los llamados “paraísos fiscales” que son países que eximen del pago de impuestos a sus inversores extranjeros que mantienen cuentas, inversiones o constituyen sociedades en sus territorios. Los estados que aplican este tipo de políticas tributarias lo hacen con el propósito de atraer divisas extranjeras lo cual fortalece sus economías. (Alvatvateer, 2008, p. 217)

Sin embargo debido a la globalización de la economía y por ende la libre circulación de capitales se hace muy difícil ejercer un control del movimiento de dinero que va hacia los paraísos fiscales, que como se menciona precedentemente mantienen estricto sigilo bancario, lo cual favorece a actividades delictivas o fraudulentas como el blanqueo de capitales.

Es por estas razones que organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, el G20 y el Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI han emitido recomendaciones y propuestas para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En tal virtud los paraísos fiscales y las entidades offshore que no acogen medidas de prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de se pueden considerar como eslabones en el proceso de ocultamiento del origen ilícito de los recursos.

De acuerdo con World Wide Banking durante los últimos 30 años los centros financieros offshore se han convertido en uno de los componentes más importantes en el sistema financiero global emergente, su existencia ha permitido que los gobiernos locales impongan impuestos más altos a individuos y compañías.

Las principales ventajas de la banca offshore son:

- Mayor libertad en cuanto a intervención gubernamental y exenciones de regulaciones respecto del capital e inversiones, lo cual da libertad a sus clientes en cuanto a diversidad de transacciones e incluso permite el pago de intereses más elevados.
- Menos impuestos en depósitos en cuantías y rendimientos de las mismas.
- Mayor privacidad debido a las estrictas leyes de sigilo bancario y privacidad.

- Estabilidad financiera y monetaria ya que la banca offshore se sitúa en centros financieros importantes con estabilidad política y monetaria.
- Servicios especiales en cuanto a productos que no disponen sus competidores.

Las principales desventajas son:

- Banca susceptible a realizar operaciones ilícitas y evadir controles locales.
- Riesgos relacionados a las elevadas tasas de interés.
- Inadecuados estándares de supervisión.
- En algunos casos accesibilidad limitada.

En el Ecuador de conformidad con las normas generales para la aplicación de la Ley General del de Instituciones del Sistema Financiero Nacional, en su artículo 18, Sección VI, Capítulo I, Título II, Libro I, los bancos e instituciones financieras constituidos en el país podrán operar en el exterior, previa autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Para ello las instituciones del sector financiero deberán aplicar todas las normas de carácter societario, capital adecuado, normas financieras, entre las principales, así como también la entidad solicitante deben remitir a la Superintendencia de Bancos y Seguros las normas financieras vigentes del país receptor.

Es importante mencionar que la Superintendencia de Bancos y Seguros no autorizará la apertura de oficinas en el exterior si los países receptores tienen dentro de sus leyes y políticas la prohibición de la entrega de información financiera al organismo de control en el Ecuador.

1.3.2 Su papel en el proceso de lavado

En un proceso de lavado de dinero la transferencia de recursos a una entidad financiera offshore es comúnmente considerada una fase esencial en el proceso de ocultamiento del origen de los fondos ilícitos. (Alvatvateer, 2008, p. 217)

Después de la colocación inicial en el sistema bancario y financiero, la transferencia de recursos a una cuenta en una entidad financiera offshore es así generalmente reconocida como una actividad de lavado, porque el manejo de los recursos financieros en estas entidades integra un medio ideal para dispersarlos y así facilitar su reinserción en la economía formal.

La alta velocidad en la transferencia de dinero, la diversidad en las ofertas de este servicio, y las condiciones de rígido sigilo facilitan relocalizar globalmente el dinero.

Se distinguen las siguientes categorías de empresas offshore:

- Compañías de derecho común
- Corporaciones Offshore – modelo británico y modelo americano
- Sociedades Limitadas Offshore
- Compañías de Responsabilidad Limitada Offshore
- Compañías Offshore Especializadas

Estos cinco tipos de empresas tienen un elemento en común: su rápida integración con un mínimo de trámites administrativos ante las autoridades locales y con un bajo costo de creación. (Association of Certified Anti – Money Laundering Specialists, 2010, p. 42)

Todas son funcionales a la globalización de la economía, es decir, a la integración a escala global de los recursos financieros, en virtud de que cada una de ellas resuelve necesidades y requerimientos específicos.

Adicionalmente, los bancos que se establecen en estas jurisdicciones no están obligados a instrumentar controles para reportar a la autoridad, y la obligación de informar a una

entidad financiera central, sobre las operaciones sospechosas realizadas, sólo tiene carácter testimonial.

Es común en la práctica de las grandes empresas aseguradoras europeas y estadounidenses y algunas latinoamericanas, establecer empresas filiales en centros offshore para reasegurar riesgos, y eludir los requerimientos de capital, los pagos por concepto de impuestos y de reservas vigentes en los países de origen.

1.3.3 Refugios Financieros

Los refugios financieros figuran desde que los piratas en el siglo XVII capturaban embarcaciones comerciales europeas en el Atlántico y se refugiaban en puertos que les ofrecían su hospitalidad por disfrutar del dinero que ellos gastaban. Ciertas ciudades soberanas del Mediterráneo ofrecían refugio y residencia a los piratas y su dinero cuando ellos decidían retirarse de sus actividades.

Así también los piratas usaban sus botines para comprar su perdón, lo que les permitía regresar a sus países de origen. De hecho de acuerdo a la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, en su Boletín de Prevención del Delito y Justicia Penal, Número 8 de la Serie Técnica del PNUFID, indica que en el año 1612 se presume la primera amnistía otorgada a capitales de origen delictivo, que lo hiciera Inglaterra al ofrecer perdón incondicional a los piratas que dejaran su actividad y el derecho de conservar el producto de sus fechorías. Situaciones similares se han dado tres siglos y medio después cuando prominentes barones de la droga han solicitado a algunos estados modernos. (UNODC, Num. 8)

Son muchos los países que venden sociedades extraterritoriales, estas sociedades están exentas de toda reglamentación fiscal o de otra índole y están protegidas por una legislación protectora del secreto social o empresarial.

Ahora bien tanto el secreto bancario como los centros financieros extraterritoriales desempeñan una función legítima y forman parte integrante del sistema financiero mundial, por lo tanto la explotación de éstos por organizaciones delictivas o ciudadanos para evasión fiscal, no debe oscurecer su función legal.

1.3.4 Regiones

Pese a que no existe ninguna definición comúnmente aceptada del término offshore, varias organizaciones como el Fondo Monetario Internacional - FMI, Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI, Organización para la Cooperación y el Desarrollo – Económico - OCDE, Organización de las Naciones Unidas - ONU, entre otros, se refieren como tales a diversos territorios o países que reúnen las características propias de un refugio financiero.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo – Económico - OCDE, los principales países, territorios, ciudades, zonas que cabe considerar como paraísos fiscales o refugios financieros, son:

Tabla N° 1

Paraísos Fiscales o Refugios Financieros según la OCDE

Alderney	Guatemala	Nigeria
Andorra	Guernsey	Niué
Anguilla	Hong Kong	Norfolk
Anjouán	Hungría	Nueva Zelanda
Antigua y Barbuda	Irlanda	Omán
Antillas Holandesas	Islandia	Países Bajos
Aruba	Israel	Panamá
Australia	Jamaica	Puerto Rico
Austria	Japón	Reino Unido
Bahamas	Jersey	Rep. de Chipre del Norte
Bahréin	Jordania	República Dominicana
Barbados	Labuán	Saint Kitts
Belize	Letonia	Samoa
Bermudas	Líbano	San Marino
Botswana	Liberia	St. Vincent y Granadinas
Brunei	Liechtenstein	Santa Lucía
Caimán, Islas	Luxemburgo	Sark
Campione	Macao	Seychelles
Canadá	Macedonia	Singapur
Chipre	Madeira	Somalia
Cook, Islas	Maldivas, Islas	Suecia
Costa Rica	Malta	Suiza
Dinamarca	Man, Isla de	Tanger
Dominica	Marshall, Islas	Trinidad y Tobago
Emiratos Árabes Unidos	Mauricio	Turks y Caicos, Islas
Estados Unidos	Mónaco	Uruguay
Filipinas	Montenegro	Vanuatu
Ghana	Montserrat	Virgenes Británicas, Is.
Gibraltar	Naurú	Virgenes USA, Is.
Granada	Nevis	Yibuti

Fuente: Paraísos fiscales

1.3.5 El Caribe del Este

El antecedente común de los territorios insulares del Caribe consiste en su atomización y escaso desarrollo económico, en un principio como colonias de los imperios británicos, francés, holandés y español, y posteriormente, agrupados en organizaciones como la Comunidad de las Naciones y la Comunidad y Mercado del Caribe (CARICOM), con bajos niveles de renta per cápita, y con la sola ventaja comparativa de su belleza escénica y recursos naturales.

El desarrollo de centros financieros offshore no correspondió a un plan específicamente diseñado para tales efectos por las autoridades fiscales de estos países, o de una organización integrada por ellos, sino a la satisfacción de la demanda, por parte de tenedores de fondos, de condiciones de seguridad, privacidad y anonimato de la propiedad de los recursos.

Las primeras operaciones offshore que se realizaron en las Bahamas fue a partir de 1936, con empresas que respondían a intereses estadounidenses y canadienses principalmente.

La demanda de condiciones de protección de recursos financieros se expandió rápidamente a otros territorios británicos en el Caribe tales como Anguila, Islas Vírgenes y las Islas Caimán.

Para los gobiernos y autoridades locales, los principales incentivos para promover el desarrollo de empresas en sus jurisdicciones radicaban en la creación de empleo, la generación de ingresos y más generalmente, en la necesidad de atraer capitales.

Las empresas financieras offshore se instalaron en Antigua y Bermuda hacia principios de los años ochenta, y posteriormente en Granada y Dominica, y más recientemente, durante la segunda mitad de la década de los años noventa, en Santa Lucía y San Kitts.

Concebidas como un instrumento esencial promotor del crecimiento local, la empresa financiera offshore fue considerada como un medio para sustentar las políticas de crecimiento ya que el capital extranjero invertido en ellas contribuirá a generar beneficios a las poblaciones locales, principal motivo que genera el proceso competitivo entre estos

países o territorios por atraer fondos. (Association of Certified Anti – Money Laundering Specialists, 2010, p. 55)

1.4 ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

La cooperación internacional es una de las claves fundamentales para el éxito en la batalla contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Se han realizado varios esfuerzos destacados por la comunidad internacional para combatir este flagelo incluyendo la creación del Grupo de Acción Financiera Internacional y varios grupos regionales creados para analizar el problema del lavado de activos y las necesidades particulares.

Básicamente podemos indicar que los principales estándares internacionales contra el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo constituyen las 40 recomendaciones + 9 del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI.

1.4.1 Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI

En la cumbre económica anual en 1989 en París, el Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón) creó al Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI, originalmente llamado el Grupo de Acción Financiera Internacional del G-7.⁷

Este Grupo aparece hoy como el mayor catalizador en el mundo para las acciones gubernamentales contra el lavado de activos.

Desde febrero de 2004 el GAFI estaba compuesto por 31 países miembros y dos organizaciones internacionales: la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.

⁷ El Financial Actions Task Force (Fatf) o Group de Acción Financiera Internacional (GAFI), fue creado por el Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón) para prevenir la utilización del sistema bancario y las instituciones financieras como medio para lavar dinero de origen ilícito y considerar esfuerzos preventivos en este campo, incluyendo la adopción de un sistema legal y regulatorio, así como el mejoramiento de la asistencia judicial multilateral. Los ámbitos delictivos contemplados en el comunicado son las drogas, el blanqueo de capitales, el terrorismo y los delitos contra el medio ambiente.

Las admisiones de Sudáfrica y la Federación Rusa como miembros activos del GAFI fueron logros significativos de la ronda del GAFI 2002-2003. Estas dos inclusiones ayudaron al desarrollo de guías para implementar las 8 recomendaciones especiales para combatir el financiamiento al terrorismo.

Entre sus actividades el GAFI presenta un informe anual sobre los esfuerzos antilavado de dinero de los países miembros, así como también sobre las naciones consideradas “no cooperantes” en dicho esfuerzo mundial. Las naciones miembros están obligadas a adoptar las 40 recomendaciones del GAFI sobre lavado de activos.

El Gafi sostiene que los procesos de revisión entre Estados aumentan la transparencia y sostiene el cumplimiento estricto de los países. Cuando los estados no cumplen, son incluidos en una lista que es publicada mundialmente.

1.4.2 Composición del Grupo Acción Financiera Internacional

Los 31 países y, territorios y organizaciones que integran al GAFI, son:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • Alemania | • Grecia |
| • Argentina | • Hong Kong, China |
| • Australia | • Irlanda |
| • Austria | • Italia |
| • Bélgica | • Japón |
| • Brasil | • Luxemburgo |
| • Canadá | • México |
| • Comisión Europea | • Noruega |
| • Consejo de Cooperación del Golfo | • Nueva Zelanda |
| • Dinamarca | • Portugal |
| • España | • Reino de Holanda |
| • Estados Unidos | • Reino Unido |
| • Federación Rusa | • Singapur |
| • Finlandia | • Sudáfrica |
| • Francia | |

- Suecia
- Suiza
- Turquía. (Financial Action Task Force, 2013)

Los siguientes cuerpos internacionales son observadores dentro de GAFI, con funciones parecidas o específicas antilavado de activos:

- Grupo Asia/Pacífico sobre Lavado de Dinero (GAP)
- Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
- Grupo del Este y Sur Africano sobre Antilavado de Dinero (GESAALD)
- Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero en Sudamérica (GAFISUD)
- Consejo de Europa del Comité de Expertos Selectos sobre la Evaluación de Medidas Antilavado de Dinero.
- Banco de Desarrollo Africano
- Banco de Desarrollo de ASIA
- El Secretariado del Commonwealth
- Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera
- Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo
- Grupo de Asia/Pacífico sobre Lavado de Activos
- Banco de Europa Central
- Europol
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Fondo Monetario Internacional (FMI)
- INTERPOL
- Organización Internacional de Comisiones de Valores
- Organización de Estados Americanos/Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OEA/CICAD)
- Grupo Offshore de Supervisores Bancarios
- Oficialía de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos
- Banco Mundial (BM)
- Organización Mundial de Aduanas (WCO) (Association of Certified Anti – Money Laundering Specialists, 2010, p. 42)

1.4.3 40 + 9 Recomendaciones del Gafi

Las 40 recomendaciones han sido adoptadas en el sistema internacional como el sistema estándar de la lucha contra el lavado de dinero. Estas constituyen las herramientas más significativas con la que cuenta el Gafi. Tienen la intención de ser universalmente aplicable y por lo tanto, obliga a que los estados se adhieran y ejecuten las directrices de la normativa. Cubre cuestiones que van desde legislación criminal, pasando por regulaciones estatales, hasta incluir la cooperación interestatal.

Estas recomendaciones se encuentran divididas en 4 secciones:

- Sección a) Sistemas Legales: Alcance de aplicación del delito de blanqueo de capitales; Medidas provisionales y decomiso.
- Sección b) Medidas que deben adoptarse por las Instituciones Financieras y Empresas No Financieras y Profesiones para prevenir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: Diligencia debida del cliente y el mantenimiento de registros; Reporte de operaciones sospechosas y cumplimiento con las normas; Otras medidas para impedir el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo; Medidas que deben adoptarse con respecto a países que no cumplen o se ajusten insuficientemente a las recomendaciones del Gafi; Regulación y Supervisión.
- Sección c) Medidas Institucionales y otras medidas necesarias en los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: Autoridades competentes, sus poderes y recursos; Transparencia de las personas jurídicas y los acuerdos.
- Sección d) Co-operación Internacional: Asistencia legal mutua y extradición; Otras formas de co-operación. (Financial Action Task Force, 2013)

Ver ANEXO 1 – 40 Recomendaciones sobre lavado de activos.

9 Recomendaciones contra el financiamiento del Terrorismo

Los ataques del 11 de septiembre llamaron a un cambio radical en la agenda internacional. La respuesta del Gafi fue la inclusión de un grupo de 9 recomendaciones que modificarían la esencia del organismo para siempre.

En la actualidad, más que luchar por el lavado de dinero, el Gafi se concentra en derrotar al fenómeno del terrorismo. Las 9 recomendaciones especiales adhieren a los estados miembros y a los asociados a unirse en la lucha antiterrorista y a dirigir los recursos

necesarios para desarticular esta forma de crimen transnacional; en otras palabras, legitiman el régimen antiterrorista.

Las Recomendaciones Especiales hacen menciones específicas a dos documentos internacionales ratificados: la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Supresión de la Financiación del Terrorismo de 1999 y a la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establece al Gafi como el órgano competente para la lucha contra el terrorismo.

Además, al igual que el paquete de 40 recomendaciones reitera la necesidad de determinar la criminalidad del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo; otorga autoridad a las agencias competentes para que traten a los criminales y confisquen activos derivados del acto criminal y construye un marco para que se pueda transferir la información competente. Algo interesante que se añade en las recomendaciones Especiales es el trato de los envíos de remesas y la supervisión organizaciones sin fines de lucro. El Gafi sugiere la creación de un sistema de envío de remesas que adecuadamente investigue las transacciones de este tipo y un conjunto de herramientas para supervisar que organismos sin fines de lucro no financien el terrorismo. (Financial Action Task Force, 2013)

Ver ANEXO 2 – 9 Recomendaciones sobre el terrorismo

1.4.4 Grupos de Acción Financiera Regionales, Miembros y Organismos Asociados

Hay organismos regionales tipo GAFI o miembros asociados al GAFI que tiene forma y funciones similares a las del GAFI, muchos países miembros de GAFI también son miembros de estos organismos.

- Grupo sobre Lavado de Dinero de Asia/Pacífico (por sus siglas en inglés, APG)
- Grupo de acción Financiera Internacional del Caribe (por sus siglas en inglés, CFATF)
- Consejo del Comité Selecto de Europa de Expertos en la Evaluación de Medidas Antilavado de Dinero (por sus siglas en Inglés, MONEYAL) (Antes, PC-R-EV)

- Grupo Antilavado de Dinero de África del Este y del Sur (por sus siglas en inglés, ESSAAMLG)
- Grupo de Eurasia (por sus siglas en inglés, EAG)
- Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero en Sudamérica (GAFISUD)
- Grupo de Acción Intergubernamental en contra de Lavado de Dinero en África (GIABA)
- Grupo de Acción Financiera Internacional del Medio Oriente y África (por sus siglas en inglés, MENAFATF) (Financial Action Task Force, 2013)

Dentro de los miembros asociados se encuentran:

- Organización de las Naciones Unidas (ONU)
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
- Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito (UNODC)
- Colección de tratados de las Naciones Unidas (UN-Treaties) (Financial Action Task Force, 2013)

Organismos Regionales asociados son:

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (Financial Action Task Force, 2013)

Organismos Internacionales asociados son:

- Banco Mundial (BM)
- Fondo Monetario Internacional (FMI)
- Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI)

- Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)
- Grupo EGMONT (Egmont – Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera)
- Bank of International Settlement
- Unión Europea
- Grupo de 19 países industrializados y emergentes y la UE (G20)
- Centro de Supervisores del Grupo Internacional Financiero (GIFCS)
- Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
- Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS)
- Organización Mundial de Aduanas (WCO)
- Organización Mundial del Comercio (OMC)
- Banco Africano para el Desarrollo
- Banco de Asia para el Desarrollo
- Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD)
- Secretaría del Commonwealth
- Grupo Offshore de Supervisiones Bancarias (OGBS) (Financial Action Task Force, 2013)

1.4.5 Grupos regionales de América Central y de Sudamérica

1.4.5.1 Grupo de Acción Financiera Internacional del CARIBE

El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) es una organización integrada por treinta Estados de la Cuenca del Caribe. En 1990, en Aruba, los representantes de los países fundadores se reunieron con el fin de desarrollar un método común para luchar contra el blanqueo de capitales. En noviembre de 1992 se celebró en Jamaica una reunión a nivel ministerial que dio lugar a la llamada “Declaración de Kingston”, por la que los firmantes se comprometen a cumplir con los estándares internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales y se procede a la creación de la estructura estable de funcionamiento de la organización. (Orsi, 2007, pp. 176-178)

Ninguna solución global al problema mundial del lavado de dinero es posible sin la participación activa de las naciones del Caribe, dado que muchos son o han sido importantes centros de lavado.

Su proximidad a los mayores productores y exportadores de cocaína del mundo, en la región andina de América del Sur, y el mayor generador de dólares provenientes de la droga, Estados Unidos, convierten a la región en un blanco conveniente para muchos delinquentes internacionales, incluyendo a los traficantes de drogas.

El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC, o por siglas en inglés CFATF) fomenta los controles de lavado de dinero en la región del Caribe. El principal objetivo del Grupo de Acción es asegurar el cumplimiento efecto con sus recomendaciones para impedir y controlar el lavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo.

El grupo está formado por 30 estados de la Región del Caribe que han acordado implementar contramedidas comunes para considerar el problema del lavado de dinero criminal y el financiamiento del terrorismo. Fue creado como resultado de las reuniones realizadas en Aruba en mayo de 1992. Países como Canadá, Francia, México, Holanda, España, Reino Unido, y Estados Unidos actúan como “Naciones cooperadoras y de apoyo”.

En la reunión de Aruba, representantes del Caribe y América Central se reunieron para elaborar un enfoque común al lavado de fondos derivados de delitos. Se formularon diecinueve recomendaciones. Estas recomendaciones, que tienen una importancia específica para la región, son complementarias de las 40 Recomendaciones del GAFI. Las 19 recomendaciones de Aruba fueron elaboradas específicamente para cubrir los temas específicos relacionados con la Cuenta del Caribe. Esas recomendaciones fueron modificadas en 1999.

La Reunión Ministerial de Jamaica fue celebrada en Kingston, en noviembre de 1992. Los ministros emitieron la Declaración de Kingston en la que respaldaron y afirmaron el compromiso de sus gobiernos para implementar las Recomendaciones del GAFI y de Aruba, las Regulaciones Modelo de la OEA, y la Convención Contra el Tráfico Ilícito de

Drogas y Sustancias Psicotrópicas de la ONU de 1998. También resolvieron la creación de una secretaría.

La declaración recomendada que las leyes:

- Definan al lavado de dinero basándose en las leyes modelo publicadas por la Organización de Estados Americanos.
- Consideran el embargo y decomiso de fondos procedentes del tráfico de drogas y activos relacionados. Las leyes deberían permitir la identificación, rastreo y evaluación de la propiedad sujeta a decomiso, permitiendo órdenes de congelamiento.
- Permitieran la instancia judicial frente a órdenes de decomiso emitidas por un cuerpo administrativo.
- Permitan el decomiso en todos los casos que culminen en condena.
- Permitan a los tribunales decidir que “toda la propiedad obtenida durante un determinado período de tiempo por una persona condenada por tráfico de drogas ha estado derivada de dicha actividad criminal”.

Los términos de la declaración:

- Permiten la continuación de las cuentas numeradas en las instituciones financieras con el entendimiento de que la información de la cuenta debería estar a disposición de las “autoridades competentes”, si lo solicitaren, e insisten sobre la existencia de requisitos legales sólidos sobre la identificación del cliente.
- Insisten en que en las transacciones por montos elevados, los procedimientos de identificación del cliente y conservación de registros sean “obligatorios”

- Modifican las leyes de secretismo bancario para permitir el reporte de transacciones sospechosas por parte de las instituciones financieras, pero deja a opción de las naciones el decidir si se requiere una ley para ello.

El GAFIC monitorea la implementación por parte de sus miembros de las recomendaciones antilavado de dinero a través de las siguientes actividades:

- Autoevaluación de la implementación de las recomendaciones.
- Un programa constante de evaluación mutual de los miembros.
- Coordinación de, y la participación en, programas de capacitación y asistencia técnica.
- Reuniones plenarias cada dos años para los representantes técnicos.
- Reuniones ministeriales anuales.

1.4.5.2 Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD)

GAFISUD es un grupo regional perteneciendo a la red internacional de organismos dedicándose a la prevención y al combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Núcleo de ésta red es el GAFI/FATF con su sede dentro de la OCDE en París. Aquel organismo emite las 40 Recomendaciones que todos sus países miembros se obligan de implementarlas en ley nacional.

El GAFI/FATF cuenta con 36 países miembros y 8 grupos regionales como organismos asociados.

GAFISUD fue creado a semejanza del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adhiriéndose a las 40 Recomendaciones del GAFI como estándar internacional contra el

lavado de dinero y a las Recomendaciones Especiales contra la financiación del terrorismo más reconocido y prevenido el desarrollo de Recomendaciones propias de mejora de las políticas nacionales para luchar contra estos delitos. (Orsi, 2007, pp. 176-178)

GAFISUD es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la firma de Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo por los representantes de los gobiernos de diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, y Uruguay.

El Grupo goza de personalidad jurídica y estatus diplomático en la República Argentina donde tiene la sede su Secretaría. Sus órganos de funcionamiento son el Pleno de Representantes, el Consejo de Autoridades y la Secretaría del Grupo.

Cuenta, además, con el ofrecimiento del gobierno de Uruguay que ha puesto a disposición del Grupo su centro de Capacitación en materia de lavado de dinero de Montevideo.

Participan como observadores Alemania, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Egmont, España, Estados Unidos, FMI, Francia, INTERPOL, INTOSAI, Naciones Unidas y Portugal. También asisten a sus reuniones, como organizaciones afines, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre lavado de dinero (GAFI/FATF), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC/CFATF) y la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana para el Control del abuso de drogas (CICAD).

GAFISUD fue creado a semejanza del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adhiriéndose a las Cuarenta Recomendaciones del GAFI como estándar internacional contra el lavado de dinero más reconocido y a las Recomendaciones Especiales contra la

financiación del terrorismo, previendo el desarrollo de Recomendaciones propias de mejora de las políticas nacionales para luchar contra estos delitos.

GAFISUD ha sumado a su cometido la lucha contra la financiación del terrorismo, añadiendo este objetivo en su mandato de actuación contenido en el Memorando de Entendimiento y articulando un Plan de Acción contra la Financiación del Terrorismo. Este incorpora, además de las Recomendaciones Especiales del GAFI en la materia, los compromisos aquilatados en Naciones Unidas y una serie de líneas de actuación propias que atienden a la prevención del delito desde la perspectiva de las peculiaridades regionales.

El cumplimiento de los parámetros contenidos en las Cuarenta Recomendaciones, que GAFISUD ha hecho suyos, supone la vocación de conseguir los instrumentos necesarios para una política global completa para combatir este delito. Así pues, se persigue una actuación integradora de todos los aspectos legales, financieros y operativos y de todas las instancias públicas responsables de esas áreas.

Por ello, el compromiso se dirige a la tipificación del delito de lavado teniendo como delito subyacente no sólo el de narcotráfico sino otros delitos graves; la construcción de un sistema de prevención del delito que incorpora obligaciones para el sistema financiero de identificación del cliente y comunicación de operaciones sospechosas; la incorporación en los sistemas legales de las medidas que permiten perseguir eficazmente el delito en las fases de investigación y en el proceso; y el desarrollo de los más avanzados mecanismos de cooperación entre Estados para la investigación y persecución del delito.

1.5 ORGANISMOS ASOCIADOS A GRUPOS REGIONALES DE AMÉRICA

1.5.1 La CICAD

El origen de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el organismo antidrogas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se remonta a la "epidemia de cocaína" de fines de los años setenta y principios de los ochenta. Contra el telón de fondo de la explosión del uso de crack y el surgimiento de poderosos carteles de tráfico de drogas, así como de las crecientes recriminaciones entre el Norte y el Sur acerca

de quién era "responsable" del problema, la Asamblea General de la OEA convocó a los ministros de justicia de la región a reunir a la Primera Conferencia Interamericana Especializada sobre Narcotráfico, que se celebró en Río de Janeiro en abril de 1986.

En la conferencia, los ministros llegaron rápidamente al consenso de que el enorme incremento del tráfico y el abuso de drogas ilícitas observado desde fines de los años setenta no solo se había convertido en una importante amenaza para la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino que representaba un problema de seguridad para todo el Hemisferio. Los ministros también aprobaron el Programa Interamericano de Acción de Río de Janeiro contra el Consumo, la Producción y el Tráfico Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y recomendaron que la Asamblea General de la OEA creará la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD, 2013).

La misión principal de la CICAD es fortalecer las capacidades humanas e institucionales y aprovechar los esfuerzos colectivos del estado miembro para reducir la producción, el tráfico y el uso de drogas ilegales en América.

Adicionalmente la CICAD:

- Actúa como el foro político del hemisferio occidental en todos los aspectos relacionados con las drogas;
- Fomenta la cooperación multilateral sobre temas de drogas en América;
- Ejecuta programas de acción para fortalecer la capacidad de los estados miembro para impedir y tratar el abuso de drogas, combatir la producción y el tráfico de drogas ilícitas e impedir el acceso de los traficantes a los fondos mal habidos;
- Promueve la investigación relacionada con las drogas, el intercambio de información, la capacitación especializada, la asistencia técnica; y
- Elabora y recomienda estándares mínimos para las leyes relacionadas con las drogas, su tratamiento, la medición tanto del consumo de drogas como del costo que el

consumo de drogas tiene para la sociedad, y medidas para controlar las drogas, entre otras.

Dentro la CICAD se encuentra la Unidad Antilavado de Dinero (por sus siglas en inglés, AMLU), creada en 1999. La Unidad focaliza sus esfuerzos en proveer asistencia técnica y capacitación a todos los estados miembro en las medidas judiciales y financieras y en el control legal. También actúa como Secretaría del Grupo de Expertos para Controlar el Lavado de Dinero de la CICAD.

Dicho grupo de constituyen el foro hemisférico en el cual se debaten, analizan y se llegan a conclusiones sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. A través del Grupo de Expertos, se elaboran Regulaciones Modelo sobre delitos de lavado de dinero relacionados con el tráfico de drogas y otros delitos. Estas regulaciones sirven como documentos legales permanentes dando un marco legal a los estados miembro. Ellas fueron influenciadas por y son compatibles con las Recomendaciones del GAFI.

Su prólogo deja en claro que también fueron elaboradas prestando atención a su consistencia con las normas de lavado de dinero y decomiso de bienes de la Convención Contra el Tráfico Ilegal de Drogas Narcóticas de las Naciones Unidas. Todas las naciones que ratifiquen esta Convención están obligadas a implementar sus normas mediante reformas legislativas y administrativas.

Las propuestas de la OEA son mucho más detalladas y específicas que las de la Convención de la ONU sobre el tema del lavado de dinero. Cuando sean implementadas en el hemisferio, su impacto sobre la industria de servicios financieros, las agencias de control legal, los tribunales y los lavadores de dinero podrían ser considerables.

El trabajo de la CICAD sobre las Regulaciones modelo no se realiza sin obstáculo. Uno es la variedad de sistemas legales existente entre las naciones del hemisferio. La mayoría de los sistemas legales fueron heredados de, y están fuertemente influenciados por sus colonizadores, incluyendo a España, Inglaterra, Francia, Portugal e incluso Holanda.

En los últimos años se estableció una relación entre la CICAD – AMLU y el Banco Interamericano de Desarrollo (por sus siglas en inglés, IADB) elaborar programas y

proyectos que podría asumir en forma conjunta en la región. En 1999 el IADB – CICAD comenzaron un programa en ocho países de América del Sur para capacitar a empleados de instituciones financieras y de las instituciones responsables de la supervisión financiera sobre el control del lavado de dinero. En 2001 se elaboró y ejecutó otro programa para jueces y fiscales entre ocho países, y en 2002 comenzó un proyecto a largo plazo para establecer Unidades de Inteligencia Financiera en Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay, y Venezuela.

Además, la Unidad Antilavado de Dinero de la CICAD tiene la capacidad de elaborar, supervisar y ofrecer asistencia técnica y cursos de capacitación relacionados con el marco legal del lavado de dinero, sea a través del análisis o la elaboración de leyes, o de su aplicación (control legal). La CICAD lanzó un programa de capacitación conjunto llamado “Simulacro de Juicio sobre Lavado de Dinero” en varios países de América Latina.

Otros esfuerzos de la CICAD incluyen:

- **Banqueros y Reguladores:** Creado con el IADB en 1999, fue elaborado para brindar capacitación y asistencia técnica a las entidades financieras en la formulación de tipologías de lavado de dinero encontradas en las Instituciones Financieras.
- **Jueces y Fiscales:** Elaborado entre 1990 – 2002 junto con las autoridades españolas y coordinado con el IADB, busca capacitar a los cuerpos judiciales nacionales sobre las técnicas de lavado de dinero y su penalización.
- **Unidades de Inteligencia Financiera:** Este programa, coordinador por la CICAD y el BID, busca elaborar y crear, a través de la asistencia técnica y la capacitación, instituciones que puedan analizar y controlar los esfuerzos del crimen organizado para lavar activos. La capacitación y asistencia serán brindadas en las áreas legal, instituciones, de capacitación y tecnológica.
- **Capacitación sobre Control de Lavado de Dinero:** Las agencias de control legal serán capacitadas en: 1) Técnicas estratégicas para facilitar las investigaciones financieras

que reducen los fondos procedentes de delitos serios y mejoran los juzgamientos por delitos de lavado de dinero/ financiamiento del terrorismo, 2) decomiso de propiedades relacionadas con esos delitos.

1.5.2 Grupo EGMONT

El Grupo Egmont es un organismo internacional que agrupa 131 Unidades de Inteligencia Financiera del mismo número de países del mundo.

Este organismo establece que una Unidad de Inteligencia Financiera es aquella agencia central nacional, encargada de recibir (y, si lo tiene permitido, solicitar), analizar y disseminar a las autoridades competentes información financiera relacionada con fondos de los que se sospeche un origen delictivo, con el fin de combatir el Lavado de Dinero y, en su caso, el Financiamiento al Terrorismo. (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2012)

En 1995, un número de unidades de inteligencia financiera (UIFs) nacionales comenzó a trabajar en conjunto en una organización informal conocida como Egmont (designado por la localidad de la primera reunión el Palacio Egmont – Arenberg en Bruselas - Bélgica).

El objetivo del grupo es promover la creación de UIFs y estimular el intercambio para superar los obstáculos que desalienten el uso compartido de información a nivel internacional.

Basado en el trabajo de su Grupo de Trabajo Legal, el Grupo Egmont aprobó en 1996 la siguiente definición de la UIF que fue modificada en 2004 para reflejar el rol de la UIF en el combate contra el financiamiento del terrorismo:

- Una agencia central, nacional responsable por la recepción, (y, cuando se permita, de la solicitud) análisis e información a las autoridades competentes, de la divulgación de información financiera:
 - Referida a fondos sospechosos de provenir de delitos y del posible financiamiento del terrorismo, o

- Requerida por la legislación o regulación nacional, a fin de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

En 1999, el grupo de Trabajo sobre Capacitación del Grupo Egmont asumió una iniciativa para reunir los casos derivados de la lucha contra el Lavado de Dinero recibidos por las UIFs de los miembros del Grupo Egmont.

En 2001, el grupo publicó un documento, “Principios para el Intercambio de Información entre las Unidades de Inteligencia Financiera para Casos de Lavado de Dinero “, que establece guías para el uso compartido de información entre las UIFs.

En 2004 el grupo publicó las “Mejores prácticas para el Intercambio de Información entre las Unidades de Inteligencia Financiera”.

Hay más de 100 UIFs miembros del Grupo de Egmont.

1.5.2.1 Países que conforman el Grupo Egmont

La lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo gana cada día más adeptos al aumentar a cien los países que han creado UIFs para combatir estos delitos transnacionales.

Antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 apenas catorce naciones habían puesto en vigor esas unidades, mientras que otros países cuando se les mencionaba que debían incluirlas en sus estrategias de combate, se mostraban renuentes.

Las unidades de inteligencia financiera se encargan del análisis, tratamiento y transmisión de información sobre transacciones sospechosas y otros datos relacionados con el lavado de dinero.

Desde 1995 algunas UIFs alrededor del mundo que fueron establecidas para que los países tuvieran un ente centralizado donde recibir, revisar y hacer más disponible a las autoridades financieras los informes de las transacciones.

Entre el centenar de naciones hay más de veinte de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el sitio de internet del Grupo Egmont, que contiene datos actualizados hasta noviembre del año pasado.

Para profundizar en este aspecto las autoridades estadounidenses están buscando ampliar el intercambio de datos entre las entidades financieras, así como en el mejoramiento de la transparencia en relación con las transacciones financieras internacionales.

Anexo 3 - Los países que conforman el Grupo Egmont.

1.5.3 Grupo WOLFSBERG

El Grupo Wolfsberg es una asociación de 12 bancos globales que tiene como objetivo elaborar estándares para la industria de servicios financieros y los productos relacionados con los mismos, para las políticas Conozca Su Cliente, Antilavado de dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo. (Association of Certified Anti – Money Laundering Specialists, 2010, pp. 36,42)

El Grupo se reunió en 2000 en el castillo Wolfsberg en Suiza, acompañado por los representantes de Transparencia Internacional, para elaborar guías antilavado de dinero para la banca privada que, si fueren implementadas por los bancos a nivel mundial, marcarían un accionar sin precedentes en el sector privados sobre el lavado de los fondos procedentes de la corrupción.

Sus principios no tienen fuerza de ley y no se aplican sanciones a quienes no se obliguen por ellos.

Los principios Antilavado de Dinero para la Banca Privada del Grupo Wolfsberg fueron publicados en octubre de 2000 y revisados en mayo de 2002. Estos principios recomiendan controles para la banca privada que van desde lo básico, como la identificación de los clientes, hasta lo más innovador, como el escrutinio reforzado para los individuos que tienen o hayan tenido cargos de confianza pública. Los bancos que han publicado los principios con Transparencia Internacional dicen que ellos presentarían

dificultades a los individuos que depositen fondos mal habidos en el sistema bancario mundial.

Los bancos que participaron en la preparación de principios incluye al Credit Suisse Group, uno de las instituciones en el centro de una investigación en curso sobre lavado de dinero que involucra al dictador de Nigeria Sani Abacha, y el Citibank, N.A., a que el Congreso de EE.UU. investigó en 1999 por su manejo de las cuentas de banca privada para Abacha y otros funcionarios públicos. Otros bancos incluidos son el ABN AMRO Bank N.V.; Barclays Bank; Banco Santander Central Hispano S.A.; Chase Manhattan Corporation; Deutsche Bank AG; HSBC; J.P. Morgan Inc.; Societe Generale; y el UBS AG.

Los principios establecen que los bancos procurarán aceptar solamente a aquellos clientes cuya fuente de riqueza y fondos puede ser establecida razonablemente como legítima, ellos destacan la necesidad de identificar al dueño beneficiario de los fondos para todas las cuentas cuando esa persona sea distinta de la del cliente, y urgen a los banqueros privados a aplicar la diligencia debida sobre los gerentes monetarios e intermediarios similares para establecer que los intermediarios hayan cumplido un proceso de debida diligencia satisfactorio para sus clientes o una obligación regulatoria para ejecutar dicha debida diligencia. Los principios recomiendan que al menos una persona distinta de la del banquero privado debiera aprobar todos los clientes y cuentas nuevas.

Los principios listan varias situaciones que requieren una diligencia debida adicional, incluyendo actividades que involucren a:

- Funcionarios públicos, incluyendo individuos que tienen o han tenido cargos de confianza pública y sus familias y asociados cercanos.
- Países de alto riesgo, incluyendo a países identificados por fuentes dignas de crédito por tener estándares antilavado de dinero inadecuados o que representan un alto riesgo de delitos y corrupción.

- Actividades de alto riesgo, que involucren a clientes y dueños beneficiarios cuya fuente de riqueza “emana de actividades conocidas como susceptibles al lavado de dinero.”
- Jurisdicciones offshore, las que no son definidas por los principios.

Los principios Wolfsberg establecen que los bancos deberían tener políticas escritas sobre la identificación y seguimiento de actividades inusuales o sospechosas e incluyen una definición de qué es sospechoso y ejemplos de tal actividad. Ellos recomiendan un sistema de monitoreo “suficiente” que utilice el conocimiento del banquero privado sobre los tipos de actividad que serían sospechosos para determinados clientes. También resumen mecanismos que pueden ser utilizados para identificar actividades sospechosas, incluyendo reuniones, análisis y visitas al país de los clientes, y las medidas que deberían tomarse cuando se detecta actividad sospechosa.

Los principios también se refieren al:

- Reporte a la gerencia acerca de temas de control de lavado
- Capacitación ALD
- Conservación de documentos relevantes
- Desviaciones de la política establecida
- Creación de un departamento de control de lavado y de una política de control de lavado

Transparencia Internacional y los bancos anticipan que los principios serán ampliamente aceptados por un número creciente de instituciones financieras

En mayo de 2002, fueron revisados los Principios Wolfsberg y se agregó una sección prohibiendo el uso de las cuentas internas para no clientes (a veces conocidas como cuentas de concentración) para impedir que los clientes estén relacionados con el movimiento de fondos en su nombre, Ej., los bancos deberían prohibir tales cuentas internas de una forma tal que no se impida que los oficiales monitoreen adecuadamente los movimientos de fondos de los clientes.

El Grupo Wolfsberg también publicó guías a comienzos de 2002 sobre: “La Supresión de la Financiación del Terrorismo” delineando los roles de las instituciones financieras en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Las recomendaciones del Grupo Wolfsberg incluyen:

- Brindar lista oficiales de sospechosos de ser terroristas sobre una base coordinada globalmente por las autoridades correspondientes.
- Incluir información adecuada en las listas para ayudar a las instituciones a investigar en la bases de datos de clientes de manera eficiente.
- Responder rápidamente a las instituciones luego de iniciarse la circulación de las listas oficiales.
- Información sobre la manera, medios y métodos utilizados por terroristas.
- Elaboración de guías gubernamentales para los sectores y actividades comerciales identificadas como de alto riesgo de financiación del terrorismo.
- Elaboración de formatos globales uniformes para transferencias de fondos que asistan en la detección del financiamiento del terrorismo.

El Grupo recomienda que las instituciones financieras estén protegidas por inmunidad de Puerto seguro para alentarlas a que compartan información y la reporten a las autoridades.

El Grupo Wolfsberg también se comprometió a restringir las relaciones comerciales con los negocios de remesas, casas de cambio, y agentes de transferencia de dinero, y comprometió a sus miembros a que tomen medidas mejoradas de debida diligencia para los clientes de alto riesgo o aquellos sectores y actividades de alto riesgo, como los negocios bancarios subterráneos, o sistemas alternativos de remesas.

En 2002, el Grupo Wolfsberg publicó una guía llamada “Principios Antilavado de Dinero para la Banca Corresponsal” que delinea los pasos que las instituciones financieras deberían tomar para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a través de la banca corresponsal.

Las cuentas corresponsales son cuentas establecidas por una institución financiera para mantener depósitos, realizar pagos en su nombre, o procesar otras transacciones. Las 14 guías del Grupo Wolfsberg se aplican a todas las relaciones de banca corresponsal que una institución mantenga, incluyendo a aquellas con bancos, corredores de valores, fondos mutuos, negocios de servicios monetarios, fondos de protección y emisores de tarjetas de crédito.

Entre las recomendaciones más destacadas se encuentran:

- La diligencia debida debería estar basada en el riesgo, dependiendo de la localidad, tipo de negocio, propiedad, base de clientes, condición regulatoria y controles ALD del cliente o negocio de banca corresponsal.
- La institución no debería ofrecer sus productos o servicios a bancos de pantalla.
- Generalmente, los nuevos principios no deberían aplicarse a los bancos centrales y las autoridades monetarias de los países miembro o del GAFI o de instituciones multinacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.
- Toda la información de los clientes de banca corresponsal debería ser revisada y actualizada periódicamente basándose en los factores de riesgo.
- Los principios deberían ser parte de un programa ALD más amplio de la institución financiera.

Además, el Grupo Wolfsberg recomendó la creación de un registro internacional de instituciones financieras con información útil para realizar la debida diligencia. La premisa básica del registro es simple: en lugar de solicitar información a cada institución

individual, y en lugar de entregar esta información a cada corresponsal, la información necesaria de la debida diligencia sería centralizada en un registro global. Las instituciones financieras serían responsables por la provisión y mantenimiento de la información exacta, completa y actualizada en el registro.

Eso permitiría obtener la información sobre los clientes de banca corresponsal, y se notificaría sobre cualquier actualización importante referida a esos clientes.

El Grupo Wolfsberg ha hecho progreso con la elaboración de dicho registro, habiendo identificado la información que sus miembros quisieran ver incluida en el mismo. Incluye copias de los estatutos de constitución de la compañía, las habilitaciones correspondientes, extractos de los registros comerciales o certificados de constitución, los informes anuales más recientes, la información sobre los accionistas con tendencias superiores al 5%, curriculums de los miembros de la junta y de la gerencia superior, información sobre las políticas y procedimientos CSC y ALD de cada institución financiera, etc. La Iniciativa está dirigida a la estandarización de la información de la diligencia debida, que en si misma tiene un potencial de ahorro en costos y tiempo dedicado a obtener la información en una variedad de fuentes.

El Grupo de Wolfsberg, que no tiene facultades de aplicación publicó las guías para administrar los riesgos de sus miembros, ayudarles a tomar decisiones acertadas sobre sus clientes y proteger a sus operaciones del abuso criminal.

El Grupo emitió un comunicado sobre monitoreo, detección y búsqueda en septiembre de 2003. Este documento describe la necesidad de monitoreo apropiado de transacciones y clientes para identificar actividades y transacciones potencialmente sospechosas, y para reportar las mismas a las autoridades pertinentes. En particular, cubre asuntos relacionados al desarrollo de procesos para monitoreo basado en riesgo, detección y búsqueda re transacciones y clientes.

1.5.4 Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional

El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos financieros que tienen consecuencias económicas. Pueden amenazar la estabilidad del sector financiero de un

país o su estabilidad externa en general. Los regímenes eficaces de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son esenciales para salvaguardar la integridad de los mercados y del marco financiero mundial, ya que ayudan a mitigar factores que propician abusos financieros. Las medidas para evitar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, por lo tanto, responden no solo a una imperativa moral sino a una necesidad económica.

La comunidad internacional ha dado prioridad a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Al FMI le preocupa especialmente la manera en que el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras cuestiones relacionadas con la gestión de gobierno pueden incidir en la integridad y estabilidad del sector financiero, así como en la economía en sentido más amplio. Estas actividades pueden menoscabar la integridad de las instituciones y los sistemas financieros, desalentar la inversión extranjera y distorsionar los flujos internacionales de capital. Pueden incidir negativamente en la estabilidad financiera y la evolución macroeconómica de un país al disminuir el bienestar, al desviar recursos de actividades económicas más productivas e incluso al generar efectos de contagio desestabilizadores en las economías de otros países. En un mundo cada vez más interconectado, los efectos negativos de estas actividades son de alcance mundial, y su impacto en la integridad y la estabilidad financiera de los países es ampliamente reconocido. Quienes blanquean dinero se aprovechan de la complejidad inherente del sistema financiero mundial y de las diferencias que existen entre las leyes y los sistemas nacionales de prevención, y se sienten especialmente atraídos por jurisdicciones con controles deficientes o ineficaces hacia donde es más fácil transferir sus fondos sin detección. Además, los problemas en un país pueden propagarse rápidamente al resto de la región o a otras partes del mundo. (Fondo Monetario Internacional, 2012)

Los poderosos Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial han decidido dar un pequeño paso para superar la resistencia de ciertas naciones para unirse a la batalla internacional contra el lavado de dinero. Desde 2001 las dos instituciones han requerido a los países que se benefician de sus programas de asistencia financiera y estructural que tengan controles antilavado de dinero efectivos. Esa insistencia ha resultado en un progreso mundial sobre ese tema que de lejos supera los logros del relativamente imponente Grupo de Acción Financiera Internacional.

En un documento de política conjunta de abril de 2001 titulado “Mejorando los Aportes para Combatir el Lavado de Dinero”, las dos organizaciones detallaron los pasos que pueden tomar para reforzar el ataque global contra el lavado de dinero.

La presión sobre el FMI y el Banco Mundial para que participen en los esfuerzos ALD ha estado acumulándose durante varios años. Los ministros de finanzas del Grupo de los Siete países industrializados les pidieron a las dos que retengan la asistencia a naciones que se rehúsen a colocar sus controles de lavado en línea con los estándares internacionales.

En septiembre de 2001 el FMI y el Banco Mundial, respondiendo a la urgencia por integrar completamente la batalla contra el lavado de dinero y otros delitos financieros a sus ejercicios y programas de vigilancia, comenzaron a actuar. Ese mes, el Comité Monetario y Financiero Internacional (por sus siglas en inglés IMFC), los asesores de la junta de gobernadores del FMI, emitieron un comunicado que decía que “exploraría la incorporación de trabajo sobre el abuso financiero, especialmente con respecto a los esfuerzos internacionales contra el lavado de dinero, en sus numerosas actividades, según fuera relevante y apropiado”.

El IMFC le pidió al FMI y al Banco Mundial que preparen un documento adjunto delineando sus roles apropiados en la tarea y sugiriendo como integrar su trabajo. En respuesta a ello, un documento previo del FMI titulado”, Abuso del Sistema Financiero, Delito Financiero y Lavado de Dinero”, exploró cómo las instituciones podían “jugar roles en la protección de la integridad del sistema financiero internacional frente al abuso” a través del uso de sus influencias para promover programas nacionales anti-corrupción.

Desde entonces, el FMI y el Banco Mundial han estado más activos en el combate del lavado de dinero por medio de:

- La concentración en el lavado de dinero por sobre otras formas de abuso financiero.
- La ayuda para reforzar la “supervisión y regulación financiera” en los países.
- La interacción más cercana con la OECD y el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria.

- La insistencia sobre la aplicación de estándares ALD internacionales en los países que solicitan asistencia.

En una reunión conjunta realizada en abril de 2004 de sus juntas de directores, ambas entidades acordaron adoptar sobre una base permanente su programa piloto para evaluar el cumplimiento de una nación con los estándares internacionales antilavado de dinero y anti financiamiento del terrorismo. El programa pondrá fin a la práctica del Grupo de Acción Financiera Internacional de dar a conocer los Países y Territorios NO Cooperadores (por sus siglas en inglés, NCCT).

El Banco Mundial y el FMI han establecido un marco de colaboración con el GAFI para realizar evaluaciones amplias, utilizando una metodología global única, sobre el cumplimiento de los países con las 40+ 9 Recomendaciones del GAFI en sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). Las evaluaciones son realizadas como parte del Programa de Evaluación del Sector Financiero y culminan en un Informe sobre la Observancia de Estándares y Códigos.

En 2002, el Banco Mundial y el FMI elaboraron una Guía única de Referencia sobre el Antilavado de Dinero (ALD) y el Combate Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) en un esfuerzo por dar pasos prácticas para que los países implementen regímenes ALD/CFT de acuerdo con los estándares internacionales. La Guía describe el problema global del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la preparación de la agenda de los países y en las regiones. Explica los elementos básicos que crean un marco legal e instituciones ALF/CFT efectivos y resume el rol del Banco Mundial y del FMI en esos esfuerzos.

1.5.5 FELABAN

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, es una institución sin fines de lucro, constituida en 1965 en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina. Agrupa, a través de sus respectivas asociaciones en 19 países del continente, a más de 500 bancos y entidades financieras de América Latina. (Federación Latinoamericana de Bancos, 2013)

La Federación Latinoamericana de Bancos – FELABAN - ha desempeñado un importante papel en el continente latinoamericano. En efecto la FELABAN suscribió el 18 de marzo de 1996 una Declaración sobre la Prevención del Uso Indebido del Sistema Financiero en el Lavado de Activos provenientes del Narcotráfico y de otras Actividades Ilícitas, en la cual se establecieron los siguientes principios:

- Colaborar con los miembros activos de FALABAN y las autoridades gubernamentales en la formulación y adopción de normas de prevención.
- Promover el intercambio de información general, métodos y otros aspectos técnicos que puedan ser de utilidad para las asociaciones y organismos miembros.
- Poner a sus miembros activos que sugirieran a sus afiliados la adopción de políticas de prevención de lavado de activos.
- El establecimiento de códigos de conducta, los cuales deben incluir las normas de prevención, el conocimiento de las velocidades y la aplicación de sanciones.
- El asesoramiento a los afiliados en el marco general de aplicación de las medidas.

Para efectos de desarrollar los principios atrás mencionados, FELABAN creó un comité latinoamericano para la prevención y control del lavado de activos, el cual fue conformado inicialmente por las asociaciones bancarias de Panamá, Colombia, Chile y Brasil.

Dicho Comité, presentó en Panamá, el 30 de agosto de 1996, una Declaración, la cual contiene diversas recomendaciones para la prevención de lavado de activos. Igualmente, el Comité presentó una guía práctica para la prevención del lavado de activos, cuya base fueron las recomendaciones y acuerdos de las asociaciones bancarias latinoamericanas.

Las recomendaciones van dirigidas a la elaboración y actualización de señales de alerta que faciliten y permitan la detección de operaciones inusuales o sospechosas, la autorregulación como mecanismo fundamental en la lucha contra el lavado de activos, la colaboración y concertación con las autoridades para la expedición de normas tendientes a

prevenir el lavado de activos, el desarrollo de programas de capacitación y la extensión de la aplicación de las normas de prevención a entidades no financieras.

Posteriormente, a través de los Comités correspondiente, FELABAN ha continuado efectuando importantes esfuerzos para la difusión e implementación de mecanismos efectivos de control del lavado de activos en el sector financiero latinoamericano, desarrollando un papel de especial liderazgo en esta materia.

Adicionalmente, FELABAN ha hecho presencia en diferentes foros internacionales sobre este tema. Es así como ha participado en representación de la banca latinoamericana en algunas de las reuniones del GAFI. (Documento presentado en la reunión del GAFI del mes de mayo de 1998 en Bruselas).

1.5.5.1 Objetivos y contenido del trabajo de investigación

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, ha considerado de principal importancia efectuar una recopilación de la totalidad legislación existente sobre lavado de activos en los países latinoamericanos miembros de la Federación.

El propósito del trabajo es brindar una visión global sobre la legislación vigente en Latinoamérica en relación con la detección y prevención de lavado de activos, en los aspectos más sobresalientes de la misma.

Igualmente, se persigue tener un marco comparativo adecuado sobre la materia, que abarque todos o la mayoría de los países de habla hispana del continente.

De esta forma, los sectores financieros latinoamericanos contarán con una importante herramienta para efectuar estudios y análisis de este aspecto del mundo bancario.

Es así como presenta de manera completa y sistematizada la totalidad de la legislación vigente interna sobre prevención y detección de lavado de activos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, República Dominicana, Panamá, Venezuela, México, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Cuba, Honduras, Brasil, Guatemala y Paraguay.

1.5.6 Legislación Internacional

Además de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se analizarán durante este curso, existen tres piezas de legislación, también internacionales, que se consideran importantes para un mejor entendimiento del problema de lavado de activos:

- La Convención de Palermo
- La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
- La Ley (estadounidense) del Secreto Bancario

1.5.6.1 La Convención de Palermo

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional es un instrumento jurídico internacional que obliga a los Estados miembro a diseñar estrategias contra el crimen organizado, tanto económicas como de control administrativo y penal. (Orsi, 2007, pp. 155-156)

Compromete a los participantes a desarrollar sus respectivas legislaciones nacionales, en convergencia hacia un conjunto mínimo de principios esenciales para articular una respuesta internacional hacia un problema global con particularidades locales.

El Objetivo principal de la Convención de Palermo es promover la cooperación para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

El Alcance comprende básicamente la cooperación internacional de los países miembros así como a personas de grupos delictivos organizados conocidos como “arrepentidos”, en virtud de que la participación de estos sujetos ha demostrado ser eficaz en la desactivación de dichas entidades criminales.

Asimismo, abarca las actividades de prevención, investigación y enjuiciamiento para evitar o mitigar a su mínima expresión en su ámbito transnacional los siguientes delitos:

- Participación en grupos delictivos organizados
- Blanqueo del producto del delito
- Corrupción
- Obstrucción de la justicia
- Delitos graves cometidos por organizaciones delictivas transnacionales.

Medidas Preventivas

En materia de blanqueo de capitales, las disposiciones de la Convención no se limitan al desarrollo de medidas de último recurso, sino que se incluyen las de naturaleza preventiva, como reconocimiento de la vulnerabilidad de los servicios bancarios y financieros a su uso ilícito por los sujetos activos del delito de lavado de activos. (Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, 2000)

Destaca así la obligación de los Estados miembro para desarrollar, implementar y verificar el cumplimiento de un sistema preventivo por parte de los actores del sistema bancario y financiero.

Dicho sistema se encuentra estructurado en torno a los siguientes principios rectores:

- Elaboración y registro de reportes de operaciones bancarias o financieras en sospecha de estar relacionados con el lavado de activos.
- Cumplimiento de requisitos relativos a la identificación del cliente.
- Denuncia de las transacciones sospechosas.

La implementación del primer principio representa un costo a la infraestructura ya que los actores del sistema bancario y financiero de un Estado estarán obligados a registrar y conservar todas las operaciones seleccionadas durante determinado periodo.

El segundo principio implica diseñar e instrumentar una serie de procedimientos cuyo objeto es dar certidumbre a la institución sobre el usuario regular de sus servicios bancarios o financieros.

El tercero establece el compromiso de los operadores a vincular el sistema preventivo, con el de control penal, en los casos que así se determine necesario, mediante denuncia.

El desarrollo de este sistema requiere además en los Estados miembro de la implementación de una entidad denominada Unidad de inteligencia Financiera (UIF), definida genérica y funcionalmente como “dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de fondos”.

Protección de Personas

La protección de testigos de proceso penales contra la delincuencia organizada transnacional, garantiza la integridad de los sujetos denunciadores ante la amenaza de muerte de que son objeto. (Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, 2000)

Es necesario precisar que las personas a proteger, de acuerdo con la Convención, puede ser de dos clases:

- Víctimas
- Miembros arrepentidos de la delincuencia organizada transnacional

La principal contribución a la investigación penal de las personas protegidas consiste en su testimonio y aportación de pruebas fehacientes sobre las personas que desempeñan funciones directivas, administrativas o de supervisión en las estructuras delictivas transnacionales.

Cada Estado miembro queda por lo tanto obligado a considerar la posibilidad de prever, en los casos apropiados y de conformidad con su Derecho interno, las siguientes medidas cooperativas:

- La mitigación de la pena de las personas acusadas que presten una cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento.

- La concesión de inmunidad judicial a las personas que presten una cooperación sustancial en la investigación.
- La protección física de las personas en el lugar más apropiado que se establezca por las partes involucradas.

La Convención estuvo abierta a la firma de todos los Estados a finales del 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fecha en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.

En materia de solución de controversias destaca un mecanismo de mediación especial: Toda controversia entre dos o más Estados miembro acerca de la interpretación o la aplicación de la Convención que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados miembro, someterse a arbitraje.

1.5.6.2 El Comité de Basilea

Este Comité se integró por los gobernadores de los bancos centrales del G-10, desde 1974. La misión más importante hasta la fecha ha sido vigilar el estricto apego a la política “Conozca a su cliente”.

El Comité normalmente se reúne en el Banco de Pagos Internacionales (BPI) y sus siglas en inglés (BIS) Basilea, Suiza, donde se encuentra su Secretaría permanente.

Actualmente el Comité de Basilea está constituido por representantes de las autoridades de supervisión bancaria de los bancos centrales de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, y dos países más que no son miembros del G-10, Luxemburgo y España. El Banco de España es miembro de pleno derecho desde 2001. (Wikipedia, 2013)

Los países están representados por su banco central y también por la autoridad regulatoria bancaria correspondiente en los casos donde no hay banco central. El Comité no tiene autoridad de supervisión supranacional y solo emite guías amplias de supervisión y hace recomendaciones sobre las mejores prácticas para la actividad.

El Comité para la reglamentación bancaria y las prácticas de vigilancia de Basilea dio a conocer una Declaración de Principios, cuyo objetivo es impedir que los bancos y otras instituciones financieras sean utilizados para transferencia o depósitos de fondos de procedencia ilícita.

La Declaración básicamente tiene está relacionada con la identificación de la clientela, observancia de las leyes, colaboración con las autoridades judiciales y de policía y adhesión a las declaraciones. (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, 2013)

1.5.6.3 La CICAD y la Inteligencia Financiera

Ver explicación en el punto 1.4.7.

1.5.6.4 La Ley de Secreto Bancario (Estados Unidos de Norteamérica)

La Ley de Secreto Bancario (BSA por sus siglas en inglés) fue promulgada por el Congreso en 1970 para combatir el lavado de dinero y otros crímenes financieros.

La BSA requiere que muchas instituciones financieras creen “rastros de papel”, llevando registros y presentando informes de ciertas transacciones. Estos informes son presentados a la Red Contra los Delitos Financieros (FINCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. FINCEN recolecta y analiza la información para apoyar los esfuerzos de investigación de las agencias de la ley y el orden y para proporcionar a las personas que elaboran las políticas de los Estados Unidos análisis estratégicos de desarrollos, tendencias y patrones de lavado de dinero a nivel doméstico e internacional. Las disposiciones de informe y archivo de la BSA aplican a bancos, instituciones de ahorro y préstamo uniones de crédito al igual que a otras instituciones financieras, incluyendo empresas de servicios monetarios (MSBs). FINCEN, 2007.

El literal a, del inciso 2^a, de la sección 5340, del Título 31 de la Ley del Secreto Bancario, establece que el lavado de dinero y crimen financiero relacionado significa el movimiento de efectivo, o del equivalente en efectivo de las ganancias de Estados Unidos de Norteamérica, fuera de él o a través de las instituciones financieras.

Esta Ley también conocida como la Ley de Reporte de Transacciones de Divisas, pide a las instituciones financieras, localizadas en Estados Unidos, que colaboren con las diferentes oficinas del gobierno de ese país en la detección y prevención de lavado de dinero.

La ley en mención fue aprobada por el congreso estadounidense en 1970. Una parte de ella, contiene una serie de normas para evitar, monitorear y dar aviso a las autoridades correspondientes, sobre transacciones que pudieran caer en la órbita del lavado de activos. (State Trush Bank, 1970).

1.5.6.5 Ley Usa Patriot

Originada en los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la necesidad urgente de descifrar y desarmar los mecanismos que financian al terrorismo, el Congreso de Estados Unidos promulgó legislación para fortalecer a las leyes de lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario a niveles nunca vistos desde la aprobación de la Ley de Secreto Bancario desde 1970 y la primera Ley de antilavado en el mundo en 1986. (Association of Certified Anti – Money Laundering Specialists, 2010, pp. 92-94)

La ley USA Patriot en octubre de 2001, fue la ley de EE.UU. que tuvo mayor alcance en 70 años. Otorga al Gobierno de Estados Unidos la capacidad de alcanzar los activos de toda institución financiera y negocio en el mundo y de anular la capacidad de operar en Estados Unidos.

Como se mencionó en el punto anterior la Ley de Secreto Bancario, establece que “lavado de dinero y crimen financiero relacionado significa el movimiento de efectivo, o del equivalente en efectivo de las ganancias en ese país, fuera de, o a través de las instituciones financieras.

La amplitud del concepto legal de institución financiera se extiende hasta comprender que: una persona que actúa por cuenta de otra como institución financiera, depositario, o agente, o que actúa de manera similar, en relación a dinero, crédito, valores, oro, o transacción en dinero, crédito, valores u oro.

Pero también institución financiera significa banco en los términos de la Ley Federal de Seguro de Depósitos, un banco con depósitos asegurados, un banco comercial o trust, un banco privado, una agencia filial de un banco extranjero, cualquiera banco de crédito, una institución dedicada a la venta con descuento de mercancías, una empresa de inversión, una empresa de cambio de divisas, un negocio expedidor de cheques de viajeros, órdenes de pago, así como, un operador de sistemas de tarjetas de crédito, una compañía de seguros, un negociante de metales preciosos, piedras o joyas, un prestamista, e inclusive una agencia de viajes.

La dimensión de la actividad financiera, se extiende más allá de su connotación bancaria en virtud de la capacidad de los productos del delito de fluir a través de cualquiera de las actividades referidas.

Bajo esta extensa legislación, el gobierno puede:

- Registrar su casa sin su consentimiento

La Ley “USA Patriot” permite a los representantes de la ley el allanamiento de morada. Ellos pueden entrar a su casa u oficina, tomar fotografías y decomisar artículos sin información previa de que una autorización para ello fue extendida en el pasado, si es que la hubiese.

- Recopilar información acerca de los libros que lee, lo que estudia, lo que compra, su historial médico y sus finanzas.

La Ley “USA Patriot” da a las autoridades amplio poder de acceso a cualquier tipo de documentos, tales como educacionales, médicos, financieros, comerciales, etc. sin causa probable de delito. Además, prohíbe a los poseedores de la información bajo la amenaza de encarcelamiento, (por ejemplo bibliotecarias), que revelen el hecho del acceso al documento en cuestión.

Aunque se requiere una orden judicial para obtener información, ésta ley permite que el juez utilice un sello de goma cómo firma.

- Clasificarle como terrorista

La Ley “USA Patriot” amplia el significado oficial de la palabra terrorismo, por lo que muchos grupos activos en ciertos tipos de desobediencia civil, podrán ser calificados como terroristas.

- Vigilar su correo electrónico y las páginas de internet que visita.

La Ley “USA Patriot” permite al gobierno vigilar, sin causa justificada, el tráfico de internet y las comunicaciones por correo electrónico de cualquier proveedor, gracias a la obtención de la “ruta”, o “domicilio” en la red. Aunque ésta previsión está dirigida a los violadores de la ley, se complica al no poderse separar las actividades inocentes, de las que no lo son.

- Quitarle su propiedad sin audiencia alguna.

La Ley “USA Patriot” permite al gobierno apoderarse de los bienes de un individuo u organización, sin previa notificación o audiencia, si el gobierno dice que han participado o están planeando, un acto de terrorismo doméstico.

- Espiar a ciudadanos.

La Ley “USA Patriot” permite reunir una basta información sobre los ciudadanos estadounidenses, la cual será colectada y compartida con la CIA (y otros oficiales que no ejecutan la ley), sin la apropiada vigilancia judicial u otras seguridades.

- Poner emigrantes en la cárcel indefinidamente.

La Ley “USA Patriot” permite encarcelación indefinida a emigrantes u otros no nacionalizados, sin que el gobierno tenga que demostrar que realmente son terroristas.

- Intervenir su línea telefónica con una orden que ni siquiera está a su nombre.

La Ley “USA Patriot” cambia la naturaleza de los mandamientos judiciales para la intervención de las líneas telefónicas, al requerir de los jueces que los aprueben sin conocimiento de quién es el interceptado o en dónde se va a realizar.

1.6 OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS EN ESTA MATERIA

La Convención de Viena del 20 de diciembre de 1988, se trata del primer documento internacional en que los Estados asociados se obligaron en términos jurídicos a aprobar una legislación local represiva del lavado de activos procedente de actividades ilegales, aunque restringida al tráfico de drogas. Esta Convención es también importante no solo por su intención de homogeneizar las leyes punitivas de los Estados, sino por instaurar a la par el decomiso anticipado de bienes, y mayores restricciones al secreto bancario. Aunque la Convención focaliza el comercio de estupefacientes y su incidencia sobre la sociedad, lo cierto es que ya en su declaración de motivos señalaba que la producción, demanda y tráfico de droga constituía una actividad delictiva organizada que, en relación con otras manifestaciones del crimen organizado podían minar las economías lícitas y amenazar la estabilidad, seguridad y soberanía de los Estados. Esta situación tiene que ver con los considerables rendimientos financieros y fortunas generados por las empresas criminales transnacionales, lo cual les lleva a invadir, contaminar y corromper las estructuras de la Administración Pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad en todos sus niveles.

También prevé la Convención determinadas circunstancias que agravan el delito de lavado de activos, como es la participación del sujeto activo en un grupo delictivo organizado, la participación en otras actividades delictivas internacionales organizadas su intervención en otras actividades ilícitas cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito de lavado y a existencia de una declaración de culpabilidad anterior por delitos análogos.

Por lo tanto la Convención es lo suficientemente amplia como para que estas figuras puedan ser adaptadas a las múltiples legislaciones de los Estados. Sin embargo la generalidad, extrema casuística y la imprecisión han hecho que los Estados realicen una mala adaptación de sus preceptos al Derecho interno de cada uno.

La Convención pretende reaccionar contra los efectos nocivos del comercio de drogas sobre la sociedad de cada Estado, sugiriendo la sanción de ciertos tipos delictivos que deben incorporar las legislaciones internas mediante leyes especiales.

Adicionalmente la Convención abunda en cuestiones operativas. Una de las más importantes es la creación de un mecanismo internacional que permita decomisar los bienes originarios y sustitutos, sin importar el lugar del cometimiento del delito, es decir el lugar de donde provienen los fondos. Otra tarea operativa que trata es el rápido y seguro traslado de los imputados detenidos en una jurisdicción a aquella que lleva adelante su juzgamiento, es decir al lugar de comisión del delito. Para esto los Estados no solo deben comprometerse a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado que convengan, sino que también se comprometen a simplificar los requisitos probatorios que usualmente exigen en tales casos. También la Convención estipula el intercambio de información entre los Estados signatarios, así se encuentre prohibido invocar al secreto bancario para negarse a prestar asistencia judicial recíproca. Finalmente y en el mismo sentido de propone la creación de bases de datos sobre esta clase de operaciones fundamentalmente en la información de grupos intervinientes, el material estupefaciente y su producto económico, creándose para tal efecto los sistemas adecuados de enlace e intercambio de información.

Otra de las importantes convenciones en la persecución de delitos financieros fue la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, celebrada en Palermo, como se mencionó precedentemente. Las iniciativas de este organismo tuvieron que ver con el origen de la droga como mercadería, derivada luego con los beneficios generados por su comercialización, posteriormente en los beneficios que provienen de la comisión de delitos graves, y, finalmente en la corrupción y crimen organizado como empresa con fines de lucro.

Esta Convención define a la delincuencia organizada transnacional desde varios aspectos importantes como: los términos de la organización, es decir la estructura de la misma compuesta de tres o más personas y que exista durante un tiempo determinado. Un segundo aspecto es la finalidad que debe perseguir la organización, es decir, que la organización tenga como mira la obtención, directa o indirecta de un beneficio económico

u otro beneficio de orden material; y en tercer lugar la actividad que desarrolla la organización para obtener dichos beneficios económicos.

La Convención de Palermo también establece el principio de que los Estados podrán investigar las operaciones que una organización criminal desarrolle en otra jurisdicción. En este sentido la Convención resalta la intrínseca vinculación que guarda la criminalidad organizada con el lavado de activos.

Esta Convención pone especial énfasis en el rol preventivo que debe desempeñar el Sistema Financiero de los Estados y la creación de verdaderas dependencias de inteligencia como método de evitar y erradicar el lavado de activos.

Tanto la Convención de Viena como la de Palermo reiteran el rol central que desempeña la cooperación entre los Estados en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

1.7 SITUACIÓN ACTUAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR FRENTE AL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)

Informes de Avance de proceso de Evaluación Mutua de Ecuador Seguimiento Intensificado realizados por el Grupos de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) a la República del Ecuador, respecto del cumplimiento de las 40 + 9 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Entre el 10 y el 14 de septiembre del año 2007, la República del Ecuador se sometió a la Segunda Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), en relación al cumplimiento de las 40 + 9 Recomendaciones establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) respecto de los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Como consecuencia de dicho proceso de evaluación, en el marco del XVI Pleno de Representantes de GAFISUD, realizado en la ciudad de Buenos Aires – República Argentina, del 06 al 07 de diciembre de 2007, los países miembros resolvieron someter a la República del Ecuador a un Proceso de Seguimiento Intensificado, de conformidad con lo

previsto en el Literal a) del Numeral 8 del Proceso de Seguimiento de las Evaluaciones Mutuas de GAFISUD.

De acuerdo a los procedimientos de GAFISUD se estableció la inclusión de la República de Ecuador en un proceso de “Seguimiento Intensificado” debido a que algunas de las Recomendaciones claves del GAFI se encontraron calificadas con un Parcialmente Cumplido o un no Cumplido. Tal es el caso de la Recomendación 1, como Parcialmente Cumplida; la Recomendación 5, como No Cumplida; la Recomendación 10, como Parcialmente Cumplida; la Recomendación 13, como No Cumplida y las Recomendaciones Especiales II y IV, como No Cumplidas.

Recomendación 1 - Parcialmente cumplida⁸

Principales factores determinantes:

- No penalización en cualquier caso de activos lavados de 5000 o menos dólares.
- Insuficiencia y poca claridad de los delitos precedentes de LA.
- Falta de penalización de la conspiración y de la proposición para lavar activos.

Recomendación 5 – No Cumplida y Recomendación 10 Parcialmente Cumplida⁹

Principales factores determinantes:

- Cuentas no nominativas exceptuadas por ley no identificadas.

⁸ Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Ecuador Seguimiento Intensificado, XVII Pleno de Representantes celebrado en Huatulco, México.

Criterio Esencial de la Evaluación: El lavado de activos debe tipificarse como delito en virtud de las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacentes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 (Convención de Viena), la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional de 2000, de la Convención de Viena y de la Convención de Palermo.

⁹ Criterio Esencial de la Evaluación: Las disposiciones contenidas en el Informe se refieren a todas las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, las cuales de acuerdo con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Nacional son: bancos, sociedades financieras mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, cooperativas de ahorro y crédito, almacenes generales de depósito, compañías de arrendamiento mercantil, compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, corporaciones de garantía y retrogarantía, corporaciones de mercado secundario de hipotecas, instituciones financieras públicas y compañías de seguros y reaseguros.

- No se detallan los documentos para la debida identificación del cliente ni se exige su efectivización previa al inicio de la relación comercial, tampoco se determinan los antecedentes necesarios para la determinación del perfil.
- Falta de normativa específica sobre transacciones electrónicas y los requisitos que deben tomarse en consideración en las mismas.
- No se establecen distinciones entre clientes ocasionales y permanentes.
- No se exige la identificación del beneficiario final.
- No se requiere la estratificación de los clientes por niveles de riesgo.
- No se exige la aplicación de procedimientos reforzados para determinados clientes o productos.
- No se regula sobre la aplicación de medidas abreviadas o simplificadas.
- No se especifica la aplicación de las medidas de DDC para la cartera existente.
- La legislación no obliga al cumplimiento de la recomendación a todas las entidades financieras. Sólo están reguladas las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros.
- La normativa es genérica y no se determinan exigencias claras. El cumplimiento de la obligación no es supervisado por la autoridad competente.

Recomendación 13 – No Cumplida¹⁰

Principales factores determinantes:

¹⁰ Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Ecuador Seguimiento Intensificado, XVII Pleno de Representantes celebrado en Huatulco, México.

- No existe un organismo que desarrolle las funciones de UIF. Todos los reportes realizados por las instituciones son puestos en conocimiento del Ministerio Público sin un análisis previo.
- Compañías de seguros, casas de valores, administradoras de fondos de inversión y fideicomisos no son sujetos obligados a reportar hasta que la UIF comience a recibir reportes.
- Ausencia de reportes en una gran cantidad de instituciones financieras. Más del 60 % de los ROS se concentran en 5 instituciones. El 57 % de las instituciones obligadas a reportar nunca presentaron un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
- No existe obligación de reportar operaciones que podrían estar vinculadas con el terrorismo.

Recomendación Especial II y IV – No Cumplidas¹¹

Principales factores determinantes:

- No existen medidas legales o administrativas para el congelamiento de fondos del Financiamiento del Terrorismo (FT).
- Inexistencia de normativa que obligue a reportar la sospecha de la existencia de fondos que podrían estar vinculados al terrorismo, de operaciones de las que se sospecha esa vinculación sean o no concretadas y aunque se presuma que también podría estar vinculada a cuestiones fiscales.

Como evidencia de que la República del Ecuador avanza con la implementación de acciones en materia de prevención de lavado de activos y lucha contra el financiamiento de delitos, incluido el financiamiento del terrorismo presenta el VI informe de avance del

¹¹ Criterio Esencial de Evaluación: Todos los países deben tipificar el financiamiento del terrorismo, de los actos terroristas y de las organizaciones terroristas. Los países deben asegurar que estos delitos sean designados como delitos precedentes del lavado de activos.

proceso de seguimiento intensificado de la evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).

Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Ecuador Seguimiento Intensificado de junio a noviembre de 2010¹²

El informe de avance básicamente trata de las deficiencias detectadas tanto por la Unidad de Inteligencia Financiera así como por las diferentes instituciones públicas que conforman el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA)¹³, en la aplicación de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, vigente desde el 18 de octubre de 2005, lo cual hizo necesaria la presentación ante la Asamblea Nacional de un proyecto de ley reformativa.

Del seguimiento realizado al proceso de aprobación de las reformas planteadas por parte de la Asamblea Nacional al Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, presentado por el Procurador General del Estado y Presidente del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), el 3 de junio de 2010, fundamentalmente se menciona lo siguiente:

- El 16 de junio de 2010 el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, resolvió calificar y remitir el proyecto de Ley Reformatoria a la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control.

¹² V Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Ecuador, Seguimiento Intensificado realizado por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), en relación al cumplimiento de las 40+9 Recomendaciones establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), respecto de los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

¹³ Se creó en el año 2005 con la aprobación de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos y promulgada en el Registro Oficial N° 127 de fecha 18 de octubre del mismo año; y, fue reformado el 30 de diciembre de 2010 según Registro Oficial N° 352, mediante el cual se cambió la denominación de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos por la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

De acuerdo al artículo 6 de la Ley, señala que: El Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, con sede en Quito, Distrito Metropolitano, con personería jurídica de derecho público, está integrado por su Directorio y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La representación legal, judicial y extrajudicial del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos la ejercerá la Directora o Director General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El CONCLA está conformado por la Procuraduría General del Estado, el Ministerio del Interior, La Fiscalía General del Estado, Superintendencia de Bancos y Seguros, Superintendencia de Compañías, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas.

- El proyecto de reformas a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos fue socializado, analizado y comentado puesto que se lo difundió a los asambleístas, a distintos sectores afines al tema y a la ciudadanía en general, a través del portal web de la Asamblea Nacional, y de igual manera la Comisión organizó foros abiertos al público con autoridades públicas y privadas, incluidos los miembros del CONCLA, eventos realizados desde el 5 de julio de 2010.
- Dentro del trámite legal, el Pleno de la Asamblea Nacional, en sesión del 7 de septiembre de 2010, discutió en primer debate el proyecto de reformas; y, en sesión del 5 de noviembre de 2010, en segundo y definitivo debate aprobó la Ley Reformatoria a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos.
- La Ley Reformatoria de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, aprobada por la Asamblea Nacional el 5 de noviembre de 2010, fue enviada al Presidente Constitucional de la República, para la correspondiente sanción u objeción, en el plazo de treinta días desde la recepción.

La Ley Reformatoria a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos aprobada por la Asamblea Nacional, introduce principalmente las siguientes modificaciones¹⁴

- Se sustituye el título de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos por “LEY DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS”;
- Se fortalece la tipificación del delito de lavado de activos;
- Se confirma la tipificación del lavado de activos como delito autónomo, sin que sea necesario demostrar un delito precedente para que este delito sea reprimido;
- Se fortalece el control fronterizo terrestre, en puertos marítimos y fluviales, en aeropuertos y distritos aduaneros, de los movimientos de efectivo;

¹⁴ Informe de avance del proceso de seguimiento intensificado de la segunda evaluación mutua realizada por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), respecto del avance de diciembre de 2009 a junio de 2010.

- Se determina una multa del 30% del total de los valores que no sean declarados o hubieren sido declarados errónea o falsamente al salir o ingresar al país, sin perjuicio de que se continúe con las acciones penales que correspondan en caso de existir delito;
- Se tipifica y sanciona el delito de financiamiento de los delitos tipificados en el Capítulo IV del Título I, del Libro Segundo del Código Penal, que describe los delitos de sabotaje y terrorismo, al incorporar un artículo innumerado a continuación del artículo 166 del Código Penal;
- Se cambia de denominación a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por Unidad de Análisis Financiero (UAF) para determinar de manera concreta las funciones que tiene la Unidad;
- Se amplía el listado de sujetos obligados a reportar a la UAF teniendo los siguientes: las filiales extranjeras bajo control de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano; las bolsas y casas de valores; las administradoras de fondos y fideicomisos; las cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales; personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves; las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o valores, transporte nacional e internacional de encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias; las agencias de turismo y operadores turísticos; las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción; los casinos casas de juego, bingos, máquinas tragamonedas e hipódromos; los montes de piedad y las casas de empeño; los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas; los comerciantes de antigüedades y obras de arte; los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles;
- Se amplían las atribuciones de supervisión y control en materia de prevención de lavado de activos a los respectivos organismos de control de los nuevos sujetos obligados;

- Se faculta a la UAF a solicitar información a cualquier institución del sector público que mantenga bases de datos, las mismas que están obligadas a permitir el acceso a esa información;
- La Ley concede a la UAF la rectoría de la capacitación en materia de lavado de activos y financiamiento de delitos, a nivel nacional.

Resolución de la junta bancaria No. Jb-2010-1767 dirigida al sector que conforman las compañías de seguro privado controlado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, publicada en registro oficial No. 257 de 16 de agosto de 2010.¹⁵

Con el objeto de fortalecer la Resolución No. JB-2008-1154, que reforma el “Capítulo IV, sobre Normas de Prevención de Lavado de Activos para las Instituciones Controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del Título XIII “Del Control Interno”, del Libro I “Normas Generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, y comprometer al sector de seguro privado a la aplicación de los criterios para la prevención de lavado de activos, y así dar cumplimiento a lo establecido en las Recomendaciones 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, y 23, la Junta Bancaria emitió la Resolución No. JB-2010-1767 enfocada a normas de prevención de lavado de activos para las personas naturales y jurídicas que integran el sistema de seguro privado, siendo éstas las compañías aseguradoras y reaseguradoras.

En esta normativa, dirigida a la prevención de lavado de activos en el sector de seguro privado, se destacan los siguientes puntos:

- Acentúa el enfoque basado en el análisis de riesgos para la prevención de lavado de activos en las instituciones de seguro privado mediante la identificación y categorización de factores, análisis de perfiles, elaboración de matrices de riesgo, establecimiento de sistemas de alerta y reportes de riesgos según los siguientes factores: cliente, suma asegurada, complejidad de los contratos de seguros o reaseguros, la distribución y método de pago.

¹⁵ Informe de avance del proceso de seguimiento intensificado de la segunda evaluación mutua realizada por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), respecto del avance de diciembre de 2009 a junio de 2010.

- Aplica procedimientos de debida diligencia ampliados para la identificación, aceptación y monitoreo de clientes;
- Fortalece la estructura de prevención de lavado de activos en las entidades de seguro privado a través de obligaciones específicas para directivos, accionistas, administradores y empleados, y los controles sobre los clientes y beneficiarios;
- Exige a las instituciones del sistema de seguro privado cumplir de manera efectiva con sus obligaciones hacia otros organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera;
- Define claramente a las personas políticamente expuestas (PEP), estableciendo procedimientos más estrictos para establecer relaciones comerciales;
- Fortalece la aplicación de las políticas “Conozca a su cliente”, “Conozca su empleado”, “Conozca su mercado”, “Conozca a su proveedor” y “Conozca a su corresponsal”;
- Aplica los procedimientos de debida diligencia ampliados para la identificación y aceptación de clientes de acuerdo principalmente al monto de la prima, a los beneficiarios, a la constitución de las empresas o sociedades en el extranjero o en países calificados por el Grupo de Acción Financiera como no cooperantes o en países considerados como paraísos fiscales por el Servicio de Rentas Internas; y en el caso de personas naturales cuando se trate de no residentes;
- Se obliga a contar con un oficial de cumplimiento titular y suplente, a excepción de las compañías que cuentan con una estructura organizacional pequeña que solamente contarán con el titular, y la asignación de competencias específicas para la actualización y depuración de bases de datos;
- De ser el caso, se debe contar con la unidad de cumplimiento de acuerdo a la estructura, el número de clientes y necesidades;

- No podrá contratarse con terceros las funciones asignadas al oficial de cumplimiento, ni aquellas relacionadas con la identificación del cliente, beneficiario, obtención de información sobre la naturaleza de la relación comercial y la determinación del reporte de operaciones o transacciones inusuales e injustificadas.
- Las instituciones del sector de seguro privado deben diseñar programas y coordinar planes de capacitación sobre prevención de lavado de activos para todo su personal;
- Establece la obligatoriedad para que cada institución establezca sanciones por incumplimiento de los procesos de prevención de lavado de activos, de las disposiciones contenidas en las normas sobre prevención de lavado de activos y de los procesos para su aplicación; así como las sanciones a ser aplicadas por el organismo de control.

Otras estructuras de reporte emitidas por la unidad de inteligencia financiera para la prevención de lavado de activos en otros sectores y primeros resultados

- En cumplimiento del Instructivo de Gestión de Reportes para la Prevención y Detección de Lavado de Activos de Nuevos Sujetos Obligados a Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera, publicado en registro Oficial No. 127 de 10 de febrero de 2010, la UIF emitió el oficio circular que establece la estructura para el reporte de operaciones y transacciones económicas que igualen o superen el umbral legal para las casas de valores, el 31 de agosto de 2010; medida que involucra a 37 instituciones. Esta estructura establece principalmente lo siguiente: el umbral de reportes, los parámetros del envío de información a la Unidad de Inteligencia Financiera, las transacciones y operaciones económicas que serán sujetas de reporte, y los plazos de reporte.
- En cumplimiento del antedicho instructivo de gestión de reporte para nuevos sujetos obligados, las administradoras de fondos y fideicomisos, y las compañías que realizan actividades de remesas de dinero o giros postales y couriers, se encuentran reportando desde el mes de octubre la información de septiembre de 2010.

- Dando cumplimiento al Instructivo de Gestión de Reportes de Casinos y Salas de Juego para la prevención de lavado de activos, se informa que este sector se encuentra reportando a la UIF desde el mes de julio la información de junio de 2010.

OTRAS ACCIONES

- En sesión de Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos de 15 de junio de 2010, se aprobó el “INSTRUCTIVO DE CÁLCULO, IMPOSICIÓN Y DESTINO DE LAS MULTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS”, con la finalidad de que el Servicio de Vigilancia Aduanera aplique efectivamente las multas debido a las contravenciones por la falta de declaración o la declaración falsa al salir o ingresar dinero al país;
- Desde el mes de julio de 2010, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentra receptando los reportes de operaciones y transacciones que superan el umbral establecido, y aquellas inusuales e injustificadas, de manera electrónica a través de un sistema informático que permite el envío y recepción de información de manera segura por parte de los oficiales de cumplimiento a la UIF, a través del uso de tokens, dispositivos de última generación, para envío de información electrónica segura y firmas electrónicas, sistema desarrollado internamente desde abril del 2010. Esta herramienta tecnológica permite cubrir las necesidades de la Dirección de Análisis de Operaciones, área misional, para la recepción, validación, carga y procesamiento de las operaciones y transacciones económicas que sean reportadas por los sujetos obligados, garantizando el manejo ágil de la información.
- En el mes de noviembre de 2010, el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos- Unidad de Inteligencia Financiera de Ecuador recibió una visita de asistencia técnica legislativa en materia de “Ratificación e implementación del marco jurídico universal y regional de lucha contra el terrorismo y su financiación”, en el marco de la cooperación que brinda la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Comisión Interamericana Contra el Terrorismo (CICTE) y la Comisión Interamericana Contra el Abuso de las Drogas (CICAD) de la OEA, y el

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). La delegación de expertos internacionales además mantuvo reuniones de alto nivel con las máximas autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

- El SRI a través de su Área de Investigación del Fraude Fiscal y Lavado de Activos, en el mes de julio de 2010, emitió un documento interno relacionado con los lineamientos de control antilavado en el proceso de remates de bienes embargados, es decir en la venta que se realice sobre dichos bienes; operaciones sobre las cuales es necesario prevenir y detectar posibles perfiles de riesgo en las operaciones económicas que se efectúan dentro de los procesos de remate de bienes embargados que tiene la institución para realizar una debida diligencia con los oferentes y compradores. Dentro de las recomendaciones que se aplican, se estipula el incluir parámetros de prevención para el manejo del dinero en efectivo en la recepción de posturas para los procedimientos de remate en sobre cerrado, remate por subasta pública, venta directa y devolución de valores consignados por los postores. De detectares alguna alerta, el funcionario de la Administración Tributaria deberá llenar el reporte creado para el efecto denominado “reporte de operación inusual en el proceso de remate” y éste será puesto en conocimiento del Área de Investigación del Fraude Fiscal y Lavado de Activos para realizar el análisis de riesgos encontrados y de ser el caso, remitirlo a la Unidad de Inteligencia Financiera.
- La Superintendencia de Compañías continúa estructurando su Unidad de Prevención de Lavado de Activos.
- La Policía Nacional y la Fiscalía continúan participando activamente como puntos de contacto en la Red de Recuperación de Activos, conjuntamente con los países miembros de GAFISUD para el intercambio de información.

Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Ecuador Sobre Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo a Diciembre del 2011

De acuerdo con el resultado del informe del equipo evaluador, Ecuador ha continuado con la implementación de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, la que fue promulgada a fines de 2010.

Este criterio se basa en el incremento de los sujetos obligados a reportar que ya son parte activa del sistema antilavado por estar registrados en la Unidad de Análisis Financiero (UAF). (GAFISUD, 2011)

Adelantos respecto de la última evaluación mutua

Tipificación como delito del lavado (GAFISUD, 2011)

Se modificó la ley en diciembre del 2010, presentando mejoras significativas que se detallan a continuación:

- La reforma a la Ley establece la autonomía del delito de lavado de activos de otros delitos cometidos dentro o fuera del país.
- El lavado de activos tiene que juzgarse como producto toda actividad ilícita en general, debiendo ser perseguido y juzgado como un delito autónomo respecto de todo delito subyacente.
- Se establecen diferentes penas conforme al monto de los activos objeto del delito, pero se eliminó el umbral mínimo de us\$5.000 (cinco mil dólares) que no constituía delito.
- La condena por delito de lavado de activos podrá dar lugar a la extinción de la persona jurídica creada para lavar activos.
- En cuanto a la posibilidad de sanción, cuando los delitos subyacentes del lavado de activos se han producido en otro país, la reforma legislativa procesada la ha incluido de forma literal, permitiéndose, pues, su factibilidad.
- El Nuevo Código Penal Tipifica el Delito de Financiamiento del Terrorismo.
- Se verifica la necesidad de tipificar de manera adecuada la sola financiación de organizaciones terroristas y terroristas individuales desvinculada a actos terroristas específicos.

- No se han realizado avances específicos en esta materia a excepción de haber dado el paso en cuanto a la tipificación del delito de FT.
- La UAF se encuentra operativa lo que significa el avance más importante en este punto.
- Se mantienen vulnerabilidades en el manejo de la información y aseguramiento de la confidencialidad y reserva de la misma.
- No hay coordinación operativa con varios de los supervisores que participan en el sistema de prevención.
- Las entidades de control no han emitido señales de alerta dirigida a los sectores intervinientes, así como tampoco se les ha provisto de tipologías, tendencias ni estadísticas sobre su gestión.
- No se ha regulado y controlado el sector financiero informal, especialmente los operadores de cambios en frontera y remesadoras de fondos no registradas.
- Se ha regulado sobre PEPS.
- La cantidad de sujetos obligados registrados en la UAF, y activos en su obligación de reportar, es muy baja en relación al número que de acuerdo a la Ley deben cumplir con esa obligación.
- Se ha establecido la obligación de reportar en caso de FT.
- Se han superado la mayoría de las deficiencias mencionadas en el informe anterior en relación a la Asistencia legal mutua, sin embargo se continua recomendado legislar para permitir dar asistencia penal a otro país en materia de comiso de bienes por valor equivalente o para compartir bienes incautados o decomisados.

- Los problemas relativos con el tema de extradición han sido superados en su mayoría, en especial el delito de FT ha sido tipificado y es delito extraditable.

Actualización del proceso de prevención en la industria de seguros

Ante el desarrollo del proceso de prevención en la industria de seguros y la implementación de la norma, surgen nuevos criterio los cuales se vinculan directamente a la administración del riesgo de lavado de activos, para lo cual la entidad de control emite una reforma a Resolución 1767, con la cual las entidades del sector tienen un mejor entendimiento de la prevención y el control del riesgo en mención.

Resolución de la Junta Bancaria No. JB-2012-2147 del 26 de abril del 2012 dirigida al sector que conforman las compañías de seguro privado controlado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, publicada en Registro Oficial No. 709 del 23 de mayo de 2012.

Con el objeto de actualizar la norma para lograr un mayor apego a las disposiciones contenidas en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, así como las recomendaciones internacionales, la Junta Bancaria emite la Resolución No. JB-2012-2147.

En esta normativa, dirigida a la prevención de lavado de activos en el sector de seguro privado, se destacan los siguientes puntos:

- La implementación de factores, criterios y categorías de riesgos de prevención de lavado de activos, con sus respectivas matrices de riesgo.
- Introduce la actuación de los accionistas, miembros del directorio y ejecutivos, en la definición y ejecución de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, contenidas en los respectivos códigos de ética.
- Aclara la política de conozca a su proveedor de servicios de seguros.

- Define las la debida diligencia disminuida y aumentada, a ser realizada a los clientes y/o proveedores.
- Señala la responsabilidad de los asesores productores en la recopilación de la información y documentación de los clientes respecto de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.
- Esta reforma, su implementación y resultados deberán ser evaluados en la siguiente ronda de mutua evaluación que la realizará el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, en conjunto con el resultado del proceso de prevención de todos los sectores controlados.

2 EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA ACTIVIDAD ASEGURADORA

2.1 TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR ASEGURADOR INTERNACIONAL

El sector Seguros, como otros servicios financieros, se expone a la amenaza de lavado de dinero y podría ser atractivo para quienes buscan colocar fondos en un producto financiero que los provea con una retribución de fondos legales y confiables. Si un lavador de dinero puede mover fondos a través de un producto de esta industria y recibir a cambio, un pago por una compañía de seguros, entonces habrá logrado que sus fondos aparenten ser legítimos.

De las investigaciones de tipologías del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI, se ha observado que las características inherentes del sector de seguros pueden dar lugar a riesgos intrínsecos, aumentando así su vulnerabilidad al lavado de dinero. La ineficiente regulación y supervisión del sector son observadas como un campo abierto de oportunidades que podrían explotar los lavadores. También fue observado que la detección de lavado de dinero en el sector era muy baja, debido a su tamaño comparado con otros servicios financieros.

Estas investigaciones indican que sigue siendo confuso determinar en qué medida el sector de seguros se expone al Lavado de Dinero. Por consiguiente, la sesión plenaria de Grupo de Acción Financiera - GAFI en febrero 2004 decidió examinar profundamente las vulnerabilidades de Lavado de dinero en el sector Seguros como parte del ejercicio de las tipologías.

Para facilitar esta tarea, se conformó un grupo de trabajo conformado por expertos con diversas especialidades, de jurisdicciones con industrias de seguro significativas, junto con representantes de la Asociación Internacional de los Supervisores del Seguro (IAIS) con la finalidad de llevar a cabo un estudio de las vulnerabilidades de dicho sector.

Resultando las siguientes tipologías:

- El uso de las pólizas de seguro de vida con una sola prima.
- Cobro adelantado de la póliza, especialmente cuando es poco rentable o inusualmente temprana.
- Fraude general en el cobro del seguro de mercancías de alto valor que fueron compradas con los fondos ilícitos.
- Pagos en efectivo para la compra de seguros.
- Periodos de devolución que permiten reembolsos de primas con dinero lícito dentro del período de la cancelación del contrato.
- Complicidad del Intermediario del cliente y/o empleados de la compañía de seguros.
- Primas pagadas por terceros.
- Riesgo relacionado con transacciones internacionales.
- Clientes fraudulentos, compañías de seguros y compañías de reaseguro.
- Compra de suma de rescate de seguro de vida a un asegurado con enfermedad terminal.
- Posible titular de póliza está más interesado en los términos de la cancelación de la póliza que en sus beneficios. (Gafisud, 2008).

Caso:

Durante un larga investigación sobre el tráfico de drogas realizada en los años 90's los agentes de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU. en Miami tuvieron información de que los carteles de la droga colombianos estaban lavando grandes

sumas de dinero a través de la compra de pólizas de seguro de vida en Europa, Estados Unidos y algunas jurisdicciones offshore. Basándose en esta información, los agentes del ICE, lanzaron la operación Capstone en 200. La investigación encontró que los carteles colombianos, utilizando un pequeño número de corredores de seguros, estaban comprando pólizas de seguros de vida con grado de inversión, con asociados del cartel como beneficiarios de las pólizas. Estas pólizas eran compradas con fondos provenientes del tráfico de drogas enviados a las compañías de seguros a través de transferencias cablegráficas y cheques de terceros en todo el mundo. La investigación reveló que los carteles entonces estaban cobrando las pólizas luego de períodos cortos de tiempo, a pesar de las penalidades financieras indicadas para los casos de liquidación anticipada. Los beneficiarios del cartel, posteriormente recibían un cheque o una transferencia cablegráfica de la compañía de seguros que resultan ser fondos de seguros / inversión legítimos. Los carteles podían utilizar estos fondos “limpios” virtualmente sin ningún problema. Los agentes determinaron que los carteles habían usado este esquema para comprar como mínimo 250 pólizas de seguro de vida y lavar alrededor de \$80 millones en fondos procedentes del tráfico de drogas. En diciembre del 2002, la ICE anunció el decomiso de casi \$30 millones, el arresto de nueve individuos y los cargos presentados contra otros cinco individuos como resultado de la investigación conjunta realizada por autoridades de Estado Unidos, la Isla de Man, el Reino Unido, Colombia y Panamá. (Gafisud, 2008)

Cuando una compañía evalúa los riesgos de lavado y financiamiento del terrorismo, debe considerar si permite a sus clientes:

- Utilizar dinero en efectivo o equivalentes de dinero en efectivo para comprar productos de seguros.
- Comprar un producto de seguro con una sola prima o con un pago anticipado.
- Solicitar préstamos de dinero poniendo como garantía el valor del producto del seguro.
- El informe del Gafisud del 2008 menciona y describe las tipologías determinadas en ese año tomadas de casos reales, encubriendo la identidad de los actores.

Caso 1

Mediante esta tipología se busca dar apariencia de legalidad al dinero por medio de la defraudación a compañías de seguros. La introducción de dinero ilícito en la compra de los productos que ofrece este sector, resulta una herramienta atractiva para quienes pretenden darle apariencia de legalidad, máxime teniendo en cuenta que las operaciones luego efectuadas en entidades financieras con el producto de los pagos

provenientes de operaciones de seguros no suele despertar sospechas por parte de estas últimas.

De esta forma, un individuo compra un activo con dinero ilícito y lo asegura por un determinado valor en una prestigiosa compañía de seguros pagando cumplidamente las primas de la póliza de seguros. El valor asegurado puede ser aumentado mediante la inclusión de accesorios en la póliza.

Posteriormente simula un siniestro (donde en algunas ocasiones los accesorios son sustraídos o cambiados por otros de menor valor) y la aseguradora paga el valor por el cual fue asegurado el bien.

Al pagarse el dinero, al beneficiario le es abonado un ingreso de origen lícito que ingresa al sistema financiero mediante un cheque de una compañía de seguros. Mediante esta operación, esta persona puede justificar los fondos o mezclarlos con otros dineros de origen lícito o ilícito.

Es importante considerar la existencia de organizaciones criminales con la capacidad para dejar sus inversiones en el sector asegurador largos períodos de tiempo con el objetivo de eliminar las sospechas que su redención anticipada pueda conllevar. (Gafisud, 2008, pp. 57-58)

Esquema:

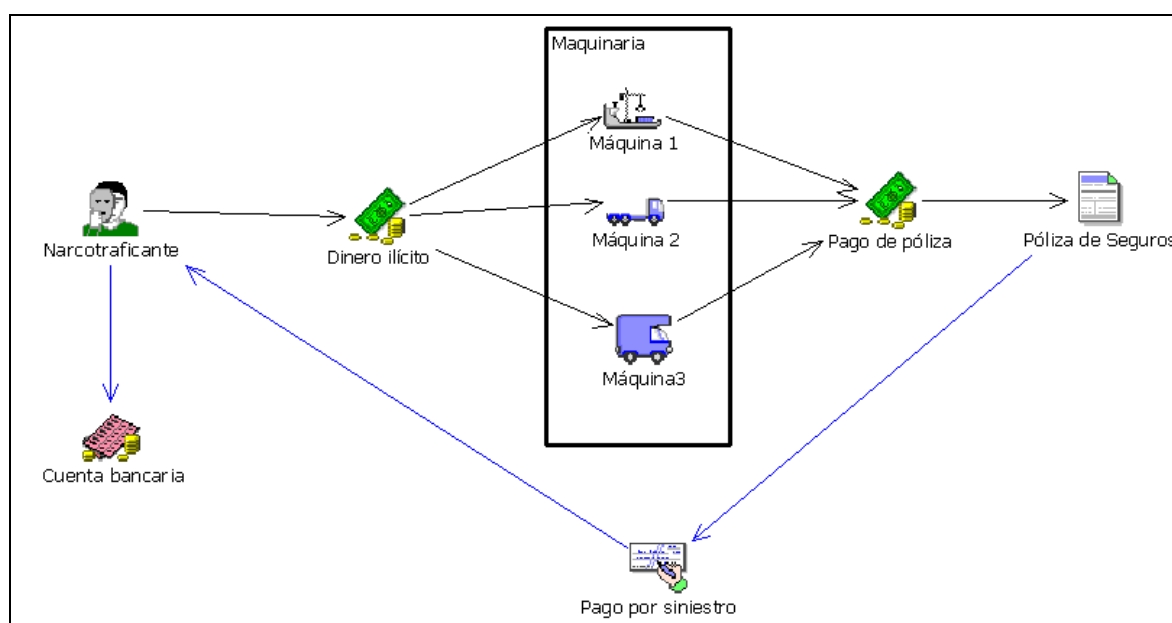


Figura N° 4. Compra de bienes con fondos de origen ilícito, aseguramiento y posterior siniestro

Ejemplo 1

El Broker X del país B, decide constituir pólizas de Seguros de Retiro para directivos y asistentes administrativos de su entidad, con la Aseguradora S. A tales efectos, transfiere fondos vía la cuenta corresponsal del Banco N del país B por intermedio del Banco N del país W, sumas que son a su vez transferidas a la cuenta de la Aseguradora S, en el Banco N

del país B, en concepto de Seguros de Retiro, sin despertar sospechas por parte de la entidad. (Gafisud, 2008, pp. 58-59)

Luego de efectuado el pago de las pólizas a la compañía de seguros, X le requiere a esta última que modifique una de las cláusulas originales de las mismas: existía un período de carencia y limitaciones para el rescate parcial y se acuerda dejar sin efectos dichos requisitos.

Paso seguido, el Broker X efectuó un rescate anticipado y parcial (prácticamente total) de los montos depositados en concepto de Seguro de Retiro, pese al elevado costo económico que implicaba tal operación: el monto total rescatado fue superior a los USD\$ 15.000 miles, resultando inusual el costo de las operaciones realizadas, 59 que surge de tomar en cuenta gastos administrativos, gastos de adquisición y tasa del Organismo de Control de Seguros, más el descuento efectuado por el rescate, ascendiendo en su conjunto a aproximadamente el 10%. Los montos rescatados siguieron el siguiente curso:

- Un asistente administrativo transfiere su rescate a una Cuenta de Ahorro en el Banco Z del país B y posteriormente vuelve a transferir los montos rescatados al Banco N del país W.
- Los directivos y otro asistente administrativo transfieren los montos rescatados a Cuentas de Ahorro en el Banco N del país B y posteriormente retiran en efectivo el dinero rescatado.

Esquema

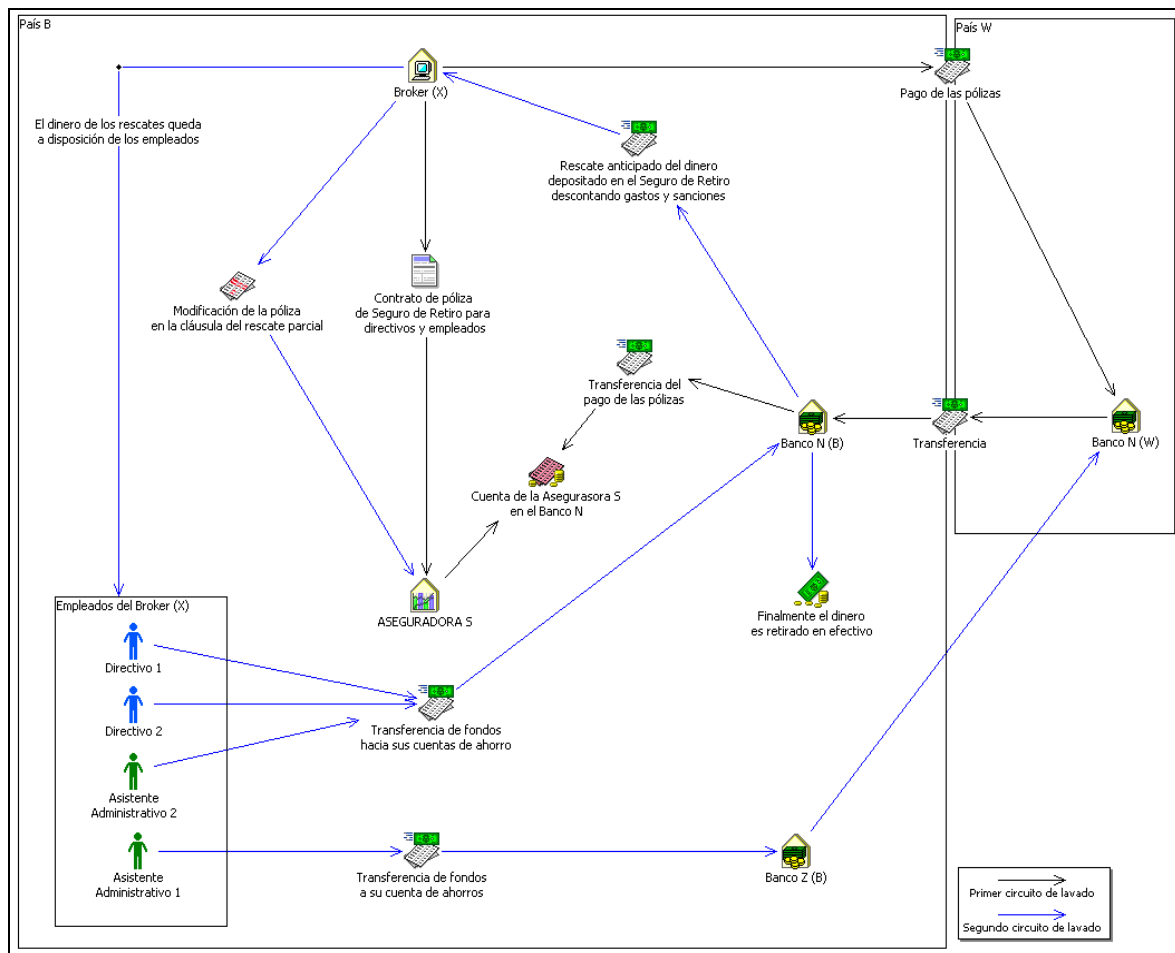


Figura N° 5. Rescate anticipado de una póliza de retiro

Caso 2

Mediante esta tipología se busca dar apariencia de legalidad al dinero por medio de la defraudación a compañías de seguros. La introducción de dinero ilícito en la compra de los productos que ofrece este sector, resulta una herramienta atractiva para quienes pretenden darle apariencia de legalidad, máxime teniendo en cuenta que las operaciones luego efectuadas en entidades financieras con el producto de los pagos provenientes de operaciones de seguros no suele despertar sospechas por parte de estas últimas.

De esta forma, un individuo asegura su retiro y realiza depósitos adicionales en una prestigiosa compañía de seguros pagando cumplidamente las primas de la póliza de seguros. El valor asegurado puede ser aumentado mediante la realización de pagos voluntarios en la póliza.

Posteriormente informa a la aseguradora su voluntad de retirar los aportes voluntarios realizados y la aseguradora paga.

Al pagarse el dinero, al beneficiario le es abonado un ingreso de origen lícito que ingresa al sistema financiero mediante un cheque de una compañía de seguros o giro

bancario. Mediante esta operación, esta persona puede justificar los fondos o mezclarlos con otros dineros de origen lícito o ilícito.” (Gafisud, 2008)

Ejemplo 1:

Se conoció que una aseguradora “Seguros X”, emitió reportes de operaciones inusuales de su “cliente A”, respecto de la póliza “000” del seguro de vida individual, que adquirió a finales de 2005, en la que el “cliente A” hizo aportaciones adicionales días después a su contratación, por un depósito aproximado de \$305,000.00 dólares americanos y a al poco tiempo depositó aproximadamente \$200,00.00 dólares americanos, a través de billetes de baja denominación.

El mismo día en que depositó esta última cantidad, solicitó el retiro de aproximadamente \$200,000.00 dólares americanos, ordenando para ello a “Seguros X” realizará una transferencia a su cuenta en el “Banco Z. (Gafisud, 2008, pp. 60-62)

Además, en el sistema financiero se le conocieron 2 cuentas bancarias, en una de ellas durante años anteriores tuvo retiros por \$10,000.00 dólares americanos y en el ultimo año por aproximadamente \$50,000.00 dólares americanos. El “cliente A” manifestó ante la aseguradora que su actividad económica era de arquitecto y empresario, con ingresos anuales de aproximadamente \$100,000.00 dólares americanos. Asimismo, no se localizaron declaraciones de impuestos presentadas ante las autoridades correspondientes.

El “cliente A” nombró como beneficiario del 100% de su seguro de vida al sujeto “B”, quién al parecer se encuentra relacionado con la delincuencia organizada. Además, en el sistema financiero al sujeto “B” se le conocieron 2 cuentas bancarias, en una operó depósitos en efectivo por aproximadamente \$100,000.00 dólares americanos y en la otra cuenta bancaria tuvo depósitos en efectivo por aproximadamente \$600,000.00 dólares americanos. Asimismo, se conoció que se dedicaba a la comercialización, sin que por dicha actividad se haya localizado la presentación de declaración de ingresos.

Esquema:

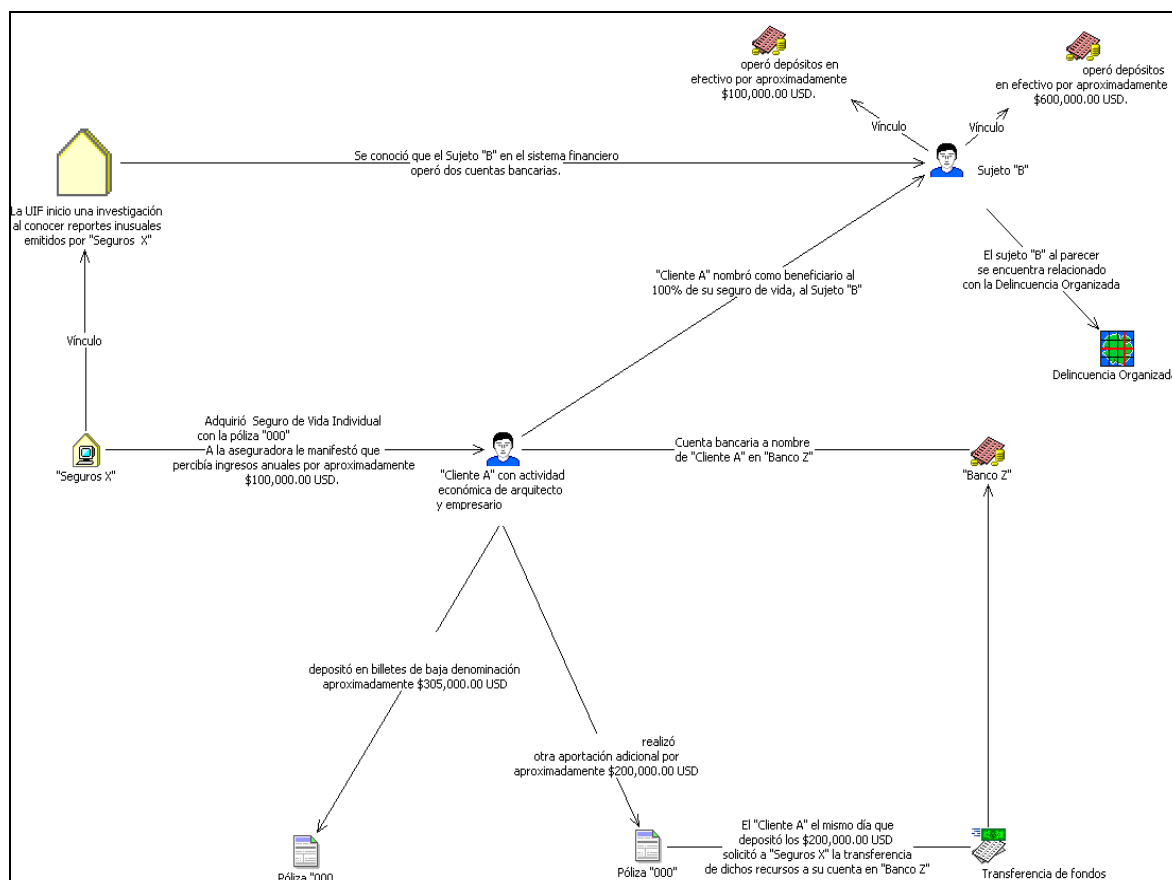


Figura N° 6. Compra de seguro de vida individual y rescate anticipado

2.2 ELEMENTOS DEL RIESGO DE LAVADO DE DINERO EN EL NEGOCIO ASEGURADOR

Los supervisores de todo el mundo otorgan cada vez más importancia a los controles y procedimientos con los que deben contar las instituciones financieras y dentro de éstas las aseguradoras para mantener procedimientos adecuados para conocer a sus clientes.

Ejercer la debida diligencia con respecto a clientes nuevos y antiguos es una parte muy importante de estos controles. Sin esta debida diligencia, estas entidades podrían correr riesgos de reputación, operativos, legales y de concentración, lo que podría conllevar un coste financiero importante. (The World Bank, 2009)

El **riesgo de reputación** amenaza especialmente a entidades, ya que la clase de negocio que realizan requiere de la confianza de los clientes y el mercado en general. El riesgo de

reputación puede definirse como la posibilidad de que una publicidad negativa relacionada con las prácticas y relaciones de negocios de una aseguradora, cause una pérdida de confianza en la integridad de la institución. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011).

El **riesgo operativo** es el riesgo de una pérdida directa o indirecta resultante de un fallo en los procesos, personal y sistemas internos o de acontecimientos externos. En el contexto de la política conozca su cliente, la mayoría del riesgo operativo tiene que ver con insuficiencias en la aplicación de las políticas de la entidad, procedimientos de control deficientes y el hecho de no practicar la debida diligencia. Si ante los ojos del público la entidad es incapaz de manejar su riesgo operativo convenientemente, el negocio se verá o perjudicado. (Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, 2003)

El **riesgo legal** es la posibilidad de que procesos, sentencias adversas o contratos que resulten ser inaplicables puedan perjudicar las operaciones o la situación de una entidad. Las aseguradoras pueden ser objeto de acciones procesales por no respetar las normas de conozca a su cliente o por no practicar la debida diligencia. Por lo tanto, estas entidades pueden ser, por ejemplo, susceptibles de multas, responsabilidad penal y sanciones especiales impuestas por las entidades reguladores. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011)

Desde el punto de vista de control la preocupación por el **riesgo de concentración** se manifiesta en el activo del balance general de una entidad. Comúnmente, los reguladores exigen no sólo que las entidades cuenten con sistemas de información para identificar las concentraciones de cartera, sino que la mayoría fija también límites prudenciales para restringir los riesgos de las entidades frente a un cliente o grupo de clientes relacionados. Si la entidad no sabe precisamente quiénes son sus clientes ni qué relación tienen con los demás clientes, no podrá medir su riesgo de concentración. (Comité de Basilea, 2001)

2.2.1 Mercado

Es el conjunto de personas y organizaciones que participan de alguna forma en la compra y venta de los bienes y servicios o en la utilización de los mismos.

Para definir el mercado en el sentido más específico, hay que relacionarle con otras variables, como el producto o una zona determinada. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013)

Las personas naturales y jurídicas que conforman el sistema de seguro privado están obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que, en la realización de sus operaciones, puedan ser utilizadas como instrumento para cometer el delito de lavado de activos.

Las medidas de prevención deberán cubrir toda clase de servicios o productos, sin importar que se realicen en efectivo o no. Por lo tanto las empresas de seguros y las compañías de reaseguros deben dentro de su reglamentación interna, contar obligatoriamente con políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos.

La base de todo buen programa de cumplimiento es la adopción e implementación de políticas y procedimientos de debida diligencia. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013). El concepto de la debida diligencia involucra el conjunto de políticas, procedimientos y medidas de control interno que aplica la entidad para conocer a sus clientes, empleados, corresponsales y mercado para evitar que se la utilice como un medio para el cometimiento del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El objetivo de estos procedimientos es permitir a la entidad predecir con relativa certeza los tipos de transacciones que probablemente realizará un cliente. Estos procedimientos ayudan a determinar en qué momento las transacciones pueden ser potencialmente sospechosas.

Es así como dentro de la política “conozca su mercado” (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013, Art. 27) las empresas de seguros y compañías de reaseguro deben conocer a fondo las características particulares de las actividades económicas de sus clientes, así como de las operaciones que éstos realizan en los diferentes mercados a fin de adoptar procedimientos que permitan a la entidad identificar el mercado al cual dirigen los productos que ofrecen y generar señales de alerta en aquellas operaciones que, al compararlas contra dichas características usuales del mercado, se detecten como inusuales.

“Para el efecto, la empresa de seguros o la compañía de reaseguros, según corresponda, deben mantener información actualizada sobre la evolución de los sectores económicos en los cuales interactúan sus clientes”. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013, Art. 28)

Para la aplicación de esta política la empresa de seguros debe contar con más información sobre:

- Conocer y monitorear las características particulares de las industrias en las que sus clientes desarrollan sus actividades económicas o comerciales;
- Mantener información actualizada sobre la evolución de los sectores económicos en los cuales interactúan sus clientes;
- Información general de la actividad económica y de la zona geográfica en la que se ubican los sectores con los que interactúan los clientes;
- Las características de los clientes que pertenecen a determinado segmento;
- Las principales variables macroeconómicas que influyen en el mercado; y,
- Los ciclos que rigen las actividades de sus clientes. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013)

Toda la información precedente debe ser manejada desde dos controles de gran importancia: definición y análisis de factores de riesgo; y, segmentación de mercado.

Factores de riesgo¹⁶

Clientes:¹⁷

- Internos y externos
- Accionistas, Directores, Empleados, Proveedores, Clientes persona natural y jurídica)

Productos y servicios:¹⁸

- Ramos de seguros
- Productos por ramo

Canal ¹⁹

- Directo
- Brókeres
- Agencias
- Agentes
- Mercadeo Masivo

¹⁶ Son parámetros que permiten evaluarlas circunstancias y características particulares de clientes productos y servicios, canal y situación geográfica, con la finalidad de determinar la probabilidad de ocurrencia e impacto de una operación inusual.” Fuente: Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Libro II, Título XII, Capítulo I, Normas para las Instituciones del Sistema de Seguros Privado sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Art. 1, Num. 25, Abril 2013.

¹⁷ Persona natural o jurídica con la que una empresa de seguros o compañía de reaseguro establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial; entre ellos el asegurado, el contratante o solicitante de seguro, beneficiario y apoderado.” Se diferencian tres clases de clientes ocasionales, permanentes y potenciales. Fuente: Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Libro II, Título XII, Capítulo I, Normas para las Instituciones del Sistema de Seguros Privado sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Art. 1, Num. 9-11, Abril 2013.

¹⁸ Son las pólizas de seguros emitidas por las aseguradoras legalmente constituidas y autorizadas para operar en el Ecuador y las sucursales de empresas de seguros extranjeras establecidas y autorizadas a realizar operaciones en el país y la colocación de reaseguros de reaseguradores nacionales, sucursales de reaseguradores extranjeros y reaseguradores extranjeros registrados en la Superintendencia de Bancos y Seguros.” Fuente: Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Libro II, Título XII, Capítulo I, Normas para las Instituciones del Sistema de Seguros Privado sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Art. 1, Num. 44, Abril 2013.

¹⁹ Medio a través del cual los clientes adquieren los productos de seguros.

Situación Geográfica

- Región Costa
- Región Sierra
- Región Oriente
- Región Galápagos

Segmentación²⁰

- Cada segmento o grupo de operaciones y/o transacciones debe corresponder a un grupo de clientes que tengan características comunes;
- Los clientes que realizan normalmente operaciones en un determinado segmento, deben tener justificación financiera para realizar operaciones en otros segmentos; y,
- Si un cliente cambia a un segmento diferente, esto necesariamente se debe a un cambio en su actividad económica.

2.2.2 Clientes

El rol del sistema financiero, en el cual las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI definen roles para los bancos, las compañías de seguros y otras instituciones financieras no bancarias, así como el de las autoridades financieras regulatorias, es la identificación de sus clientes, el mantenimiento de archivos suficientes para permitir la reconstrucción de las transacciones y hacer que esos archivos estén disponibles para las investigaciones y procesos penales.

Las recomendaciones alientan a las instituciones a realizar serios esfuerzos para identificar y reportar actividades sospechosas y adoptar políticas efectivas, procedimientos y controles internos para evitar el lavado de activos. Así también estimulan a los estados a adoptar

²⁰ Es el resultado de definir, identificar, clasificar y analizar adecuadamente los grupos de sus clientes, en función de sus características y criterios de riesgos adoptados.” Fuente: Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Libro II, Título XII, Capítulo I, Normas para las Instituciones del Sistema de Seguros Privado sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Art. 1, Num. 49, Abril 2013.

medidas legales para proteger a las instituciones y sus empleados de responsabilidades legales en los casos de lavado.

Es así, que la recomendación 5 del Gafi indica las directrices para que las instituciones del sistema financiero, lleven a cabo los procedimientos de Debida Diligencia respecto de sus clientes.

Recomendación 5 - GAFI

Procedimientos de debida diligencia y registros actualizados sobre clientes

Las instituciones financieras no deberían mantener cuentas anónimas o cuentas a nombre evidentemente ficticios.

Las instituciones financieras deberían tomar medidas para llevar a cabo procedimientos de debida diligencia sobre sus clientes, entre ellas, la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, cuando:

- se inicien relaciones comerciales;
- se lleven a cabo transacciones ocasionales: (i) por encima del umbral designado aplicable; o (ii) que sean transferencias electrónicas en las circunstancias cubiertas por la Nota Interpretativa de la Recomendación Especial VII;
- exista la sospecha de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo; o
- la institución financiera tenga dudas acerca de la veracidad o congruencia de la información identificatoria del cliente obtenida anteriormente.

Las medidas a tomar sobre procedimientos de DDC, son las siguientes:

- a) identificar al cliente y verificar la identidad de ese cliente empleando documentos, datos e información de una fuente independiente, confiable;
- b) identificar al titular beneficiario final, y tomar medidas razonables para verificar la identidad del titular beneficiario final de modo que la institución financiera quede convencida de que conoce al titular beneficiario final. En el caso de las personas jurídicas y las entidades jurídicas, las instituciones financieras además, deberían tomar medidas razonables para conocer la estructura de propiedad y control del cliente;
- c) obtención de información sobre el objeto y la supuesta naturaleza de la relación comercial;
- d) llevar a cabo un procedimiento de debida diligencia permanente respecto de la relación comercial, así como un escrutinio de las transacciones realizadas durante todo el curso de esa relación, con el fin de asegurar que las transacciones que se están haciendo son compatibles con lo que la institución sabe del cliente, sus negocios y perfil de riesgo, incluso el origen de los fondos, en caso necesario.

Las instituciones financieras deberían aplicar cada una de las medidas sobre procedimientos de DDC de los puntos a) a d), precedentes, pero podrán determinar el alcance de esas medidas sobre la base de la sensibilidad al riesgo, según el tipo de cliente, relación comercial o transacción. Las medidas que se adopten deberían ser

coherentes con cualquier pauta dictada por las autoridades competentes. En lo que hace a las categorías de mayor riesgo, las instituciones financieras debería llevar a cabo un procedimiento de debida diligencia más exhaustiva. En algunas circunstancias en que los riesgos sean menores, los países pueden decidir que las instituciones financieras pueden aplicar medidas más reducidas o simplificadas.

Las instituciones financieras deberían verificar la identidad del cliente y del titular beneficiario final antes y mientras se establece una relación comercial o se hacen transacciones con clientes ocasionales. Los países pueden permitir a sus instituciones financieras que completen la verificación lo antes posible después de establecida la relación, cuando los riesgos de lavado de dinero se estén manejando con eficacia y cuando sea esencial para no interrumpir el curso normal de los negocios.

En los casos en que la institución financiera no pueda cumplir con lo previsto en los puntos (a) a (c) anteriores, no debería abrir la cuenta, iniciar relaciones comerciales ni llevar a cabo la transacción; o debería poner fin a la relación comercial; y debería pensar en hacer un reporte de operaciones sospechosas en relación con el cliente.

Estos requisitos se aplicarían a todos los clientes nuevos, aunque las instituciones financieras también deberían aplicar esta Recomendación a los clientes ya existentes en base a su importancia y riesgo, y deberían llevar a cabo un procedimiento de debida diligencia respecto de las relaciones existentes en momentos apropiados. (Financial Action Task Force, 2012)

En las empresas de seguros las políticas y procedimientos de debida diligencia en la identificación de clientes deberán contener reglas que permitan obtener un adecuado conocimiento de los clientes potenciales, actuales, permanentes y ocasionales que operan con la empresa de seguros o compañía de reaseguros, vinculados a ellas de manera directa o por medio de intermediario, según sea el caso, prestando especial atención a las características, naturaleza y dimensión de las coberturas a contratar.

La identificación del cliente implica el conocimiento y revisión de todos los datos de la persona natural o jurídica al momento de iniciar o renovar la relación contractual, ya sea en la suscripción de pólizas, al realizar pagos relacionados con el curso del seguro o reaseguro o al proporcionar cualquier otro servicio.

La identificación del cliente se realizará cuando:

- Se inicie o se renueve la relación comercial o contractual;
- Durante el transcurso de la relación contractual; ya sea en la suscripción, pago relacionados con el seguro o reaseguro o al proporcionar cualquier otro servicio;

- Para el caso de las pólizas de vida, se requiere evidenciar el interés asegurable del asegurado, de conformidad con el artículo 65 del Decreto Supremo No. 1147, publicado en el Registro Oficial No. 123 de 7 de diciembre de 1963.
- En el caso de personas jurídicas, el conocimiento del cliente supone, además, llegar a conocer la identidad de las personas naturales propietarias de las acciones o participaciones, o la identidad de quien tiene el control final del cliente persona jurídica. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013)

Los procedimientos implementados para la identificación del cliente, deben permitir la realización de las diligencias necesarias para confirmar los datos suministrados en el formulario o solicitud de inicio o de renovación de relación comercial con la empresa de seguros y/o compañía de reaseguros.

La política “conozca a su cliente”²¹, implica adicionalmente:

- Establecer el perfil financiero del cliente para lo cual deberá:
 - Conocer el volumen o índole de los negocios del cliente o cualquier otra actividad económica declarada al inicio de la relación contractual.
 - Conocer las características, montos y procedencia de los ingresos de acuerdo a la categoría de riesgo definida por la empresa de seguros o la compañía de reaseguros, según corresponda.

Respecto de los clientes, conocer las características y montos de sus transacciones y operaciones, tales como primas y/o sumas aseguradas o reaseguradas.

²¹ Esta política tiene que ver con el riesgo de conocimiento del cliente para lo cual es necesario contar con información que permita elaborar un estado de situación pasada, presente y futura, de cuyo análisis se pueda evaluar las capacidades del potencial cliente en función de los riesgos detectados. La información debe caracterizarse por ser útil, oportuna confiable, histórica presente, futura, cuantitativa y cualitativa.

Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Libro II, Título XII, Capítulo I, Normas para las Instituciones del Sistema de Seguros Privado sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Art. 12, Abril 2013

Las metodologías implementadas por las empresas de seguros o por las compañías de reaseguros, según sea el caso, para conocer al cliente deben facultarle, cuando menos, el recaudo de información que permita comparar las características de las transacciones con la actividad económica y su situación financiera.

Monitorear permanentemente las operaciones y transacciones de los clientes considerando los momentos y objetivos que se enumeran a continuación:

- Cuando se realice operaciones o transacciones que no guarden relación con el perfil del cliente, levantado por la empresa de seguros o la compañía de reaseguros, según corresponda.
- Cuando se efectúen pagos por concepto de primas, en seguros o reaseguros de vida, a través de transferencias electrónicas de fondos, caso en el cual, se deberá solicitar: el nombre, identificación y domicilio del ordenante y/o del beneficiario y del banco ordenante, entre los más importantes.
- Establecer el perfil transaccional del cliente en el que se incluya el origen de los fondos, la frecuencia, volumen y características de las transacciones de sus clientes.
- Determinar que el volumen de transacciones guarde relación con las actividades y capacidad económica declarada por el cliente. (Pérez, 2006)

2.2.3 La Póliza

Es el documento privado que contiene los elementos esenciales del contrato de seguro, y que tiene valor probatorio de las obligaciones y derechos de los contratantes.

El Art. 6 del Decreto Supremo 1147 publicado en el Registro Oficial 123 del 7 de diciembre de 1963, nos dice lo siguiente: “El Contrato de seguro se perfecciona y prueba por medio de documento privado que se extenderá por duplicado y en el que se harán constar los elementos esenciales. Dicho documento se llama Póliza; ésta debe detectarse

en castellano y ser firmada por los contratantes. Las modificaciones del contrato o póliza, lo mismo que su renovación deben también ser suscritas por los contratantes.”

Del artículo anterior podemos indicar que a la póliza se la define de la siguiente manera: Póliza es el documento privado que perfecciona, prueba y contiene los elementos esenciales del contrato de seguro, deberá ser emitida por duplicado, redactada en idioma castellano y firmada por los contratantes.

El Art. 25 de la Ley General de Seguros publicada en el Registro Oficial No. 290 del 3 de abril de 1998 establece que las pólizas requieren autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros para su pleno vigor y que deberán contener una serie de condiciones que se resumen como legales (Decreto Supremo 1147), de equidad, de igualdad, de claridad (coberturas, siniestros), de jurisdicción voluntaria (árbitros, mediadores), de principios (técnicos, respaldo).

El incumplimiento de la inclusión de esas condiciones será sancionado por el órgano de control con la suspensión de nuevas pólizas e incluso con la pérdida de la autorización de operación del ramo, sin perjuicio de otras sanciones de carácter legal.

La afirmación de que la póliza prueba la existencia del contrato de seguro no excluye la posibilidad práctica de que se pruebe mediante otros medios (notas de cobertura provisional, pago de prima, anexos modificatorios, endosos aclaratorios, recibos de cobro, pago de siniestros, etc.). Es decir la existencia de contrato de seguro no depende de la existencia de la póliza. (Uzcátegui, 2010)

2.2.3.1 Contenido Obligatorio de la Póliza

El Art. 7 del Decreto Supremo 1147 dispone imperativamente “Toda póliza debe contener”. La sanción por falta de una de las condiciones creo que trae consecuencias sólo a la aseguradora más no al asegurado, por tanto no podría hablarse de nulidad del documento y peor aún de inexistencia del contrato de seguro. (Uzcátegui, 2010)

El nombre y domicilio del asegurador

Esta exigencia no merece mayor comentario, el literal b del Art. 4 del Reglamento de la General de Seguros establece la obligación de los promotores de una compañía de seguros de registrar el domicilio de la compañía.

El nombre y el domicilio de la compañía son necesarios para efectos de determinar la jurisdicción a la que está sometida la empresa (jueces competentes). Y el lugar de pago de la prima (Art. 18 Decreto Supremo). (Uzcátegui, 2010)

El nombre y domicilio del solicitante, asegurado y beneficiario

En todo contrato es necesaria la determinación de las identidades de las partes contractuales (generales de ley), ya que de ella nacen las obligaciones y los derechos.

Una de las obligaciones del solicitante, asegurado o beneficiario es notificar la modificación del riesgo asegurado, el cambio de domicilio puede ser considerado como modificación del riesgo, caso contrario, la aseguradora tiene el derecho de dar por terminado unilateralmente el contrato o a exigir el ajuste de la prima.

La Calidad en que actúa el solicitante del seguro

Cuando se hablaba de Interés Asegurable, se dice que es el vínculo jurídico – económico entre el titular del patrimonio, cuyo riesgo se traslada a la aseguradora, y el bien a ser asegurado. Por lo tanto la determinación de la calidad de quien contrata el seguro es de absoluta necesidad, ya que de ella se desprende los derechos y obligaciones de las partes, fundamentalmente, el que la aseguradora sepa con absoluta certeza quien, en caso de siniestro, ha de pagar la indemnización.

La determinación de la calidad en que actúa el tomador de la póliza es de vital importancia ya que permite a la aseguradora determinar si está frente a un contrato de buena fe o ante un intento de fraude.

El fraude en los seguros (incluso en reaseguro) es un acto u omisión engañosa con la intención de obtener alguna ventaja por parte de quien comete el fraude (el defraudador) o para otras personas. La mayoría de las jurisdicciones cuentan con disposiciones legales contra el fraude en los seguros. En muchas jurisdicciones, el fraude es un acto delictivo.

El fraude en los seguros puede tomar diferentes formas y ser perpetrado por cualquier parte involucrada en los seguros, incluso las aseguradoras, los gerentes y personal de las aseguradoras, intermediarios, contadores, auditores, consultores, liquidadores de siniestros, terceros denunciadores y asegurados. (Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, 2011, pp. 338-344).

La identificación precisa de la persona o cosa con respecto a la cual se contrata el seguro

La determinación del Riesgo Asegurado, es uno de los elementos esenciales del contrato de seguro, por tanto, la falta de él acarrearía la inexistencia del contrato.

Recordando lo antes señalado, la aseguradora establece el monto de la prima en base a la valoración del riesgo asumido, la perfecta identidad (características, calidad, cantidad, etc.) del riesgo asegurado determinó la asimilación del riesgo y el establecimiento correlativo de la prima.

Por tanto, es indispensable la perfecta identificación del riesgo asegurado para evitar problemas de producirse un siniestro y que él pueda generar, efectivamente, el derecho al cobro del valor asegurado y evitar así la oposición de la aseguradora a realizar el mismo. (Uzcátegui, 2010)

La vigencia del contrato, con la indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de determinar unas y otras

El contrato de seguro asume un riesgo dentro de ciertos límites en el tiempo y en el espacio, es decir que otorga protección o cobertura dentro de ciertos límites temporales (tiempo) y espaciales (circunscripciones geográficas).

El contrato de seguro, necesariamente, deberá establecer cuáles son esos límites (tiempo – espacio) dentro de los cuales han de coexistir derechos y obligaciones de las partes

contractuales, y, como todo contrato, ha de tener la determinación precisa, o la forma de determinarlo, de las fechas de comienzo y fin de la relación contractual.

La demarcación exacta de la coordenada tiempo, de la relación espacio – tiempo, será de vital importancia de producirse un siniestro para determinar si él se produjo dentro de la existencia de la póliza.

Un ejemplo, del límite espacial, tenemos en la póliza de transporte con la cobertura “de bodega a bodega” o “de puerto a puerto” en que se desconoce las fechas de embarque o desembarque. (Uzcátegui, 2010)

El monto asegurado o el modo de precisarlo

El monto asegurado es el límite de la responsabilidad de la aseguradora frente a asegurado o beneficiario, y también que existe la posibilidad de que él no conste en el contrato de seguro, pero sí deberá establecerse la forma o modo de precisarlo.

Siempre el problema de se da en caso de siniestro, ya que existe la facultad de la aseguradora, de liquidar el mismo en base a su valoración (infraseguro o sobre seguro), para evitar este tipo de divergencias, siempre será mejor determinar objetivamente el monto del valor asegurado.

Es el seguro de transporte bajo la modalidad de “flotante”, en el cual se determina el valor asegurado y la vigencia de la misma, con las “aplicaciones” en las cuales se señala, el riesgo asegurado y el monto asegurado, en base a la información que entrega el asegurado a la aseguradora.

En el seguro de vida la determinación del valor asegurado se da por acuerdo entre asegurado y aseguradora bajo ciertas consideraciones específicas. (Diccionario MAPFRE, 2013)

La prima (Diccionario Mapfre)

La prima es un elemento esencial del contrato de seguro, sin la determinación de ella no existe contrato de seguro.

La prima es costo del seguro que debe pagar el solicitante, asegurado o beneficiario a la aseguradora a cambio de la asimilación del riesgo del interés asegurable y cuyo monto se mira como equivalente al riesgo transferido (cálculo actuarial).

Por lo dicho, es imprescindible que en la póliza, documento probatorio del contrato, conste la prima o la forma de calcularla. (Uzcátegui, 2011)

La naturaleza de los riesgos tomados a su cargo por el asegurador

La naturaleza del riesgo asumido por aseguradora determina objetivamente el tipo de cobertura que se asigna al contrato de seguro, esto es importante para evitar confusiones sobre el ramo o tipo de amparo.

El Art. 10 del Decreto Supremo 1147 señala que debe determinarse claramente los riesgos asumidos por la aseguradora de tal manera que no exista duda sobre las coberturas y las exclusiones.

La fecha en que se celebra el contrato y la firma de los contratantes

La fecha de la celebración del contrato de seguro determina la fecha del inicio de la relación contractual, y en términos generales, el inicio de las coberturas o amparos, excepcionalmente, el inicio de la cobertura puede ser anterior o posterior a la fecha del contrato.

La firma de la póliza por parte de los contratantes significa o representa la convención o acuerdo de las partes sobre el contenido del documento privado. Aquí puede darse el caso, de que puede firmar el solicitante.

Las demás cláusulas que deben figurar en la póliza de acuerdo con las disposiciones legales

Otras disposiciones legales sobre las pólizas son las contenidas en Art. 25 de la Ley General de Seguros, que establece que toda póliza, las tarifas de primas y notas técnicas para su vigencia deben ser aprobadas por el órgano de control de las compañías de seguros, la Superintendencia de Bancos y Seguros y que deben sujetarse mínimo a las siguientes condiciones:

- “Responder a normas de igualdad y equidad entre las partes contratantes;
- Ceñir su contenido a la legislación sobre el contrato de seguro constante en el Código de Comercio, el Decreto Supremo No. 1147 publicado en el Riesgo Oficial No. 123 de 7 de diciembre de 1963, a la presente Ley y a las demás disposiciones que fueren aplicables;
- Ser su reducción de clara comprensión para el asegurado;
- Los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles;
- Figurar las coberturas básicas y las exclusiones con caracteres destacados en la póliza;
- Incluir el listado de documentos básicos necesarios para la reclamación de un siniestro;
- Incluir una cláusula en la que conste la opción de las partes de someter a decisión arbitral o mediación las diferencias que se originen en el contrato o póliza de seguros;
- Toda póliza de seguros emitida a plazo superior a un año, que cubra daños a las personas y a los bienes inmuebles, deberá ser expresada en unidades de valor constante (UVC), en moneda extranjera u otra forma de ajuste autorizada por la Superintendencia de Bancos;

- Señalar la unidad o moneda en la que se pagarán las primas y siniestros. El valor de la unidad de valor constante (UVC) o la cotización al valor de venta de la moneda extranjera será los vigentes a la fecha efectiva de pago de las primas y de las indemnizaciones.
- Cuando las condiciones generales de las pólizas o de sus cláusulas especiales difieran de las normas establecidas en la legislación sobre el contrato de seguros, prevalecerán estas últimas sobre aquellas.
- Las tarifas de primas se sujetarán a los siguientes principios:
- Ser el resultado de la utilización de información estadística que cumpla exigencias de homogeneidad y representatividad; o,
- Ser el resultado del respaldo de reaseguradores de reconocida solvencia técnica y financiera. (Ley General de Seguros, Art. 25)

CONDICIONES DE LA PÓLIZA

Por “Condiciones de la Póliza” se debe entender como el contenido clausular del documento privado y otros documentos que forman parte de la relación contractual y estas son: Generales; Particulares; y Especiales.

Condiciones Generales

Son el conjunto de cláusulas que contiene las pólizas y que son de carácter general, y que constan en todos los contratos de seguros de una misma naturaleza.

De las características del contrato de seguro se dice que es un contrato de adhesión porque el asegurado acepta las condiciones preestablecidas en las pólizas, sin opción de negociación, ya que esas condiciones son aprobadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

En consecuencia las condiciones generales son aquellas que cumplen las disposiciones del Art. 25 de la Ley General de Seguros y las disposiciones relativas del Decreto Supremo 1147. (Coberturas, exclusiones, prima, procedimiento de reclamación, delimitación de la vigencia, subrogación, jurisdicción, domicilio; entre otras.).

Características

- Son aprobadas por el órgano de control.
- Son de adhesión (no son de libre discusión).
- Son comunes a todos los contratos de un mismo ramo.

Condiciones Particulares

Se caracterizan por:

Ser reglas o estipulaciones que se han convenido por mutuo acuerdo entre las partes contratantes y fijan los elementos de la relación singular acordada que se hallan enunciados en el artículo 7 de la Legislación sobre el Contrato de Seguro, contenida en el Decreto Supremo No. 1147 de 29 de noviembre de 1963, publicado en el Registro Oficial No. 123 de 7 de diciembre de 1963.

Su naturaleza es variable y por lo tanto, pueden ser libremente modificadas por consentimiento de las partes, a través de un anexo modificatorio. Las últimas de tales modificaciones suscritas por los contratantes, prevalecen sobre las anteriormente convenidas.

Las condiciones particulares de las pólizas y los anexos modificatorios de las mismas no requieren aprobación de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Los anexos modificatorios deben llevar la identificación precisa de la póliza a la cual se incorporan, la fecha de suscripción y las firmas de los contratantes.

Las condiciones particulares de las pólizas que no estén suscritas por el asegurado se reputan no escritas. (Superintendencia de Bancos y Seguros, Artículo 4, Num. 1)

Entre las condiciones particulares tenemos:

- Designación de las partes;
- Calidad del tomador (Interés asegurable);
- Naturaleza del riesgo (Riesgo asegurado, Cobertura);
- Suma asegurada;
- Valor de la prima;

- Forma de pago;
- Vigencias.

Condiciones Especiales

Las que amplían, condicionan, delimitan, modifican o suprimen riesgos, extienden o restringen las coberturas previstas en las condiciones generales de las pólizas, o instituyen nuevas condiciones de protección, sin que contengan disposiciones expresamente prohibidas por la Ley General de Seguros y su reglamento general, la Legislación sobre el Contrato de Seguro y, los principios de la técnica de los seguros; y,

Aprobadas previamente por la Superintendencia de Bancos y Seguros, antes de ponerlas en vigencia. Prevalecerán sobre las condiciones generales. Deberán elaborarse en anexos, cláusulas, entre otros, para ser incorporadas a las pólizas que correspondan. (Superintendencia de Bancos y Seguros, Artículo 4, Num. 1)

Características

- Prevalecen sobre las Condiciones Generales;
- Están subordinadas a las Condiciones Particulares; y,
- Requieren aprobación del órgano de control.

A las condiciones especiales se las conoce también con el nombre de adicionales y sirven para satisfacer las necesidades de otras coberturas no contratadas en un inicio dentro de un ramo específico.

A manera de ejemplo podemos mencionar: Terremoto; Motín y huelga; Daños maliciosos; Remoción de escombros; Cláusula de guerra; Inundación; Lucro cesante; Responsabilidad civil; rotura de vidrios; y etc.

Existe la presunción de que todo anexo que contenga las condiciones o estipulación especiales, contiene las disposiciones del Art. 25 de la Ley General de Seguros, el incumplimiento de ello hará acreedora a la aseguradora a las sanciones que van de suspender la emisión de nuevas pólizas hasta el retiro de la autorización de operación en el ramo respectivo.

2.3 TIPOS DE SEGUROS²²

2.3.1 Seguro marítimo

Cubre los daños o pérdidas que pueden sufrir las naves o embarcaciones en general por riesgos del mar, como naufragio o hundimiento, caradura, colisión, incendio, explosiones de calderas, averías o roturas de máquinas, etc. Según cuál sea el objeto asegurado, puede distinguirse entre:

- Seguro del buque: también denominado seguro de casco, mediante el que se garantiza, además de los riesgos señalados, la responsabilidad frente a terceros, derivada del abordaje, cuando el buque asegurado sea declarado culpable de daños ocasionados a otro buque.
- Seguro de la carga, o de las mercancías transportadas.
- Seguro de flete
- Seguro del beneficio posible, entendiendo por tal las ganancias que el dueño de las mercancías espera obtener de las mismas en el puerto de destino.”

2.3.2 Seguro de transporte

Cubre las pérdidas o daños de las mercaderías, valores u objetos transportados sea por vía marítima, aérea o fluvial.

2.3.3 Seguro de vida

Cubre el riesgo de muerte que puede sobrevenir al Asegurado durante la vigencia del Seguro. En este tipo de póliza se debe delimitar el concepto de asegurado, de tomador del seguro o contratante, y de beneficiario.

²² Los conceptos de los tipos de seguros han sido analizados con base en las definiciones del Diccionario Mapfre de Seguros, las Leyes que les corresponde y el Documento de Fernando Uzcátegui “El Contrato de Seguros, Base Legal”.

Hay diferentes modalidades de Seguro de Vida:

- Temporal: Cuando la vigencia es por un determinado número de años.
- De Vida Entera: Cuando el seguro se mantiene vigente desde su contratación hasta la muerte del Asegurado.
- Total: Indemnizada el importe del capital previsto en caso de muerte del Asegurado en cualquier momento de la vigencia temporaria, o también, en caso de supervivencia del Asegurado, al final del plazo de la citada vigencia.
- Desgravamen Hipotecario: Seguro obligatorio por mandato de Ley para cubrir el saldo pendiente de pago de una deuda adquirida con fines de vivienda, en el momento de ocurrir la muerte del prestatario.

2.3.4 Pólizas ocasionales

Aquellas que se ajustan a un solo período de tiempo y al terminarse éste quedan sin efecto y se cobra una prima única. Son utilizadas más que todo por viajeros, turistas, arrendadoras de autos, en donde la póliza es temporal.

2.3.5 Pólizas abiertas

Son usadas por empresas, industrias en donde ellos tienen estipulados una prima que siempre pagan. La empresa siempre tiene que dejar por lo menos un 20% inscrito; en donde ingresan y egresan trabajadores inscritos en esa póliza, y ese contrato queda abierto.

2.3.6 Seguro de incendio

Cubre los daños o pérdidas que el fuego puede ocasionar a los bienes que son materia del seguro, como edificios, industrias, mercaderías y cualquier otro elemento del activo fijo y patrimonio del Asegurado. Siendo un ramo complejo, se extiende a cubrir otros riesgos llamado “aliados” tales como terremoto, explosión, inundación, daños por humo, daños por

agua, conmoción civil, daño maliciosos y/o vandalismo, caída de aeronaves, impacto de vehículos etc.

2.3.7 Seguro de automóviles

Cubre los daños o la pérdida como consecuencia del uso de los vehículos automotores. Básicamente protege el daño propio del vehículo a consecuencia de choque o volcadura, incendio, robo y rotura de vidrio. Cubre además responsabilidad civil o daños a terceros.

2.3.8 Seguro contra fidelidad de empleados

Deshonestidad frente a la Empresa. Llamado comúnmente “Fianza”, cubre los actos deshonestos de un empleado dependiente en el manejo de valores o dinero, que pueden causar pérdidas en los intereses del empleador.

2.3.9 Seguro contra robo y asalto

Cubre la apropiación ilícita de bienes o valores, ocasionada por persona ajena con perjuicio del Asegurado, mediante la violencia, fractura o amenaza. La Póliza de Cobertura define y establece las diferentes modalidades de este riesgo y las condiciones de los seguros.

2.3.10 Seguro de lucro cesante

Cubre las pérdidas económicas que puede sufrir una Empresa con motivo de una paralización de fábricas o interrupción de la explotación, debido a causas imprevistas como Incendio, rotura de maquinaria. El seguro consiste en indemnizar al Asegurado por el monto de las pérdidas según un análisis de los siniestros y las coberturas pactadas.

2.3.11 Seguro de responsabilidad civil

Consisten en la protección que el seguro ofrece a las personas o empresas para el caso de que éstos tengan Responsabilidad Civil por daños causados a terceros en su persona o en su propiedad, ocurridos con ocasión de actos propios del Asegurado o del personal a sus órdenes.

2.3.12 Seguro de ramos técnicos

Llamados también Seguros de Ingeniería, comprende los siguientes ramos:

- Todo Riesgo para Contratistas (C.A.R).
- Todo Riesgo para Montaje y (E.A.R.).
- Rotura de Maquinaria.
- Todo Riesgo Equipo y Maquinaria de Contratistas (T.R.E.C.).
- Todo Riesgo de Equipo Electrónico (T.R.E.E).
- Obras Civiles Terminales.
- Pérdida de Beneficios por Rotura de Maquinaria.

2.3.13 Seguro domiciliario

Comprende una Cobertura global o mixta que incluye varios otros riesgos de los ramos descritos, tales como pérdidas o daños por incendio o robo a la propiedad del Asegurado (domicilio) sobre sus efectos personales, muebles, menajes, joyas y otros objetos, así como los gastos de curación por accidentes de los trabajadores del hogar, R.C. del Asegurado en su domicilio, daños al edificio del domicilio causados por robo, y rotura accidental de vidrios. (Multiriesgos Hogar).

2.3.14 Seguro de rotura de maquinaria

Comprende la cobertura de los daños accidentales, súbitos e imprevistos, en los bienes asegurados, causados directamente por:

- Impericia, negligencia, descuido y manejo inadecuado.
- La acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortocircuito, arco voltaico y otros efectos similares, así como la acción indirecta de electricidad atmosférica.
- Errores de diseño, defectos de construcción, fundición y uso de materiales defectuosos, fatiga molecular, sobrecalentamiento.

- Defectos de mano de obra, montaje incorrecto y/o defectuoso.
- Rotura debida a fuerza centrifuga.
- Cuerpos extraños que se introduzca en los bienes asegurados.
- Falta de agua en calderas de vapor.
- Explosión física, siempre y cuando se origine en la máquina misma o recipiente asegurado, implosión.
- Explosiones químico de gas impropriamente quemados en la cámara de combustión, de calderas o máquinas de combustión interna (sólo se cubren los daños por explosión de las mismas máquinas aseguradas).
- Cualquier otra causa que obligue a la reparación o reemplazo de los bienes asegurados y que no se encuentre expresamente excluida en la condición segunda. – Exclusiones de las condiciones generales de esta póliza.

3 LOS SISTEMAS DE CONTROL Y AUTORREGULACIÓN

3.1 TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES E INTERGUBERNAMENTALES VIGENTES

La ley de lavado de dinero fue precedida por una serie de iniciativas nacionales e internacionales. Desde la década del ochenta comenzó un movimiento que pretendió regular y resguardar el orden socioeconómico global, describiendo un patrón que parte del lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que desembocó en corrupción, crimen organizado y soborno transnacional. Los acuerdos no sólo abarcaron filtros corporativos, controles policiales y sanciones penales, sino también normas tendientes a regular las prácticas económicas y financieras internacionales. A su vez, esto no se vio limitado a la definición de instrumentos, sino que abarcó la conformación de grupos y redes internacionales destinados a elaborar procedimientos y monitoreo de diferentes fuentes de información.

En este campo existen convenciones en el marco de las Organización de las Naciones Unidas, acuerdos celebrados en cumbres presidenciales adhesiones a convenios regionales, iniciativas policiales, entre otros. Esos acuerdos han derivado en la creación de un número creciente de organizaciones supranacionales dedicadas al monitoreo de los sistemas financieros y al reforzamiento del control policial internacional.

A continuación se detallan los convenios internacionales e intergubernamentales vigentes más importantes.

3.1.1 Convención Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas

La Convención Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas –Convención de Viena- del 20 de diciembre de 1988, trata del primer

documento internacional en el que las partes o Estados se obligan a aprobar una legislación doméstica represiva del blanqueo de bienes procedentes de actividades ilegales, aunque restringida al tráfico de drogas. Esta Convención es también importante no sólo por su intención de igualar las leyes penales, sino por instaurar, a la par, el decomiso anticipado de bienes, mayores restricciones al secreto bancario y, en general, ciertos mecanismos de ayuda judicial. (Orsi, 2007, pp. 149-155)

Aunque la Convención hace énfasis sobre el comercio de estupefacientes y su incidencia sobre la sociedad, también menciona en su declaración de motivos que la producción, demanda y tráfico de drogas constituía una actividad delictiva organizada que, en relación con otras manifestaciones del crimen organizado, podían desmejorar las economías lícitas y amenazar la estabilidad, seguridad y soberanía de los Estados. Esta situación se nutría de los considerables rendimientos financieros y fortunas generados por las empresas criminales transnacionales, lo cual los lleva a invadir, contaminar y corromper las estructuras de la Administración Pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad en todos sus niveles.

Es claro, entonces, que la Convención introdujo una primera aproximación al lavado de dinero, el cual quedó reducido, a aquellos dividendos obtenidos de la producción y comercialización de drogas. Estructuralmente la norma está compuesta por cuatro clases de conductas básicas, la primera emplea los verbos: adquirir, poseer, y utilizar. Respecto del objeto de estas conductas, se trata de bienes que procedan de los delitos delimitados por la Convención.

La segunda emplea los verbos convertir y transferir. El objeto de estas conductas son los bienes de procedencia delictiva que el sujeto activo debió convertir o transferir a sabiendas de tal condición, es decir que las conductas deben desarrollarse con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes; o ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de esos delitos, a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.

El tercer grupo de conductas se identifica con los verbos ocultar y encubrir el objeto del delito que son los bienes o los derechos relativos a tales bienes. Como en los casos anteriores, se exige que el encubrimiento se realice a sabiendas de que tales derechos y

bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados por la Convención, o de un acto de participación en ellos.

En cuarto lugar, y respecto de estos tres grupos de conductas básicas, la Convención plantea reprimir, la instigación, la inducción pública, y la participación en ellos, la asociación y la confabulación para cometerlos y la asistencia, incitación, facilitación o el asesoramiento en relación con su comisión. Su incorporación se encuentra sujeta a reserva de los principios constitucionales y de los conceptos fundamentales del sistema jurídico de cada Estado.

La Convención también prevé determinadas circunstancias agravantes del delito de lavado de dinero, como ser, la participación del sujeto activo en un grupo delictivo organizado, la participación en otras actividades ilícitas cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito lavado.

Como se observa la Convención es lo suficiente amplia como para que estas figuras puedan ser adaptadas a las múltiples legislaciones de los Estados que participaran en su constitución. Finalmente la Convención pretende reaccionar contra los efectos nocivos del comercio de drogas sobre la sociedad, sugiriendo la sanción de ciertos tipos de delitos que, necesitan un extenso debate respecto de su lesividad.

3.1.2 Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Una nueva tendencia en la persecución de ilícitos financieros fue la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, celebrada en Palermo. Las iniciativas de este organismo prácticamente describían un proceso que se origina con la droga como mercadería, luego deriva en los beneficios generados por su comercialización, posteriormente en los beneficios que provienen de la comisión de delitos graves, y, finalmente, en la corrupción y el crimen organizado como empresa con fines de lucro. Esta Convención define la delincuencia organizada transnacional apelando a una serie de rasgos. El primero de ellos dio una definición al término organización: estaremos en presencia de ella cuando exista un grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo. El segundo rasgo se refiere a la

finalidad que debe perseguir la organización, tener como mira la obtención, directa o indirecta, de un beneficio económico u otro beneficio de orden material. El último tiene que ver con la actividad desarrollada por la organización para obtener este beneficio económico: concertadamente con el propósito de cometer un delito o varios delitos que la Convención define apelando a un monto máximo de pena. Por otra parte, la Convención impulsa la tipificación de diversas actividades participativas, de las cuales cabe mencionar la confabulación como un caso extremo, así como también la posibilidad de que las personas jurídicas sean sujetos de sanción penal. En este sentido, la Convención se encarga de poner énfasis en la intrínseca vinculación que guarda la criminalidad organizada con el lavado de capitales. (Orsi, 2007, pp. 155-157)

Este nuevo acuerdo reitera el rol central que desempeña la cooperación entre los Estados en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional. Por esto se profundiza sobre el decomiso e incautación de bienes y productos, la agilización de los procesos de extradición, la imposibilidad de alegar secreto bancario y el intercambio amplio de información.

3.1.3 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción

Posteriormente en diciembre de 2003, el lavado de activos de origen delictivos fue nuevamente tratado por en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, celebrada en la ciudad de Mérida, Méjico. Esta Convención trata tanto la figura de blanqueo como la de encubrimiento que resultan de una estructura similar a la forma original definida en la ciudad de Viena. Sin embargo, esta Convención es significativa en tanto demuestra el afianzamiento de una tendencia: el lavado de activos, circunscrito al principio a una especie determinada de delito subyacente, avanza lenta, pero segura hacia la incorporación de un número creciente de delitos, conforme éstos llamen la atención de la comunidad internacional. (Orsi, 2007, pp. 157-158)

3.2 LA LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS: TIPIFICACIÓN DEL DELITO Y OBLIGACIONES

El Ecuador suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 19 de diciembre de 1988, conocida como “Convención de Viena”, y la ratificó mediante Decreto Ejecutivo No. 1329, publicado en el Registro Oficial No. 400 de 21 de marzo de 1990.

Asimismo, el Ecuador suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 15 de noviembre de 2000, conocida como “Convención de Palermo”, ratificándola mediante Decreto Ejecutivo No. 2521, publicado en el Registro Oficial No. 561 de 23 de abril de 2002.

En cumplimiento del contenido de los literales a), b) y c) del Numeral 1 del Artículo 3 de la Convención de Viena, así como del Numeral 1 del Artículo 6 de la Convención de Palermo, Ecuador tipificó el delito de Lavado de Activos en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, que se promulgó en el Registro Oficial No. 127 de 18 de octubre de 2005.

Esta Ley básicamente señala que:

- El delito de lavado de activos se hace extensivo a todo tipo de bienes sin importar su valor, por tanto en caso de verificarse la comisión del delito por una suma igual o inferior a 5000 dólares, para lo cual las penas a aplicar son las previstas en los artículos 16 y 17 de la mencionada Ley.
- Según lo establecido en el inciso final del artículo 14 de la Ley en mención, se constituyen delitos precedentes al de lavado de activos todos los delitos de tráfico ilícito y demás delitos graves, entendidos éstos como aquellas conductas que constituyen una conducta censurable “con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave”, conforme lo previsto en el Literal b) del Artículo 2 de la Convención de Palermo.

- Por lo anterior se indica que en el Ecuador, todo ilícito que genere un rédito económico constituye delito precedente de lavado de activos. En el mismo sentido se termina señalando que no se aplica, en el sistema jurídico de Ecuador, el criterio de umbral, ni se requiere establecer un listado mínimo de ilícitos precedentes al delito de lavado de activos.
- Respecto a la conspiración y la proposición, en el marco del delito de lavados de activos, estas hipótesis se encuentran debidamente tipificadas en los literales d) y e) respectivamente del artículo 14 de esta Ley.

Sin embargo de lo mencionado las deficiencias en la aplicación de la Ley fueron, detectadas tanto por la Unidad de Inteligencia Financiera, así como por las diferentes instituciones públicas que conforman el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), lo que hizo necesaria la revisión de la misma y, en consecuencia, la presentación ante la Asamblea Nacional de un proyecto de ley reformatoria.

El proyecto de ley reformatoria a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, introduce principalmente las siguientes modificaciones:²³

- Se sustituye el título de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos por “Ley De Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos”;
- Se fortalece la tipificación del delito de lavado de activos;
- Se confirma la tipificación del lavado de activos como delito autónomo, sin que sea necesario demostrar un delito precedente para que este delito sea reprimido;
- Se fortalece el control fronterizo terrestre, en puertos marítimos y fluviales, en aeropuertos y distritos aduaneros, de los movimientos de efectivo;

²³ Informe de avance de junio a diciembre de 2010 del Ecuador presentado al XVI Pleno de Representantes de GAFISUD.

- Se determina una multa del 30% del total de los valores que no sean declarados o hubieren sido declarados errónea o falsamente al salir o ingresar al país, sin perjuicio de que se continúe con las acciones penales que correspondan en caso de existir delito;
- Se tipifica y sanciona el delito de financiamiento de los delitos tipificados en el Capítulo IV del Título I, del Libro Segundo del Código Penal, que describe los delitos de sabotaje y terrorismo, al incorporar un artículo innumerado a continuación del artículo 166 del Código Penal;
- Se cambia de denominación a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por Unidad de Análisis Financiero (UAF) para determinar de manera concreta las funciones que tiene la Unidad;
- Para combatir eficientemente los delitos contemplados en la Ley, a través de los controles que se establezcan, se amplía el listado de sujetos obligados a reportar a la UAF teniendo los siguientes: las filiales extranjeras bajo control de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano; las bolsas y casas de valores; las administradoras de fondos y fideicomisos; las cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales; personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves; las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o valores, transporte nacional e internacional de encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias; las agencias de turismo y operadores turísticos; las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción; los casinos casas de juego, bingos, máquinas tragamonedas e hipódromos; los montes de piedad y las casas de empeño; los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas; los comerciantes de antigüedades y obras de arte; los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles;
- Se amplían las atribuciones de supervisión y control en materia de prevención de lavado de activos a los respectivos organismos de control de los nuevos sujetos obligados;

- Se faculta a la UAF a solicitar información a cualquier institución del sector público que mantenga bases de datos, las mismas que están obligadas a permitir el acceso a esa información;
- La Ley concede a la UAF la rectoría de la capacitación en materia de lavado de activos y financiamiento de delitos, a nivel nacional.

Finalmente esta Ley se aprueba mediante su publicación en el Registro Oficial 352, Primer Suplemento del 30 de diciembre de 2010.

3.3 NORMAS REGLAMENTARIAS Y TÉCNICAS: JUNTA BANCARIA Y UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

En sesiones de 30 de junio y 17 de julio de 2008, la Junta Bancaria de la Ecuador discutió y aprobó, mediante Resolución No. JB-2008-1154 de 17 de julio de 2008, la reforma del “Capítulo IV.- Normas de Prevención de Lavado de Activos para las Instituciones Controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del Título XIII “Del Control Interno”, del Libro I “Normas Generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, que incorpora – en su conjunto - los principales requerimientos del GAFI, de los cuales se puede destacar los siguientes:

- El que las instituciones controladas no podrán mantener cuentas en las que no puedan aplicar los procedimientos de debida diligencia.
- El deber de establecer procedimientos para la identificación y verificación de la identidad de los clientes, siendo el procedimiento más estricto cuando se trate de determinada categoría de clientes.
- El deber de establecer procedimientos para el constante monitoreo de las operaciones o transacciones de los clientes en determinadas ocasiones, y con criterios mas estrictos cuando se trate de determinada categoría de clientes.

- Que los procedimientos que la institución establezca deben ser aptos para una adecuada identificación y verificación de los clientes, detallándose los elementos a identificar en atención a si se trata de una persona natural o jurídica.
- Se establece como deber permanente de las instituciones que se encuentran bajo la aplicación de esta resolución, el identificar al beneficiario final de los productos que suministren.
- Se prevé la posibilidad de que las instituciones controladas apliquen medidas abreviadas o simplificadas a sus clientes en determinadas ocasiones.
- Se informa que se ha establecido la como obligación para las entidades financieras controladas, la conservación por el periodo de 6 años de los archivos en que consten los formularios de información referente a sus clientes que realizan determinadas operaciones.

Con el objeto de fortalecer la Resolución No. JB-2008-1154, el 12 de mayo de 2010, la Junta Bancaria emitió la Resolución No. JB-2010-1683, cuyos principales puntos son:

- La normativa se refiere a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de las instituciones del sistema financiero, separando al sistema de seguros, estableciendo el control al sector en la Disposición Transitoria Segunda hasta la emisión de una resolución específica al giro propio de este sector;
- Acentúa el enfoque basado en el análisis de riesgos para la prevención de lavado de activos en las instituciones financieras mediante la identificación y categorización de factores, análisis de perfiles, elaboración de matrices, establecimiento de sistemas de alerta y reportes de riesgos, de conformidad con los siguientes factores:

Según el cliente:

- Actividad económica del cliente; y,
- zona geográfica en la que realiza los negocios.

Según las operaciones:

- Monto o valor de la transacción;
 - Tipo de operación, producto o servicio;
 - Frecuencia; y,
 - Complejidad;
- Aplicación de procedimientos de debida diligencia ampliados para la identificación y aceptación de clientes;
 - Fortalece la estructura de prevención de lavado de activos en las entidades financieras a través de obligaciones específicas para directivos, accionistas, administradores y empleados, y los controles sobre los clientes y funcionarios; así como de los bancos corresponsales;
 - Exige a las instituciones del sistema financiero cumplir de manera efectiva con sus obligaciones hacia otros organismos como la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera;
 - Define claramente a las personas políticamente expuestas (PEP), estableciendo procedimientos más estrictos para establecer relaciones comerciales;
 - Fortalecimiento a la aplicación de las políticas “Conozca a su cliente”, “Conozca su empleado”, “Conozca su mercado” y “Conozca su corresponsal”;
 - Aplicación de los procedimientos de debida diligencia ampliados para la identificación y aceptación de clientes, ante la existencia de cuentas para realizar transferencias para pagos en otras plazas y banca representada, especialmente cuando los bancos corresponsales son instituciones financieras;
 - Se obliga a contar con un oficial de cumplimiento suplente, la profesionalización de la unidad de cumplimiento y la asignación de competencias específicas para la

actualización y depuración de bases de datos y la conformidad para nuevos productos financieros;

- No podrá contratarse con terceros las funciones asignadas al oficial de cumplimiento; ni aquellas relacionadas con la identificación del cliente, determinación del beneficiario final, la obtención de información sobre el propósito y naturaleza de la relación comercial y, la determinación y reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas;
- Establece y determina sanciones por incumplimiento de los procesos de prevención de lavado de activos, de las disposiciones contenidas en las normas sobre prevención de lavado de activos y de los procesos para su imposición;
- Las instituciones del sistema financiero no deben entablar ni mantener relaciones de corresponsalía bancaria con bancos pantalla;
- Las medidas de prevención deben cubrir toda clase de servicios o productos financieros, sin importar que se realicen en efectivo o no.

Adicionalmente y con el objetivo de continuar reforzando la gestión contra el lavado de activos la Junta Bancaria emite la Resolución No. Jb-2010-1767 dirigida al sector que conforman las compañías de seguro privado controlado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, publicada en registro oficial no. 257 de 16 de agosto de 2010.

En esta normativa, dirigida a la prevención de lavado de activos en el sector de seguro privado, se destacan los siguientes puntos:

- Acentúa el enfoque basado en el análisis de riesgos para la prevención de lavado de activos en las instituciones de seguro privado mediante la identificación y categorización de factores, análisis de perfiles, elaboración de matrices de riesgo, establecimiento de sistemas de alerta y reportes de riesgos según los siguientes factores: cliente, suma asegurada, complejidad de los contratos de seguros o reaseguros, la distribución y método de pago.

- Aplica procedimientos de debida diligencia ampliados para la identificación, aceptación y monitoreo de clientes;
- Fortalece la estructura de prevención de lavado de activos en las entidades de seguro privado a través de obligaciones específicas para directivos, accionistas, administradores y empleados, y los controles sobre los clientes y beneficiarios;
- Exige a las instituciones del sistema de seguro privado cumplir de manera efectiva con sus obligaciones hacia otros organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera;
- Define claramente a las personas políticamente expuestas (PEP), estableciendo procedimientos más estrictos para establecer relaciones comerciales;
- Fortalece la aplicación de las políticas “Conozca a su cliente”, “Conozca su empleado”, “Conozca su mercado”, “Conozca a su proveedor” y “Conozca a su corresponsal”;
- Aplica los procedimientos de debida diligencia ampliados para la identificación y aceptación de clientes de acuerdo principalmente al monto de la prima, a los beneficiarios, a la constitución de las empresas o sociedades en el extranjero o en países calificados por el Grupo de Acción Financiera como no cooperantes o en países considerados como paraísos fiscales por el Servicio de Rentas Internas; y en el caso de personas naturales cuando se trate de no residentes;
- Se obliga a contar con un oficial de cumplimiento titular y suplente, a excepción de las compañías que cuentan con una estructura organizacional pequeña que solamente contarán con el titular, y la asignación de competencias específicas para la actualización y depuración de bases de datos;
- De ser el caso, se debe contar con la unidad de cumplimiento de acuerdo a la estructura, el número de clientes y necesidades;

- No podrá contratarse con terceros las funciones asignadas al oficial de cumplimiento, ni aquellas relacionadas con la identificación del cliente, beneficiario, obtención de información sobre la naturaleza de la relación comercial y la determinación del reporte de operaciones o transacciones inusuales e injustificadas.
- Las instituciones del sector de seguro privado deben diseñar programas y coordinar planes de capacitación sobre prevención de lavado de activos para todo su personal;
- Establece la obligatoriedad para que cada institución establezca sanciones por incumplimiento de los procesos de prevención de lavado de activos, de las disposiciones contenidas en las normas sobre prevención de lavado de activos y de los procesos para su aplicación; así como las sanciones a ser aplicadas por el organismo de control.

Continuando con los procesos de mejora en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones internacionales, para lograr un mayor apego a las disposiciones contenidas en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, la Junta Bancaria actualiza la norma y emite la Resolución No. JB-2012-2147 del 26 de abril de 2012, publicada en el Registro Oficial No. 709 del 23 de mayo de 2012.

En esta normativa, dirigida a la prevención de lavado de activos en el sector de seguro privado, se destacan los siguientes puntos:

- La implementación de factores, criterios y categorías de riesgos de prevención de lavado de activos, con sus respectivas matrices de riesgo.
- Introduce la actuación de los accionistas, miembros del directorio y ejecutivos, en la definición y ejecución de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, contenidas en los respectivos códigos de ética.
- Aclara la política de conozca a su proveedor de servicios de seguros.

- Define las la debida diligencia disminuida y aumentada, a ser realizada a los clientes y/o proveedores.
- Señala la responsabilidad de los asesores productores en la recopilación de la información y documentación de los clientes respecto de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.

La Unidad de Inteligencia Financiera con el objetivo de cumplir con la Recomendación 13 del GAFI, y con la intención de instrumentar la obligación de reporte por parte de las instituciones del sistema financiero emitió con fecha 16 de noviembre de 2007, un Instructivo de Reportes del Sistema Financiero, publicado en diciembre de 2007, y con fecha 25 de septiembre de 2008, un nuevo instructivo sobre Gestión de Reporte del Sistema Financiero para la Prevención del Lavado de Activos, publicado en octubre de 2008, los cuales siguen vigentes a la presente fecha.

Así también se implementó un programa de capacitación continua de los oficiales de cumplimiento de las instituciones del sistema como para sectores económicos que se han convertido, o se convertirán en sujetos obligados una vez emitida la regulación específica en la que se encuentra trabajando la UIF. Algunos de estos sectores son seguros, administradoras de fondos y fideicomisos, casas de valores, casinos, remesadores de fondos y correos paralelos.

Adicionalmente la UIF estableció como obligación para las instituciones del sector financiero, el reportar las tentativas de operaciones y transacciones inusuales e injustificadas.

Dentro de estas con la finalidad de iniciar con la obligación de reporte de las compañías de seguro privado controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Unidad de Inteligencia Financiera emitió el instructivo de gestión de reportes para la prevención de lavado de activos para las instituciones del sistema de seguro privado, el 30 de junio de 2010 publicado en Registro Oficial No. 251 de 5 de agosto de 2010; y su respectiva estructura para el reporte de operaciones y transacciones económicas que iguallen o superen el umbral legal establecido en la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, mediante oficio circular del 2 de julio de 2010.

3.4 INSUFICIENCIA DE NORMAS Y SUS EFECTOS

El lavado de dinero en términos generales se desarrolla en el marco de funcionamiento de mercados financieros desregulados y en la existencia de los denominados paraísos fiscales. Estados Unidos y Gran Bretaña son integrantes del GAFI y en su propio territorio funcionan espacios de oscuridad financiera, amigable con transacciones que pueden ser consideradas de lavado de activos.

En los últimos años se ha intensificado a nivel internacional el discurso de organismos multilaterales para el combate del movimiento de millonarios fondos de origen en actividades ilegales.

Esa prédica contra el lavado no se traduce en transformaciones profundas en el funcionamiento de las finanzas globales, que facilitan ese flujo de dinero sucio que busca blanquearse. Para analizar si cada uno de los países cumple con sus obligaciones, el GAFI prevé mecanismos de autoevaluación que hace cada país internamente para verificar el ajuste de su legislación con sus recomendaciones, y un mecanismo de evaluaciones mutuas, que está a cargo de especialistas de diferentes países (de las áreas financiera, legal y operativa), quienes integran un equipo evaluador que visita cada país periódicamente.

Si bien las legislaciones de los estados no han permanecido ajenas a este proceso, las nuevas dimensiones políticas, sociales, jurídicas y financieras parecen reclamar una actualización de las mismas. La principal característica en el campo jurídico a nivel global es la tendencia a homogeneizar las legislaciones locales, este proceso no solo involucra un giro en el campo penal, como la mayoría de los estados lo sitúa, es por esta razón que varios autores sostienen que fueron las disposiciones internacionales las que han servido de impulso a las legislaciones penales internas para reaccionar contra el delito de blanqueo de capitales.

Estas reacciones van siendo limitadas y tardías como resultado de sanciones respecto de las evaluaciones de los organismos intergubernamentales, y básicamente en el campo penal, lo cual deja de lado cambios o reformas en los campos sociales, políticos e incluso financieros, cambios profundos que permitan de una manera estructurada y global cerrar los accesos al delito de blanqueo de capitales.

Los estados necesitan legislaciones integrales de acciones rápidas para combatir estos delitos que día a día erosionan las sociedades y economías, tanto que como ejemplo podemos mencionar que de acuerdo a estadísticas del Fondo Monetarios Internacional la cantidad de dinero en el mundo es del orden del 2 al 5% del PIB mundial.

3.5 NECESIDAD DE LA AUTORREGULACIÓN²⁴

El delito de lavado de activos se ha propagado a todas las economías del mundo sin fronteras ni ideologías políticas y/o económicas.

Combatir su accionar excede ampliamente la jurisdicción de un país, para lograr resultados en la lucha contra el crimen organizado, será necesaria la colaboración internacional y que los distintos sistemas judiciales y policiales trabajen en conjunto.

Para poder atacar la problemática de este delito es fundamental actuar en la fase de prevención. Si cada sujeto activo de la economía trabaja con el fin de que en su actividad o negocio se dificulte el ingreso de los flujos de negocios ilícitos, no cabe duda de que esto sería un golpe mortal para las organizaciones criminales. Impedir el uso y goce del dinero producido en actividades ilícitas es el recurso de defensa más poderoso que las sociedades tienen para luchar contra este flagelo.

Para llevar a cabo esto, habrá que comenzar con medidas de autorregulación tal como iniciar con la educación civil creando conciencia en la sociedad de la importancia que tiene su participación en el accionar contra las organizaciones criminales. Así como la droga destruye a sus consumidores, el lavado de activos permite el crecimiento de diferentes líneas de negocio criminales destruyendo los pilares de la justicia, democracia y la libertad de las personas. Es necesario concienciar a la sociedad que detrás de cada billete lavado hay sufrimiento, muerte, esclavitud.

La verdadera esencia en la prevención del lavado de activos está en los propios sujetos obligados a denunciar, para lo cual deben desarrollarse e implementarse sistemas de

²⁴ La autorregulación es una estrategia pensada para superar los problemas que plantea el primer supuesto de control. La autorregulación consiste básicamente en la participación de los regulados en la formulación y aplicación de las normas regulatorias. La autorregulación también puede asumir una forma mixta asociada con un control estatal.

prevención en todas las organizaciones y personas que actúen en la economía. La prevención no está solo en el control de las entidades financieras, si bien son fundamentales son una estación de tránsito de los flujos delincuenciales, el proceso de lavado involucra otros activos y negocios.

Todo sujeto, tanto obligado por la ley como no deberá plantear un esquema de control que mediante señales o alarmas instaladas en sus sistemas operativos le permita detectar operaciones sospechosas. Así también deberá contar con un marco regulatorio que contemple las exigencias de la normativa local para que sus organizaciones sepan cómo actuar ante evidencias de actividades sospechosas.

La capacitación de los empleados de una organización es vital para garantizar los procesos de denuncias ya que al estar en contacto directo con los clientes y sus operaciones son los que pueden dar el alerta y permitir que el sistema de prevención funcione oportunamente.

Las empresas deberán cumplir con el compromiso de lucha contra el lavado de activos mediante el establecimiento de normas y procedimientos internos que permitan:

- Desarrollar la actividad de acuerdo con rigurosas reglas deontológicas y con el ordenamiento jurídico y reglamentario vigente.
- Establecer normas de actuación, sistemas de control y comunicación a efectos de impedir que sean utilizadas para el lavado de activos.
- Asegurar que todos sus empleados observen las políticas y procesos de conozca a su cliente.
- Cumplir con las leyes y reglamentos impuestos por los organismos de control.
- Capacitar continuamente al personal en todos los niveles jerárquicos.

3.6 EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS

La posibilidad de que la entidad sufra alguna de las consecuencias desfavorables definidas como riesgo financiero, reputacional, legal, operativo o de contagio es lo que se define como riesgo de lavado de activos y de la Financiación del Terrorismo.

Este riesgo es inherente a las entidades vigiladas, ya que su importante papel en el circuito económico legal las hace propensas a ser utilizada para canalizar, aprovechar, invertir, ocultar o encubrir el origen de los recursos ilícitos o para financiar grupos al margen de la ley.

El riesgo de lavado de activos es aquel mediante el cual el sistema financiero es utilizado para ocultar o disimular la fuente de los fondos, en general porque estos fondos se generaron con el uso de medios ilícitos tales como drogas, prostitución, fraude, juegos de azar no regulados, entre otros.

Por lo general, todas las instituciones del sistema financiero y seguros deben implementar políticas, procedimientos y capacitación para garantizar que esas instituciones no están implicadas en el lavado de activos. En lo que respecta a los seguros que no son de vida se considera un riesgo bajo como medio de lavado de dinero, pero no elimina las obligaciones de cumplir con los estándares que imponen la legislación y las reglamentaciones.

3.6.1 Administración Integral de Riesgos

Identificación de riesgos o evento

Implica la identificación de los incidentes, que ocurren de forma interna o externa, que podrían afectar a la estrategia y el logro de los objetivos.

Direcciona la manera en que los factores externos se combinan e interactúan para influir en el perfil del riesgo. (Manual CAEFYC, 2012)

... es un proceso continuo y se dirige a reconocer y entender los riesgos existentes en cada operación efectuada, y así mismo, a aquellos que pueden surgir de iniciativas de

negocios nuevos, teniendo en cuenta la frecuencia de su ocurrencia y su probable impacto.

Para ello es necesario adoptar una perspectiva de la entidad en su conjunto y analizar la totalidad de las incertidumbres que la afectan. (Superintendencia de Bancos y Seguros, Capítulo 1, Sección II, Artículo 4, Num. 4.1)

Herramientas de básicas identificación:

- Autoevaluaciones
- Mapas de riesgos
- Indicadores
- Tablas de control (Scorecards)
- Bases de datos

Medición o Valoración del riesgo²⁵

Una vez identificado el riesgo, las entidades deben llevar a cabo una medición cuantitativa o cualitativa de la probabilidad de su realización frente a cada uno de los factores que lo determinan como son los clientes, productos, mercados, territorio y jurisdicción.

La metodología para la medición podría ser cualitativa (no cuantitativa); es decir, orientarse a clasificar la posibilidad de realización del riesgo en diferentes categorías (alta, media y baja), y no necesariamente asignando un valor numérico porcentual o probabilístico.

La medición del impacto que tendría la realización efectiva del riesgo en la entidad podría ser valorada cualitativamente, mediante la clasificación en diferentes categorías según su intensidad (grave, normal y leve), sin que sea indispensable indicar un valor numérico o una cantidad de dinero para fijarlo.

No existe información estadística suficiente para lograr una definición técnica del riesgo de Lavado de Activos, sin embargo el conocimiento del cliente y los métodos de lavado de activos permiten definir algunos factores de riesgo.

²⁵ Todo el texto al que se refiere el acápite de Medición o Valoración del Riesgo es un análisis de lo contenido en el capítulo correspondiente del Manual CAEFYC.

Los factores de Riesgo del lavado de activos se pueden determinar por el tipo de clientes, jurisdicciones, productos y canales de distribución, los cuales pueden generar mayor probabilidad que se produzca una operación inusual e injustificada.

Estos factores no constituyen una herramienta aislada, sino un instrumento que debe complementarse con la transaccionalidad del cliente, es decir que operaciones con mayores cuantías generan mayores riesgos y viceversa.

En este punto es importante ponderar el riesgo de cada cliente, para lo cual es necesario adoptar políticas, que permitan decidir sobre:

- Vinculación de clientes
- No vinculación de clientes
- Aplicación de procesos de debida diligencia

A través de las políticas de debida diligencia que son el conjunto de políticas, procedimientos y medidas de control interno que aplica una entidad para conocer a sus clientes, empleados, corresponsales y mercado para evitar que se la utilice como un medio para el cometimiento del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, una entidad financiera y de seguros podría evitar vincular potenciales clientes que presenten situaciones como:

- Personas u organizaciones que se tenga información de estar vinculados a actividades delictivas.
- Personas que rehúsan a suministrar información o no es posible verificarla.
- Cualquier otra circunstancia que fundamente a la entidad a no prestar servicios a empresas que desarrollen actividades altamente vulnerables al lavado de activos, por no ser posible un adecuado control o estén en zonas geográficas de alto riesgo.

Los factores de riesgo del lavado de activos se clasifican según:²⁶

- El cliente
- Jurisdicciones
- Productos
- Canales de distribución.

El cliente:

Actividad Económica del Cliente

Al analizar las modalidades y los métodos de lavado de activos, se observa que ciertas actividades pueden pasar desapercibidas en un proceso de lavado de activos, por lo que es necesario conocer actividades de los clientes sobre todo en lo que respecta a:

- Poca supervisión en el negocio o actividad que realiza
- Alto uso de efectivo
- Manejo de productos químicos
- Continuas transferencias del y hacia el exterior

Actividades económicas con mayor vulnerabilidad:

- Entidades Bancarias y no bancarias que no cuenten con adecuados sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo:
 - Casas de cambio y remesadoras de dinero.
 - Transportadoras de dinero Compañías inmobiliarias.
 - Empresas de comercio exterior,
 - Agencias de viaje poco conocidas.
 - Agencias de seguro con bajo control o supervisión.
 - Productores o distribuidores de armas

²⁶ Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Libro II, Título XII, Capítulo I, Normas para las Instituciones del Sistema de Seguros Privado sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Art. 6, Abril 2013.

- Productores de precursores químicos.
- Empresas dedicadas a juegos de azar
- Empresas con accionistas que sean Altos
- Funcionarios públicos.
- Empresas ubicadas en paraísos fiscales
- Constructoras, Fundaciones, Iglesias.
- Restaurantes, Hoteles, Gasolineras
- Empresas con estructura fiduciaria

Jurisdicciones donde realiza los negocios.

La ciudad, la región y el país de donde provienen o terminan los recursos de los clientes pueden implicar riesgos particulares a los cuales las entidades deben prestar atención.

Las organizaciones criminales buscan zonas menos controladas por las autoridades, para cumplir con su objetivo de dar apariencia lícita a los recursos obtenidos ilícitamente.

De acuerdo a la zona geográfica el riesgo se identifica por:

- Conocido centro de producción o consumo de drogas
- País no cooperante
- La distancia dificulta la verificación de datos del cliente.
- Zonas de libre comercio
- Áreas fronterizas
- Áreas amparadas con regímenes cambiarios, tributarios o aduaneros especiales

Productos

Según las operaciones el riesgo de lavado se clasifica por:

- Monto o Valor de la transacción.
 - Montos con diferencias mínimas por debajo del umbral (USD \$ 10,000)

- Montos pequeños pero con alto número de veces dentro de un mes y que casi llegan al umbral.
 - Montos iguales para diferentes cuentas.
 - Depósitos diferentes con cheques de misma cuenta y numeración seguida.
- Tipo de operación producto o servicio:
 - El negociante legítimo prefiere invertir en productos que son más rentables.
 - El lavador prefiere los productos que le facilitan su labor, como:
 - Títulos valores al portador, negociables internacionalmente.
 - Transferencias bancarias desde o hacia países permisivos
 - Cheques de Viajero
 - Tarjetas de Débito y Crédito, entre las más importantes
 - Complejidad
 - Número de productos y servicios empleados.
 - El número de personas involucradas.
 - Realización de operaciones internacionales.
 - Utilización del internet para las transacciones.
 - Uno de los objetivos del lavador es dificultar a las autoridades seguir el rastro de la operación.

Canales de distribución

Son los medios a través de los cuales se realizan las transacciones, Estos se clasifican en:

- Directos
- Intermediarios
- Mercadeo masivo

Mitigación del riesgo

Mitigar significa reducir o eliminar el riesgo, una vez conocida la importancia de cada factor de riesgo, debemos proceder a la mitigación de aquellos riesgos que pueden ser relevantes, para lo cual se considerarán los siguientes parámetros:

No exposición.- Decisión consciente de no exponerse a un riesgo determinado, por ejemplo, las empresas pueden decidir eliminar ciertas líneas de negocio.

Prevención y control de pérdidas.- Medidas para disminuir la probabilidad o gravedad de la pérdida....

Retención del riesgo.- Consiste en absorber el riesgo y cubrir las pérdidas con los propios recursos.

Transferencia.- Trasladar el riesgo a otros, típicamente a través del reaseguro o coaseguro.

Las políticas y estrategias de la entidad deben definir el nivel de riesgo considerado como aceptable; este nivel se manifiesta en límites de riesgo puestos en práctica a través de políticas, normas, procesos y procedimientos que establecen la responsabilidad y la autoridad para fijar esos límites, los cuales pueden ajustarse si cambian las condiciones o las tolerancias de riesgo. (Superintendencia de Bancos y Seguros, Art. 4, Num. 4.3)

Monitoreo del riesgo.

El proceso de administración de riesgos es dinámico, y es un proceso en el cual las cuantificaciones y decisiones tomadas antes de la ocurrencia de los hechos deben ser contrastadas contra lo realmente ocurrido. De otra parte, a medida que transcurre el tiempo, las circunstancias cambian y riesgos no contemplados inicialmente pueden volverse relevantes y los costos relativos de la estrategia de administración se tornan variables. (Superintendencia de Bancos y Seguros, Art. 4, Num. 4.5)

3.6.2 Riesgos asociados

Los riesgos específicos asociados al riesgo de lavado de activos en empresas de seguros son:

Riesgo de fraude

El fraude se define como toda acción deliberada y maliciosa cometida para obtener un beneficio indebido mediante engaño, ya sea cometido por empleados, agentes, socios empresariales, proveedores de servicio o clientes. El fraude se divide en cinco categorías, de la siguiente manera:

- Fraude interno.- es el cometido contra la compañía por un empleado o persona bajo contrato, individualmente o en colusión con otros que pueden ser internos o externos a la compañía.
- Fraude de intermediarios.- es el cometido contra la compañía o sus clientes por agentes, corredores, Agentes Generales de Administración (MGA), Administradores de Terceros (TPA).
- Fraude de clientes.- diferente del Fraude de Siniestros, es el cometido por clientes contra la Compañía en la compra o prestación de productos y servicios. Si es cometido por el cliente en colusión con otros, como un agente o empleados, se lo clasifica como Fraude Interno o Fraude de Intermediarios.
- Fraude de siniestros es fraude en la presentación de un siniestro por los asegurados, terceros demandantes y otras partes, sin presunta implicación de intermediarios o empleados.
- Fraude externo es el cometido por un tercero (parte externa) contra la Compañía. Un tercero puede incluir, pero no limitarse a, los beneficiarios de un siniestro, los proveedores y administradores de terceros.

Riesgo de Conflictos de Interés

Un conflicto de intereses es una situación en la cual los intereses privados (profesionales o personales) de un individuo interfieren de alguna manera (o incluso parecen interferir) con los intereses generales de la empresa. Cuando los intereses privados interfieren o parecen interferir, puede dificultar el desempeño imparcial de la persona. Incluso cuando no existan pruebas de acciones incorrectas, un conflicto de intereses puede crear una

aparición de falta de decoro que puede socavar la confianza en la habilidad de esa persona para desempeñarse con propiedad. (Chartis, 2011)

Un conflicto de intereses puede adoptar varias formas según las circunstancias que participan.

Riesgo de Prácticas Corruptas

Los empleados de una Compañía deben desempeñar sus funciones con honestidad e integridad;

Los empleados no deben pagar o dar, ni ofrecer pagar o dar, ni prometer o autorizar cualquier cosa de valor, directamente o indirectamente, a ninguna persona a sabiendas de que se paga, se da, se ofrece o se promete para incidir en un acto o en una decisión y a que influya de manera indebida u obtener una ventaja indebida;

Los empleados no deben pagar ni ofrecer cualquier cosa de valor a personas y/o empresas a fin de conseguir o conservar un negocio de manera inapropiada u obtener una ventaja indebida;

Los Empleados deben tomar medidas prudentiales para garantizar que los socios comerciales de la Compañía y otros “Terceros” se desempeñen con igual honestidad e integridad en todas sus actividades. (Chartis, 2011)

Las Compañías y los empleados deben llevar libros y mantener registros que reflejen de manera cierta y precisa las transacciones comerciales.

Adicionalmente debemos observar otros riesgos asociados a los riesgos asociados, como son:

- Riesgo de incumplimiento de un programa antilavado
- Riesgo por la falta de verificación de datos en la identificación del cliente

- Riesgo en la falta de verificación de datos de PEPs (personas expuestas políticamente), organizaciones benéficas, los clientes extranjeros a la jurisdicción donde se establece la relación, los bancos que operan con licencias bancarias off-shore, clientes que actúan en nombre de los otras personas, entidades financieras o empresas pantalla, puede causar riesgos financieros, legales, reglamentarias y / o la reputación de la empresa y / o AIG
- Riesgo de pagos en efectivo o equivalentes, por, transferencias, cheques de viajero, entre otros.
- Riesgos de pagos transfronterizos por cancelación de servicios, productos con el objetivo de facilitar altos volúmenes de transacciones.
- Riesgo reembolsos a terceros por pago de primas, y pólizas en garantía para tomar préstamos.
- Riesgo de venta de productos por canales que permitan el anonimato del cliente, por ejemplo, la compra de pólizas de seguro por Internet o aplicaciones de tarjetas de crédito.
- Riesgo de no presentación de los informes requeridos por las leyes aplicables, incluyendo actividades sospechosas / o informes de transacciones en efectivo.
- Riesgo no cumplimiento con las leyes relacionadas con antilavado de retención de registros y regulaciones pueden resultar en riesgos financieros, legales, reglamentarias y / o la reputación de la empresa.
- Mitigación del riesgo

3.7 POLÍTICAS Y SISTEMAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN EN EL SECTOR ASEGURADOR

El objetivo de la creación de políticas antilavado de activos es definir los estándares operativos mínimos, funciones y responsabilidades que conciernen a estas políticas.

Al diseñar los controles de estas políticas se debe considerar lo siguiente:

- Procedimiento
- Distribución de la responsabilidad
- Capacitación
- Control
- Redacción de informes
- Revisión Compensación
- Gestión de riesgo

3.7.1 Políticas generales

Las empresas no deben celebrar contratos de seguros si el hacerlo permitiría (o no tomaran las acciones necesarias para impedir o evitar) que la entidad fuese a sabiendas un vehículo para el lavado de dinero, respalde el financiamiento del terrorismo o que infrinja la legislación o las reglamentaciones locales o internacionales.

Las empresas de seguros no deben realizar pagos de reclamos ni proporcionar beneficio alguno a una persona natural o jurídica que pueda infringir la legislación, reglamentaciones y/o las políticas internas de la compañía.

3.7.2 Políticas operativas: requisitos básicos

Sobre la base de la evolución del riesgo adecuado que realiza cada empresa respecto de sus productos, servicios y clientes, debe establecer políticas, procedimientos y controles sobre la base de la legislación, la reglamentación local y las políticas internas que cubran lo siguiente:

3.7.2.1 Identificación y comprobación del cliente

Cada empresa debe cumplir con la legislación y las reglamentaciones vigentes para la identificación y la comprobación de los clientes e implementar programas de identificación de clientes que usen un enfoque basado en el riesgo. Esto puede incluir, por ejemplo, que

el suscriptor obtenga prueba aceptable de la identidad de la persona natural o jurídica que solicita el seguro o que se identifique la fuente de los fondos para comprar el producto de seguro. La legislación local puede establecer estándares mínimos en cuanto a la prueba necesaria tales como pasaporte, cédula de identificación, certificado de registro u otro documento de la empresa.

3.7.2.2 Debida diligencia²⁷

Cada empresa debe ejercer el buen criterio al evaluar las relaciones con agentes, corredores, empleados, proveedores de servicios, clientes o contrapartes y asegurarse de que tales partes no representan riesgos legales, regulatorios o de reputación excesivos para la compañía. Un riesgo excesivo puede surgir cuando la identidad del cliente es incierta, la identidad es conocida pero su credibilidad es cuestionable (debido al historial de crédito, penal u otro) o existen dudas acerca de la legitimidad de cualquier transacción propuesta. Cuando lo exija la legislación o sobre la base del riesgo, la compañía ejercerá un proceso de debida diligencia con respecto a dichas partes.

De acuerdo con la Resolución JB–2012–2147, emitida por la Superintendencia de Bancos y Seguros, la debida diligencia para las empresas de seguros trata de:

ARTÍCULO 12.- Las empresas de seguros o compañías de reaseguros están obligadas a aplicar procedimientos de debida diligencia, que implican:

12.1 Establecer mecanismos para la recopilación, verificación y actualización de la identidad de los clientes, cuando:

12.1.1. Se inicie la relación comercial o contractual; y,

12.1.2. Existan cambios en la información del cliente en relación con la existente en la base de datos.

Bajo ninguna circunstancia se creará o mantendrá pólizas anónimas cifradas, con nombres ficticios o se usará cualquier otra modalidad que encubra la identidad del titular. Las empresas de seguros o compañías de reaseguros deben evitar establecer relaciones comerciales con sociedades o empresas comerciales constituidas al amparo de legislaciones extranjeras que permitan o favorezcan el anonimato de los accionistas o administradores, incluyendo en esta categoría a sociedades anónimas cuyas acciones sean emitidas al portador; o, que dichas legislaciones impidan la entrega de información.

²⁷ Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Libro II, Título XII, Capítulo I, Normas para las Instituciones del Sistema de Seguros Privado sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Arts. 1, 12, Abril 2013.

Si las empresas de seguros o compañías de reaseguros tuvieran dudas acerca de la veracidad de la información proporcionada por el cliente, o exista incongruencia con los datos que sobre él se haya obtenido con anterioridad, estarán obligadas a verificar dicha información y a reforzar las medidas de control;

12.2 Establecer el perfil operativo del sujeto de análisis, considerando como mínimo la información obtenida de su actividad económica, de los productos a utilizar, del propósito de la relación comercial, de la operatividad histórica en la entidad si la hubiera y del análisis efectuado;

12.3 Establecer el perfil de comportamiento considerando todas aquellas características propias y habituales del sujeto de análisis, asociadas con la información general, modo de utilización de los servicios y productos de la entidad, entre otros;

12.4 Efectuar de forma permanente los procesos de monitoreo a todas las operaciones de los clientes, de manera tal que se determine si la operatividad del cliente se ajusta a los perfiles operativo y de comportamiento establecidos;

12.5 Si se determina que existen operaciones que no guardan conformidad con los perfiles operativos y de comportamiento establecidos; o, si es que se encasillan dentro de las alertas establecidas, la entidad está obligada a solicitar justificativos al cliente y a analizarlos, que de ser inexistentes o no razonables, corresponde reportar de manera oportuna a la Unidad de Análisis Financiero, conforme lo dispuesto en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; y, 12.6 La entidad controlada deberá garantizar la aplicación de los procedimientos de reportes internos oportunos, que permitan, si es el caso, la recepción, análisis y pronunciamiento por parte del comité de cumplimiento de las operaciones inusuales e injustificadas.

Para la ejecución de los procedimientos contemplados en el presente artículo, la entidad dispondrá de recursos humanos suficientes, herramientas informáticas confiables y seguras, infraestructura adecuada independiente y segura y controles internos que garanticen la calidad de la información de sus clientes, el establecimiento de perfiles operativos y de comportamiento reales, que detecten permanentemente las operaciones inusuales y viabilicen en forma oportuna los reportes de todas las operaciones inusuales e injustificadas.

La identificación del cliente implica el conocimiento y revisión de los datos proporcionados por el cliente, persona natural o jurídica, y obtenidos por la empresa al momento de la vinculación, durante el transcurso de la relación y al momento de la renovación de la relación contractual, ya sea en la suscripción de pólizas, al realizar pagos relacionados con el curso del seguro o reaseguro o al proporcionar cualquier otro servicio.

Para el caso de las pólizas de vida, se requiere evidenciar el interés asegurable del asegurado, de conformidad con el artículo 65 del Decreto Supremo No. 1147, publicado en el Registro Oficial No. 123 de 7 de diciembre de 1963.

En el caso de personas jurídicas, el conocimiento del cliente supone, además, llegar a conocer la identidad de las personas naturales propietarias de las acciones o participaciones, o la identidad de quien tiene el control final del cliente persona jurídica, especialmente aplicando una debida diligencia ampliada a aquellos que directa o indirectamente posean el 25% o más del capital suscrito y pagado de la institución o empresa. (Resolución JB- 2012 – 2147 del 26 abril del 2012, publicada en el Registro Oficial No. 709 del 23 de mayo de 2012.)

3.7.2.3 Operación inusual e injustificada²⁸

Todos los empleados, en especial aquellos que tienen trato directo con la parte asegurada, deben estar alertas a cualquier señal de alerta o comportamiento que los lleven a sospechar que la información obtenida no es la verdadera o el fin real del contrato es otro. Es necesario destacar que las consultas se basan en el riesgo; la profundidad de cualquier consulta depende de la posibilidad de que un contrato pueda ser usado como vehículo para el lavado de dinero. Los productos de seguros en los que existe una transferencia del riesgo y no se produce beneficio de inversión en el largo plazo se consideran de riesgo bajo.

3.7.2.4 Monitorización de las transacciones

Los empleados son responsables de las relaciones con clientes y están obligados a comprender y monitorizar las transacciones de los clientes a fin de detectar, impedir, investigar e informar cualquier lavado de dinero u otra actividad sospechosa.

3.7.2.5 La monitorización también se basa en el riesgo

En aquellas transacciones en las que las perspectivas de usar el producto de seguros para lavado de dinero son muy pocas o nulas, el grado de monitorización debe ser adecuado al riesgo. La compañía deberá cumplir con los procedimientos de “Debida diligencia” y cumplir las políticas “Conozca a su cliente”, “Conozca a su empleado”, “Conozca su mercado” y “conozca su corresponsal.” La Debida diligencia es el conjunto de mecanismos que operen dentro de una entidad para detectar o prevenir el cometimiento de lavado de activos. Las políticas mencionadas anteriormente servirán para la verificación de la información proporcionada por los diferentes agentes (clientes, intermediarios de seguros, funcionarios y mercado).

²⁸ Movimientos económicos realizados por personas naturales o jurídicas, que no guarden correspondencia con el perfil operativo y de comportamiento establecido por la entidad sobre el cliente y que no puedan ser sustentados; o, cuando aún siendo concordantes con el giro y perfil del cliente parezcan desmedidos o inusuales, por su monto, frecuencia o destinatarios;” Fuente: Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Libro II, Título XII, Capítulo I, Normas para las Instituciones del Sistema de Seguros Privado sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Arts. 12, Abril 2013

3.7.2.6 Redacción de informes

Se deben investigar las transacciones de los clientes y otras actividades identificadas con posibilidad de sospecha a fin de determinar si se debe hacer una denuncia ante las autoridades correspondientes, como un Informe de actividad sospechosa en los Estados Unidos, que bajo la legislación actual la Compañía se encuentra en la obligación de reportar cualquier actividad irregular ante la Unidad de Análisis Financiero. Además, se deben implementar procedimientos para garantizar que se registre, informe y archive cualquier otro informe legal obligatorio (como informes de transacciones de divisas) de acuerdo con la legislación vigente. El oficial de cumplimiento de cada país debe investigar y presentar cualquier informe cuando sea necesario.

3.7.2.7 Rescisión de una relación

El nivel ejecutivo de la entidad tomará la decisión de rescindir una relación con un cliente. La decisión de rescindir una relación comercial se debe comunicar a los gerentes de las áreas comerciales, legal y de cumplimiento.

3.7.2.8 Mantenimiento de registros²⁹

Las compañías de seguros deben conservar y mantener cualquier registro relacionado con LA/TF y cualquier otra información que exijan las autoridades gubernamentales o regulatorias como los Informes de actividades sospechosas (Suspicious Activity Reports), SAR. Dichos registros se deben conservar durante el período mínimo obligatorio en la jurisdicción en la que opera la empresa y, en cualquier caso, durante seis años como mínimo.

3.7.2.9 Estándares operativos: control y redacción de informes

Todas las empresas deberán realizar un control al menos una vez al año de sus operaciones para garantizar el cumplimiento de la legislación y las reglamentaciones locales vigentes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

²⁹ Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Libro II, Título XII, Capítulo I, Normas para las Instituciones del Sistema de Seguros Privado sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Arts. 32, Abril 2013

Todas las empresas designarán un oficial de cumplimiento por país quien es responsable de garantizar el cumplimiento local de la legislación y políticas vigentes, a la vez que tiene el carácter de contacto para fines internos y externos y asume la responsabilidad de la capacitación, el control y la redacción de informes de su país

Las Auditorías Interna y/o externas de las empresas realizarán auditorías de los programas de lavado de activos de las empresas, que incluye la identificación de clientes, la monitorización de actividades sospechosas, redacción de informes, la capacitación y el mantenimiento de registros.

Las empresas que acepten pagos en efectivo deben contar con procedimientos de control a fin de garantizar el cumplimiento de cualquier requisito de informe de grandes montos de divisas vigente; es necesario destacar que no se debe fomentar el pago de montos en efectivo y se alienta el uso de medios electrónicos u otro medio de transferencia similar para minimizar la exposición a tales riesgos.

3.7.3 Estándares operativos: programas de país

3.7.3.1 Programas de Prevención de Lavado de Activos en el país: precontrato

Antes de celebrar un contrato de seguro o de reaseguro, se debe realizar una evaluación acerca de si el contrato o el servicio que se proveerá podría infringir la legislación o las reglamentaciones de anti-lavado de activos y anti financiamiento del terrorismo del país correspondiente, en este caso concreto deberán tomarse en cuenta las disposiciones sobre la debida diligencia, y, si se determina que la cobertura o el servicio que se proveerá podría infringir un programa de anti-lavado de activos del país correspondiente, no se debe celebrar el contrato de seguro o de reaseguro.

3.7.3.2 Programas de Prevención de Lavado de Activos en la: gestión de reclamos, evaluaciones

Antes del pago de cualquier reclamo o beneficio en virtud de un contrato de seguro o de reaseguro, se debe realizar una evaluación acerca de si dicho pago podría infringir cualquier programa de anti-lavado de activos del país correspondiente; de ser el caso no se

debe efectuar el pago ni proveer el beneficio y se debe informar la situación al oficial de cumplimiento del país quien debe derivarla a los niveles jerárquicos correspondientes tanto internos como externos (entidades reguladoras).

4 MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS APLICABLES AL SECTOR ASEGURADOR

4.1 SISTEMA ORGÁNICO DE CONTROL INTERNO

Las empresas de seguros internacionales contarán con un gobierno corporativo, que por lo general es la Junta General de Accionistas y el Directorio, conforme a las leyes locales de los distintos países.

El papel del gobierno corporativo es ser la autoridad máxima para la gestión de la Compañía con sujeción a los requisitos legales y reglamentarios. En consecuencia, el gobierno corporativo va a organizar y dirigir los asuntos de la Compañía de una forma que busque maximizar el valor de la compañía para el beneficio de sus accionistas, cumpliendo con las exigencias legales y reglamentarias. Además, el gobierno corporativo deberá elaborar las estrategias y las políticas para que éstas sean divulgadas en cascada a toda la Compañía y así asegurar la adopción y el cumplimiento de las mismas.

En términos generales los roles y responsabilidades del gobierno corporativo respecto de la prevención de lavado de activos son:

- Revisar y desarrollar la estrategia para la prevención de lavado de activos, así como enfoque de la administración para hacer frente a posibles eventos que la empresa pudiere afrontar;
- Determinar el apetito por el riesgo de lavado de activos; y
- Revisar periódicamente los informes presentados por los comités de riesgos, cumplimiento, auditoría y ética con respecto al desempeño del negocio, así como hechos relevantes, que pudieren afectar el negocio.

Todas las compañías de seguros deberán contar con un Código de Ética que como mínimo contendrá las políticas de prevención de lavado de activos a ser observadas por toda la empresa, el mismo que deberá incluir las sanciones derivadas de su incumplimiento.

El gobierno corporativo de las empresas de seguros podrá establecer y mantener al menos los siguientes comités basados en las necesidades de prevenir el lavado de activos:

- Comité de Riesgos
- Comité de Cumplimiento
- Comité de Ética
- Comité de Auditoría

4.1.1 Comité de riesgos³⁰

El papel del Comité de Riesgos es diseñar y proponer estrategias, políticas, procesos y procedimientos de administración integral de riesgos o reformas, y, someterlos a la aprobación del Directorio. Así también es su responsabilidad es monitorear los riesgos de la compañía respecto del apetito de riesgos determinado y aprobado por el Directorio.

El Comité de Riesgos podrá delegar monitoreos detallados o específicos a sub comités para evaluaciones puntuales que considere relevantes.

De conformidad con la Resolución JB-2011-2066, emitida por la Junta Bancaria y publicada en el Registro Oficial del 30 de diciembre de 2011, el Comité de Riesgos estará conformado por:

- Un Vocal del Directorio, que lo presidirá;
- El representante legal de la institución de que se trate (Gerente General o Presidente Ejecutivo).
- El responsable del Área Técnica de Seguros de la Entidad o de la Unidad de Riesgo

³⁰ Resolución JB-2012-2248, Principio de un Buen Gobierno Corporativo, 26 de julio de 2012.

- El comité deberá contar con la participación de especialistas de cada uno de los riesgos; los funcionarios responsables de las áreas de negocios; y, otros que se consideren funcionarios vinculados con los temas a tratarse. Ninguno de estos funcionarios tendrá derecho a voto.

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

El Comité de Administración Integral de Riesgos funcionará como órgano de apoyo y consulta de la Junta General de Accionistas y el Directorio de una compañía

Objetivo del Comité:

Establecer esquemas eficientes y efectivos de administración y control de todos los riesgos a los que se encuentra expuesta AIG-METROPOLITANA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Funciones del Comité:

- a) Diseñar y proponer estrategias, políticas, procesos y procedimientos de administración integral de riesgos o reformas, y, someterlos a la aprobación del directorio;
- b) Asegurarse de la correcta ejecución tanto de la estrategia, como de la implantación de políticas, metodologías, procesos y procedimientos de la administración integral de riesgos;
- c) Proponer al directorio los límites específicos apropiados por exposición de cada riesgo;
- d) Informar oportunamente al directorio respecto de la efectividad, aplicabilidad y conocimiento por parte del personal de la institución de las estrategias, políticas, procesos y procedimientos fijados;

- e) Conocer en detalle las exposiciones de los riesgos asumidos en términos de afectación al capital adecuado y reservas técnicas; y, con relación a los límites establecidos para cada riesgo;
- f) Aprobar, cuando sea pertinente, los excesos temporales de los límites, tomar acción inmediata para controlar dichos excesos e informar inmediatamente tales asuntos al directorio;
- g) Proponer al directorio la expedición de metodologías, procesos, manuales de funciones y procedimientos para la administración integral de riesgos;
- h) Aprobar los sistemas de información gerencial, conocer los reportes de posiciones para cada riesgo y el cumplimiento de límites fijados y adoptar las acciones correctivas según corresponda;
- i) Informar oportunamente al directorio sobre la evolución de los niveles de exposición de cada uno de los riesgos identificados;
- j) Remitir al directorio para su aprobación, los planes de continuidad de negocio;
- k) Poner en conocimiento del directorio cambios repentinos en el entorno económico que genere un aumento en la exposición a alguno de los riesgos, o cualquier asunto que a criterio del comité de administración integral de riesgos sea necesario tratar en dicho cuerpo colegiado;
- l) Analizar y aprobar los planes de contingencia; y,
- m) Las demás que determine el directorio, o que sean dispuestas por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Convocatoria, reuniones, quórum:

El Comité sesionará de manera ordinaria una vez al mes, convocada por el Presidente del Comité; y extraordinariamente, con la mitad más uno de sus integrantes, cuando el

Presidente del Comité lo convoque por iniciativa propia, o por pedido de por lo menos dos de sus miembros para el pronunciamiento sobre un hecho inusual injustificado.

En la convocatoria constará el lugar en que se llevará a cabo la sesión, el orden del día; y, se la realizará con por lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación, excepto cuando se trate de sesiones extraordinarias, cuya convocatoria se realizará con por lo menos veinticuatro horas antes de la sesión. Para que el comité pueda sesionar válidamente debe contar con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros del Comité con derecho a voto. Las decisiones se tomarán con la mayoría absoluta de votos, en caso de empate el Presidente del Comité tendrá voto dirimente.

El Presidente del Comité convocará a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité, por medio de comunicado interno por escrito.

Procedimiento de administración de Riesgos:

1. Identificación del riesgo
2. Evaluación del riesgo
3. Estrategia de la administración de riesgos
4. Implementación
5. Retroalimentación

4.1.2 Comité de Cumplimiento

Las empresas de seguros y compañías de reaseguro deben contar con un comité de cumplimiento, que de acuerdo a la estructura de cada una de éstas.

De acuerdo con la Resolución JB-2012-2147, emitida por la Junta Bancaria el 26 de abril de 2012³¹, el Comité de Cumplimiento debe estar conformado por:

- El representante legal o su delegado
- Un miembro del directorio o su delegado,

³¹ Contendida en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Libro II, Título XII, Capítulo I, Normas para las Instituciones del Sistema de Seguros Privado sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Abril 2013

- Un responsable del área comercial o su delegado
- Un responsable del área técnica o su delegado
- Un responsable de control interno o su delegado
- El oficial de cumplimiento
- El asesor legal

El Comité de Cumplimiento estará presidido por el miembro del directorio o por su delegado y en ausencia de éste, asumirá la presidencia el miembro del comité de mayor jerarquía.

El asesor legal actuará como secretario, quien elaborará y llevará las respectivas actas de todas las sesiones, las que deberán llevarse en forma cronológica y encontrarse debidamente numeradas y foliadas.

El comité de cumplimiento, entre otras, tendrá las siguientes funciones:

- Proponer al directorio las políticas generales de prevención de lavado de activos;
- Someter a aprobación del directorio, el manual de control interno sobre prevención de lavado de activos, así como sus reformas y actualizaciones;
- Recibir, analizar y pronunciarse sobre cada uno de los puntos que contenga el informe periódico presentado por el oficial de cumplimiento, dejando expresa constancia en la respectiva acta;
- Recibir, analizar y pronunciarse sobre los informes de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas reportadas por el oficial de cumplimiento, para, si fuere del caso, trasladarlos en forma inmediata a conocimiento de la entidad de control y/o reporte (Unidades de Inteligencia Financiera).
- Prestar eficiente y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento;

- Emitir recomendaciones al oficial de cumplimiento sobre las políticas de prevención de lavado de activos y efectuar el seguimiento del acatamiento de las mismas; y,
- Imponer las sanciones por el incumplimiento de los procesos de prevención de lavado de activos, previo al proceso administrativo correspondiente.

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

El Comité de Cumplimiento constituye un órgano de apoyo del Directorio, en sus funciones relacionadas con el lavado de activo y financiamiento de delitos.

Objetivo del Comité:

Proponer al Directorio las políticas generales y medidas de control y prevención de lavado de activos y financiamiento del delito; y, vigilar que éstas se cumplan conforme a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, el reglamento a ésta ley, las normas que para el efecto expida la Superintendencia de Bancos y Seguros, y los convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Ecuatoriano en materia de lavado de activos y financiamiento del delito.

Funciones del Comité:

- a) Proponer al directorio las políticas generales de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos;
- b) Someter a aprobación del directorio, el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, así como sus reformas y actualizaciones;
- c) Recibir, analizar y pronunciarse sobre cada uno de los puntos que contenga el informe mensual del oficial de cumplimiento y realizar seguimiento a las labores que desempeña este funcionario, dejando expresa constancia en la respectiva acta;

- d) Recibir, analizar y pronunciarse sobre los informes de operaciones inusuales e injustificadas reportadas por el oficial de cumplimiento, para si fuere del caso, trasladarlos a conocimiento de la Unidad de Análisis Financiero;
- e) Prestar eficiente y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento;
- f) Emitir recomendaciones al oficial de cumplimiento sobre la aplicación de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos y efectuar el seguimiento del acatamiento de las mismas;
- g) Proponer la imposición de sanciones administrativas internas por el incumplimiento de los procesos de prevención de lavado de activos o financiamiento de delitos, previo al proceso correspondiente;
- h) Presentar al directorio la metodología general de la matriz de riesgos de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos y aprobar al menos semestralmente las actualizaciones de los criterios, categorías y ponderaciones de riesgos constantes en la matriz de riesgos;
- i) Presentar al directorio las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y cuantitativos para la oportuna detección de las operaciones inusuales e injustificadas; y,
- j) Aprobar los mecanismos suficientes y necesarios para que la Compañía mantenga sus bases de datos actualizadas y depuradas, para que puedan ser utilizadas de manera eficiente y oportuna en las labores de prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos;

Convocatoria, reuniones, quórum:

El Comité de Cumplimiento sesionará de manera ordinaria una vez al mes, convocada por el presidente; y extraordinariamente, cuando el presidente lo convoque por iniciativa propia, o por pedido de por lo menos dos de sus miembros, o ante el requerimiento del oficial de cumplimiento, para el pronunciamiento sobre un hecho inusual injustificado.

En la convocatoria constará el lugar en que se llevará a cabo la sesión, el orden del día; y, se la realizará con por lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación, excepto cuando se trate de sesiones extraordinarias, cuya convocatoria se realizará con por lo menos veinticuatro horas antes de la sesión.

Para sesionar válidamente el Comité contará con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros del Comité con derecho a voto.

El Presidente del Comité convocará a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité, por medio de comunicado interno por escrito.

Participación de los miembros del Comité en la toma de decisiones:

Las decisiones del Comité se adoptarán con el voto mayoritario de sus miembros y en caso de empate, dirimirá el presidente del Comité.

Diligencia y procedimientos:

En Comité de Cumplimiento observará por lo menos los siguientes procedimientos de diligencia:

- a) Establecer mecanismos para la recopilación, verificación y actualización de la identidad de los clientes;
- b) Establecer el perfil operativo del sujeto de análisis, considerando como mínimo la información obtenida de su actividad económica, de los productos a utilizar, del propósito de la relación comercial, de la operatividad histórica en la entidad si la hubiera y del análisis efectuado;
- c) Establecer el perfil de comportamiento considerando todas aquellas características propias y habituales del sujeto de análisis, asociadas con la información general, modo de utilización de los servicios y productos de la entidad, entre otros;

- d) Efectuar de forma permanente los procesos de monitoreo a todas las operaciones de los clientes, de manera tal que se determine si la operatividad del cliente se ajusta a los perfiles operativo y de comportamiento establecidos;
- e) Si se determina que existen operaciones que no guardan conformidad con los perfiles operativos y de comportamiento establecidos; o, si es que se encasillan dentro de las alertas establecidas, la compañía está obligada a solicitar justificativos al cliente y a analizarlos, que de ser inexistentes o no razonables, corresponde reportar de manera oportuna a la Unidad de Análisis Financiero, conforme lo dispuesto en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; y,
- f) Garantizar la aplicación de los procedimientos de reportes internos oportunos, que permitan, si es el caso, la recepción, análisis y pronunciamiento por parte del comité de cumplimiento de las operaciones inusuales e injustificadas.

Políticas:

En relación a la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, el Comité de Cumplimiento considerará el control y desarrollo de por lo menos las siguientes políticas que se señalan en la resolución No. JB-2012-2147 de 26 de abril de 2012:

- a) Conozca a su Cliente;
- b) Conozca a su Empleado;
- c) Conozca a su Mercado;
- d) Conozca a su prestador de Servicios de Seguros; y
- e) Conozca a su Accionista.

4.1.3 Comité de Ética

El Comité de Ética se encargará de establecer el contenido del código de ética que además de las declaraciones de los principios y de las responsabilidades, de la forma de proceder dentro de la organización.

Dentro de los valores y principios del Comité de Ética se encuentra el cumplimiento de la Ley y la normativa vigente, dentro de las cuales se enmarca la legislación respecto al lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos.

De conformidad con la Resolución No. JB-2012-2248 del 26 de julio de 2012, el Comité de Ética estará conformado por:

Representantes de los accionistas, administración y empleados, y en forma previa a ejercer sus funciones deberán ser previamente calificados por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Los miembros del comité de ética deberán reunir los mismos requisitos y no estar incurso en las prohibiciones que se requieren para ser calificado miembro del directorio.

El comité lo presidirá el representante del directorio, Todos los miembros tienen derecho a voz y voto, sus decisiones se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate dirimirá el presidente del comité. El funcionario encargado de la administración de recursos o talento humano será el encargado de la secretaria de comité.

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA

Como órgano de apoyo, control y cumplimiento práctico del Código de Ética de la Compañía, se debe crear el Comité de Ética.

Objetivo del Comité:

El Comité de Ética es un órgano de apoyo de las instancias de gobierno de la Compañía y por lo tanto vigilará el cumplimiento de las disposiciones del Código de Ética en las prácticas y procedimientos relacionados con el comportamiento de quienes conforman una compañía.

A su vez, el Comité de Ética someterá a la aprobación del Directorio, el contenido del Código de Ética, y el régimen de sanciones en caso de incumplimiento.

En apoyo del Comité de Cumplimiento, el Comité de Ética propondrá políticas generales y medidas de control y prevención de lavado de activos y financiamiento del delito; y, vigilar que éstas se cumplan.

Funciones del Comité:

El Comité de Ética tendrá como principales funciones:

- a) Establecer el contenido del Código de Ética y sus reformas;
- b) Proponer, para aprobación del Directorio, políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos;
- c) Proponer para aprobación del Directorio, las sanciones derivadas del incumplimiento de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos;
- d) Establecer sanciones derivadas del incumplimiento de los principios y deberes del Código de Ética, dependiendo de la gravedad del caso y establecer su procedimiento;
- e) Acoplar las observaciones del Órgano de Control respecto al contenido y estructura del Código de Ética;
- f) Establecer reglas de conducta y procedimientos que orienten la actuación de todos quienes conforman la Compañía;
- g) Establecer un procedimiento para evitar vicios y conflictos de interés; y
- h) Determinar las restricciones en la actuación de los empleados de la Compañía;

Convocatoria, reuniones, quórum:

El Comité de Ética sesionará de manera ordinaria una vez al mes, previa convocatoria efectuada por el Presidente del Comité; y extraordinariamente, cuando el Presidente del

Comité lo convoque por iniciativa propia, o por pedido de por lo menos dos de sus miembros para el pronunciamiento sobre un hecho inusual injustificado.

En la convocatoria constará el lugar en que se llevará a cabo la sesión, el orden del día; y, se la realizará mediante el envío de una comunicación por escrito, fax o correo electrónico, con por lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación, excepto cuando se trate de sesiones extraordinarias, cuya convocatoria se realizará con por lo menos veinticuatro horas antes de la sesión.

Para sesionar válidamente, el Comité deberá contar con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros del Comité con derecho a voto.

Participación de los miembros del Comité en la toma de decisiones:

Las decisiones se adoptarán por mayoría simple y en caso de empate dirimirá el Presidente del Comité.

Valores y Principios:

Entre sus funciones, el Comité de Ética observará por lo menos los siguientes valores y principios a ser incorporados y regularizados en el Código de Ética:

- a) Cumplimiento de la Ley y la normativa legal vigente;
- b) Respeto a las preferencias de los grupos de interés;
- c) Transparencia; y,
- d) Rendición de cuentas.

4.1.4 Comité de Auditoría

De conformidad con lo estipulado por la legislación ecuatoriana todas las compañías de seguros y reaseguros mantendrá obligatoriamente comités permanentes de auditoría, en calidad de comités del directorio, a fin de fortalecer el sistema de control interno.

El comité de auditoría es una unidad de asesoría y consulta del directorio, para asegurar un apoyo eficaz a la función de auditoría por parte de todos los integrantes de la entidad; asegurar el cumplimiento de los objetivos de los controles internos; y, vigilar el cumplimiento de la misión y objetivos de la propia institución.

El comité de auditoría deberá estar conformado por al menos tres (3) miembros, dos (2) designados de entre los miembros del directorio, y que no podrán ser parte del comité de administración de riesgos, comité de inversiones y comité de cumplimiento; y, el tercero elegido por dicho organismo colegiado, fuera de su seno. Superintendencia de Bancos y Seguros, Art. 3)

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AUDITORIA

El Reglamento regula la organización y funcionamiento del Comité de Auditoría

Objetivo del Comité:

El Comité de Auditoría es la unidad de asesoría y consulta del Directorio, para asegurar un apoyo eficaz a la función de auditoría por parte de todos los integrantes de la entidad. Su objetivo es asegurar el cumplimiento y fortalecimiento de los sistemas de control interno, auditoría interna y auditoría externa y vigilar el cumplimiento de la misión y objetivos de una Compañía.

Funciones del Comité:

Las funciones del Comité de Auditoría son por lo menos las siguientes:

- a) Proponer al Directorio la terna de auditores internos y externos para que la junta general de accionistas nombre al auditor interno o externo;
- b) Informarse sobre el funcionamiento de los sistemas de control interno, entendiéndose como controles internos, los controles operacionales y financieros establecidos para dar transparencia a la gestión de la administración y buscar desalentar irregularidades que podrían presentarse en los diferentes niveles de gobierno;
- c) Coordinar las actividades entre los órganos integrantes del sistema de control interno para incrementar la eficiencia, eficacia y economía del control, evitando superposiciones o reiteración de acciones;

- d) Establecer mecanismos que le permitan asegurarse de la existencia de sistemas de información adecuados, que garanticen que la información financiera sea fidedigna y oportuna;
- e) Aprobar los planes anuales de auditoría interna; y, vigilar su cumplimiento;
- f) Velar porque los auditores internos cuenten con los recursos necesarios para ejecutar sus labores;
- g) Conocer y analizar los resultados de las revisiones realizadas por auditoría interna, auditoría externa, Superintendencia de Bancos y Seguros, así como las medidas adoptadas por la administración para superar las deficiencias comunicadas en los respectivos informes;
- h) Conocer y analizar la información proporcionada por la administración y los auditores internos, que permita verificar que se identifican y evalúan los riesgos de la compañía y que se adoptan medidas para la adecuada administración de esos riesgos;
- i) Conocer y analizar los términos de los contratos de auditoría externa; evaluar la suficiencia de los planes y procedimientos; analizar los informes de los auditores externos; y, poner en conocimiento del Directorio;
- j) Conocer y analizar las observaciones de los auditores interno y externo sobre las debilidades de control interno encontradas durante la realización de sus tareas, así como las acciones correctivas implementadas por la Gerencia General, tendientes a regularizar o minimizar esas debilidades;
- k) En caso de desacuerdos entre la Gerencia y los auditores externos, en materia de los ajustes propuestos no aceptados por la Administración, se debe solicitar las explicaciones necesarias para determinar la razonabilidad de los mismos; y, poner en conocimiento del Directorio;
- l) Conocer e informar al Directorio sobre los cambios contables que ocurran y sus efectos;

- m) Conocer y analizar acerca de conflictos de intereses e investigar actos de conductas sospechas e irregulares;
- n) Emitir opinión fundada respecto de las operaciones con personas vinculadas, en los casos permitidos;
- o) Informarse acerca del cumplimiento de las políticas institucionales y de las disposiciones legales y normativas,
- p) Asegurarse que la compañía ha establecido políticas encaminadas a detectar y controlar transacciones provenientes de actividades ilícitas;
- q) Requerir a los auditores internos y externos revisiones específicas sobre situaciones que a criterio del Comité sean necesarias; o que exija el Directorio;
- r) Mantener comunicación periódica con el organismo de control, a fin de conocer sus inquietudes y problemas detectados en la supervisión, así como vigilar el grado de cumplimiento para su solución; y,
- s) Para ser anexada al informe anual que debe presentar el Directorio a la Junta General de Accionistas, el Comité de Auditoría emitirá una carta que contenga su pronunciamiento, sobre la calidad de los sistemas de control interno; el seguimiento a las observaciones de los informes de auditoría interna y externa y de la Superintendencia de Bancos y Seguros; la resolución de los conflictos de intereses; y, el resultado de la investigación de actos de conductas sospechosas e irregulares, así como las acciones recomendadas y adoptadas, si fuere el caso.
- t) Informar al directorio, sobre sus principales actividades, resultados obtenidos, observaciones, recomendaciones y acuerdos adoptados en las reuniones, debiendo dejar constancia en un libro de actas, el cual deberá estar a disposición de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Convocatoria, reuniones, quórum:

El Comité de Auditoría sesionará de manera ordinaria una vez al mes, previa convocatoria efectuada por el Presidente del Comité; y extraordinariamente, cuando el Presidente lo convoque por iniciativa propia, o por pedido de por lo menos dos de sus miembros, o ante el requerimiento del Auditor Interno, para el pronunciamiento sobre un hecho inusual.

En la convocatoria constará el lugar en que se llevará a cabo la sesión, el orden del día; y, se la realizará mediante el envío de una comunicación interna por escrito, fax o correo electrónico, con por lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación, excepto cuando se trate de sesiones extraordinarias, cuya convocatoria se realizará con por lo menos veinticuatro horas antes de la sesión.

Para sesionar válidamente, el Comité deberá contar con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros del Comité con derecho a voto.

La comparecencia de los miembros del comité es presencial, entendiéndose como válida la comparecencia a través de cualquier medio electrónico de voz que le permita la miembro del comité participar activamente en la sesión. Cuando los miembros del comité comparezcan a las reuniones a través de medios electrónicos de voz, el secretario del comité grabará las mismas como constancia de su participación.

El miembro del Comité, que no pueda asistir a una de sus sesiones, deberá designar a un remplazo. Dicho remplazo podrá comparecer en nombre del miembro del comité con su respectiva Carta Poder y se encargará de reportarle los asuntos tratados y las decisiones tomadas al miembro del comité. Las Cartas Poder deberán constar en el expediente de cada sesión.

El comité de auditoría informará al directorio trimestralmente, sobre sus principales actividades, resultados obtenidos, observaciones, recomendaciones y acuerdos adoptados en las reuniones, debiendo dejar constancia en un libro de actas, el cual deberá estar a disposición de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Participación de los miembros del Comité en la toma de decisiones:

Las decisiones del Comité se adoptarán por mayoría simple de los votos de sus miembros.

Informes:

El comité de Auditoría emitirá informes trimestrales conforme el literal t) del artículo 2 de este reglamento para conocimiento del directorio y emitirá una carta anual según lo requiere el Artículo 7 de la Resolución No. JB-2013-2471.

4.2 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

4.2.1 Definición del Oficial o funcionario de Cumplimiento³²

Es el ejecutivo designado por el máximo órgano directivo de una institución financiera o sujeto obligado, para que asuma las responsabilidades de establecer el código de conducta, verificar la aplicación de la ley, formular y ejecutar procedimientos y diseñar controles adecuados, efectivos y de calidad, con el propósito de prevenir la utilización de la entidad o “sujeto obligado” para el lavado de dinero.

El “oficial de cumplimiento” es el empleado del “sujeto obligado” encargado de ejecutar el programa de cumplimiento obligatorio al interior de la entidad financiera, según las directrices normativas en cada uno de los países.

Nivel organizacional del cargo

Por las responsabilidades propias del “oficial de cumplimiento”, el cargo debe estar clasificado en el nivel de alta gerencia, con dependencia directa de la junta directiva o directorio.

³² Conforme a la definición de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Libro II, Título XII, Capítulo I, Normas para las Instituciones del Sistema de Seguros Privado sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Arts. 1, Abril 2013, Oficial de Cumplimiento es: “Es el funcionario que forma parte de la alta gerencia, calificado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, responsable de verificar la aplicación de la normativa inherente a la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a velar por la observancia e implementación de los procedimientos y controles y buenas prácticas necesarios para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos”

En algunas entidades financieras el cargo es desempeñado por un ejecutivo que cumple exclusivamente con las funciones de cumplimiento; en otras, las funciones se le asignan, al Vicepresidente Contralor General o Director de Auditoría Interna o Gerente de Control Interno, según la entidad.

Algunas regulaciones exigen que el cargo de “oficial de cumplimiento” sea ejercido por una persona cuya única función sea la del “oficial de cumplimiento”.

Características y calidades básicas que deben tener el oficial de cumplimiento y su equipo

Crítico: Capacidad que tiene el Oficial de Cumplimiento y cada uno de los miembros de su equipo, de analizarse así mismo, de analizar a los directivos, empleados, clientes, proveedores, y toda persona vinculada con la entidad financiera; las circunstancias y las situaciones, relacionadas con el actuar de cada uno; lo adecuado, efectivo y la calidad del Sistema Integral de Prevención; determinando las causas y consecuencias de las deficiencias y/o excepciones a las normas vigentes encaminadas a proteger a la entidad del lavado de activos.

Ético: Es el compromiso del Oficial de Cumplimiento, de su equipo de trabajo y de todos los empleados de la entidad financiera, de tener actitudes y comportamientos responsables frente a sí mismo como persona, frente a los demás empleados y clientes, y frente a las responsabilidades de su cargo y el progreso integral.

Responsable: El Oficial de Cumplimiento, cada uno de los miembros de su equipo de trabajo y cada empleado de la entidad financiera, responde por sus actos y por sus consecuencias. Cada uno de los vinculados a la entidad, en sus actuaciones debe tener en cuenta el propio bien, el bien de los demás compañeros y el bien común.

La responsabilidad de los empleados y clientes es frente a su conciencia y ante la sociedad. Es importante anotar, que el empleado no sólo es responsable de lo que hace durante el ejercicio de su cargo en perjuicio de sí mismo, de sus compañeros y de la entidad, sino también de lo que deja hacer cuando debe hacerlo, en beneficio de los mismos.

Dinámico y creativo: El oficial de Cumplimiento, cada uno de los miembros de su equipo de trabajo y en general cada empleado de la entidad financiera, tienen en sí mismo una exigencia y un dinamismo para perfeccionar la manera de ejercer las funciones y responsabilidades relacionadas con el Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos. La actividad es la posibilidad que tiene cada empleado de aplicar su inteligencia e iniciativa en busca del perfeccionamiento de sí mismo y de los demás vinculados, como al desarrollo de la organización social. El poseer el Oficial de Cumplimiento, y todos los empleados, dinamismo y capacidad creadora, nos debe comprometer a esforzarnos permanentemente por el mejoramiento de los mecanismos de prevención para protegernos de la inclusión de recursos de origen ilícito a través de las operaciones de la entidad.

Idoneidad profesional: El Oficial de Cumplimiento y cada uno de los miembros de su equipo de trabajo, deben poseer el conocimiento, la habilidad y la disciplina, que exige el ejercicio de su cargo, para lograr alcanzar el objetivo de protección integral de la entidad y de sus empleados, de la inclusión de activos y derechos, originados en actividades delictivas, a través de sus operaciones. Un Sistema Integral de Prevención, adecuado a la naturales de la entidad, efectivo en sus procedimientos específicos de control y de excelente calidad; se perfecciona cuando las personas que lo adoptan, lo monitorean y lo mejoran continuamente, reúnen cualidades profesionales sobresalientes.

Capacitación permanente: El Oficial de Cumplimiento, cada uno de los miembros de su equipo de trabajo y cada empleado de la entidad financiera, deben conservar su competencia técnica mediante la capacitación permanente. Es responsabilidad de cada empleado, mantenerse actualizado sobre las últimas normas de carácter civil, comercial, administrativo y penal, cuyo objetivo es la prevención y control del lavado de activos. Dicha capacitación permanente, permite la adecuación de los procedimientos específicos adoptados por la entidad, para que respondan a las expectativas de protección integral en un escenario cambiante. Estos conocimientos se obtienen a través de participar en seminarios, diplomados, conferencias, curso de inducción, análisis de casos prácticos, y en los programas institucionales de capacitación permanente que cada entidad debe trazar, como un elemento esencial del Sistema Integral de Prevención.

Adhesión a la filosofía de la institución: El Oficial de Cumplimiento y cada miembro de su equipo de trabajo, reflejan en su comportamiento la observancia y práctica de unos

principios y valores institucionales, que permite distinguir los límites de lo verdadero y esencial de lo falso e ilícito. Lo anterior, se materializa en la adopción de políticas y procedimientos específicos para prevenir a la entidad y a sus empleados de los daños y perjuicios causados por el manejo, inversión y colocación de recurso provenientes de actividades delictivas.

Actuar con objetividad: El Oficial de Cumplimiento y cada uno de los miembros de su equipo de trabajo, ejercen sus funciones con respeto, con total independencia mental, es decir, con libertad y autonomía. En consecuencia, el resultado de su trabajo cumple con los objetivos de prevención y control institucionales previstos, generan confianza y credibilidad, y orientan a cada uno de los miembros del quipo de cumplimiento a evitar colocarse en situaciones que impidan expresar sus juicios profesionales.

De actuar precavido y reservado: El Oficial de Cumplimiento y los miembros de su equipo de trabajo, deben prevenir los riesgos y peligros a que se encuentra expuesta la entidad y sus empleados, a consecuencia del delito de lavado de activos. El manejo de la información sobre reportes internos de operaciones inusuales, su posterior análisis de razonabilidad y el establecimiento de la viabilidad de reportar como operación sospechosa a la Unidad de Información y Análisis Financiero, respectiva; sugiere que el equipo de cumplimiento actúe con precaución y en reserva. (Administradora de Riesgos y Auditoría en Seguridad, 2010)

4.2.2 Funciones y Responsabilidades

Todos los empleados de la entidad financiera son responsables de proteger su integridad y la de la institución ante la eventual introducción de recursos de procedencia ilícita. La responsabilidad de cumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero es de todos los empleados, de acuerdo con las funciones y responsabilidades que se le hayan asignado en los respectivos Manuales Internos. Una de las responsabilidades del oficial de cumplimiento es la de velar por que en el Manual de Prevención, se hayan asignado de manera precisa para cada uno de los cargos de la entidad las funciones que le corresponden con respecto al sistema de prevención de lavado o programa de cumplimiento.

El oficial de cumplimiento, es el empleado responsable de velar por la aplicación de los procedimientos específicos para la prevención y control del lavado de activos, establecidos al interior de la entidad y de la observancia del Código de Conducta, por parte de todos y cada uno de los empleados en el desarrollo de sus funciones.

Las siguientes son labores que debe ejecutar el oficial de cumplimiento, en desarrollo del programa de cumplimiento:

- Promover el diseño de los procedimientos específicos y adecuados para prevenir y controlar el lavado de activos, como parte integral del Sistema de Control Interno de la entidad.
- Evaluar su idoneidad y conformidad con las exigencias legales.
- Procurar la formulación de las estrategias de la entidad para establecer los controles necesarios, con base en el grado de exposición al riesgo de lavado de activos.
- Verificar la aplicación de los procedimientos específicos para la prevención del lavado de activos, por parte de los empleados.
- Verificar la observancia del Código de Ética en las actuaciones del personal de la entidad.
- Realizar, programas de sensibilización dirigida a funcionarios nuevos y programas de capacitación continua sobre prevención del lavado de activos para los demás funcionarios.
- Efectuar revisiones periódicas documentales sobre el conocimiento del mercado a través de los diferentes segmentos en que se encuentra dividido.
- Presentar informes periódicos al Comité de Cumplimiento
- Reportar las faltas o errores que implique la responsabilidad de los funcionarios

- Efectuar análisis de operaciones no usuales.
- Velar por el adecuado reporte de operaciones sospechosas a la Unidad competente en los países en que sea obligatorio dicho reporte.
- Orientar la conservación de los documentos relativos a la prevención del lavado de activos, de modo que estos se archiven y custodien debidamente.
- Velar por la actualización del manual de procedimiento específico para la prevención del lavado de activos y el código de conducta, de acuerdo con los cambios normativos y del entorno de negocios.
- Cumplir con el rol de enlace con las autoridades.
- Coordinar con la administración la formulación del Plan Anual de Cumplimiento y seguimiento como parte integrante de la función de planeación general de la entidad.
- Elaborar estadísticas con base en los siguientes criterios: Concentración de operaciones por cada segmento de mercado, movimiento consolidado por cliente, clasificación de operaciones por montos, movimiento registrado por monedas, clasificación de clientes por direcciones, etc.
- Efectuar seguimiento a los compromisos adquiridos por los directores de dependencias y oficinas de emprender acciones correctivas por fallas detectadas en la aplicación de los mecanismos de prevención y control.
- Velar por el arraigo de una cultura de cumplimiento de la entidad. (Administradora de Riesgos y Auditoría en Seguridad, 2010)

En relación con la política de conozca a su cliente, la labor del oficial de cumplimiento se debe dirigir a:

- Participar con los directivos de la entidad y las aéreas de mercado en la definición de la política del conocimiento del cliente.

- Coordinar la difusión de esta política.
- Verificar que los empleados encargados de vincular a los clientes apliquen la política de conozca a su cliente; es decir, que soliciten y documenten, en formularios especialmente diseñados para el efecto y con visitas, la información sobre sus datos personales y su actividad económica.
- Su labor es verificar que sea obtenido la información necesaria de los clientes que permita un control de sus operaciones. Si la información no contiene los datos suficientes para conocer al cliente, podrá solicitar que ésta se complete.
- Vigilar que los datos suministrados por los clientes se verifiquen y actualicen periódicamente a través de los medios necesarios y en la forma en que la entidad considere más eficaz.
- Finalmente, debe verificar que la entidad aplique los instrumentos necesarios para alcanzar el conocimiento del mercado en que sus clientes desarrollan su actividad comercial.

La labor que debe cumplir frente al control de operaciones es principalmente la siguiente:

En materia del control de operaciones en efectivo, el oficial de cumplimiento debe revisar que los formatos diseñados para registrar las transacciones en efectivo iguales o superiores a las cuantías señaladas por la autoridad competente, cubran los aspectos que las autoridades requieren y en sus vistas de control debe confirmar que estos están siendo debidamente diligenciados por parte del empleado encargado de atender al cliente al momento de la transacción en efectivo (cajero), para lo cual podrá apoyarse en las instancias de control interno que hagan una verificación periódica de la aplicación de estos registros.

Cuando recibe de algún empleado el informe de operaciones inusuales, es decir operaciones que salen del perfil del cliente y del segmento del mercado en que están

situadas, detectadas por quien efectúa, tramita, registra o controla la transacción se informen directamente o a través de canales internos para la correspondiente evaluación, debe colaborar en la evaluación de las operaciones inusuales para determinar su normalidad o anormalidad respecto de las transacciones del cliente y con base en estos análisis poner consideración del Comité de Prevención, con el fin de definir su calificación como operación sospechosa y proceder a su reporte a las autoridades competentes.

En la validación de la aplicación de la política conozca su empleado, la cual es una herramienta fundamental de control, el oficial de cumplimiento debe verificar que esta política incluya controles sobre cambios del comportamiento y del estilo de vida de un empleado, los cuales permiten deducir una conducta desviada, máxima si se tiene en cuenta el poder corruptor de las organizaciones criminales, que pueden socavar la integridad de los funcionarios más débiles en su formación ética.

Este control debe hacerse tanto para los aspirantes como sobre aquellos que se encuentren vinculados a la institución.

En cuanto a las personas que va a vincularse a la entidad, verificar que el área de gestión humana ha incluido en sus políticas de vinculación de personal un detenido análisis de los antecedentes del candidato, en el que se tendrán en cuenta no sólo las cualidades profesionales y académicas, sino también las calidades de sus principios éticos y morales.

Respecto de los empleados de la entidad, se deben aplicar controles con el fin de verificar el cumplimiento de su gestión preventiva del lavado de activos. Para ello el oficial de cumplimiento puede apoyarse en los informes presentados por las áreas de seguridad, contraloría, recursos humanos y auditoría.

Alcance del trabajo

El propósito fundamental del trabajo que desarrolla el oficial de cumplimiento en una empresa de seguros, es prevenir y detectar bienes, recursos y derechos provenientes de actividades delictivas, que pretenden ingresar a la economía de la institución a través de su portafolio de servicios.

Lo anterior requiere de los empleados de la entidad, el máximo cuidado al momento de vincular clientes y durante la realización de las operaciones.

Se requiere entonces, el oficial de cumplimiento, efectúe sus seguimientos y análisis pertinentes con la debida profundidad para garantizar la protección de los empleados y de la organización.

A continuación se describe los elementos que determinan el alcance del trabajo del oficial de cumplimiento. (Administradora de Riesgos y Auditoría en Seguridad, 2010)

Objetivo

Evaluar constantemente los mecanismos para la prevención de lavado de activos, adoptados por la entidad financiera, a efectos de establecer los adecuados y efectivos de los mismos y la calidad de ejecución de las responsabilidades inherentes al desarrollo de las operaciones.

Los mecanismos para la prevención serán:

Adecuados, si proveen razonable seguridad para alcanzar objetivos de prevención y control.

Efectivos, si están funcionando como se espera.

Tendrán calidad, si los objetivos y metas organizacionales son alcanzados.

Naturaleza y extensión de los procedimientos de revisión aplicados

Para el logro de los objetivos descritos en el numeral anterior, el “oficial de cumplimiento” aplica los siguientes procedimientos de revisión:

Revisión Documental: el cual consiste en el examen de registros y documentos originados en las operaciones, y que se conservan en la entidad.

Observación: mediante el examen a los procedimientos operativos que efectúan los empleados en el desempeño de su cargo en la entidad, los clientes en la realización de las operaciones, y, las herramientas automáticas que pueda ofrecer el desarrollo tecnológico de la entidad.

Revisión analítica: mediante el estudio de fluctuaciones y operaciones inusuales, registradas en documentos soportes de las operaciones efectuadas por los clientes, y el registro de las mismas en la base de datos computarizada.

Evaluación: consiste en la valoración de los conocimientos de los empleados de la entidad, sobre los mecanismos de prevención del lavado de activos, mediante la aplicación periódica de pruebas escritas y orales, para determinar las necesidades de capacitación del personal.

La extensión de los procedimientos de revisión, cubre el análisis de:

- Documentos soportes de las operaciones propias de la entidad, correspondiente a un periodo determinado.
- Los procedimientos para la prevención del lavado de activos, contenidos en el Manual de Prevención del Lavado de Activos
- La observancia por parte de los empleados de los preceptos del Código de Ética, como plataforma ética y moral de la entidad.
- Las acciones correctivas emprendidas por la administración de la entidad financiera para mejorar las deficiencias de los mecanismos de prevención encontradas.
- El contenido del Manual de Funciones de los cargos existentes en la entidad y la asignación de responsabilidades específicas con respecto a la prevención del lavado de activos, de acuerdo con las funciones de cada cargo.
- Otros documentos accesorios.

- El resultado de las evaluaciones efectuadas a los empleados. (Administradora de Riesgos y Auditoría en Seguridad, 2010)

Apoyo del trabajo en el desarrollo tecnológico de la entidad

El oficial de cumplimiento cumplirá con sus funciones apoyándose oficiosamente en el Sistema de Información General – SIG – implementado en la entidad, el cual contiene una serie de controles como por ejemplo: Riesgo de datos básicos de cada cliente; cruce alfabético y numérico con las listas OFAC – Narcóticos y Terroristas; consolidación de operaciones por cliente en periodos determinados; segmentación del mercado bajo criterios determinados; control individual de transacciones en efectivo; control de transacciones múltiples; señales de alerta automáticas, scanner de documento de identificación; entre otros.

El desarrollo tecnológico, también permite extraer informes con base en las necesidades de revisión y en los criterios de análisis, impuesto por el “oficial de cumplimiento”. Ejemplo: Listado de operaciones por topes, por actividad económica, movimiento por oficina, por ciudad, por país, por regiones; entre otros.

De igual manera, el SIG permite o facilita detectar operaciones inusuales para el posterior reporte de las operaciones sospechosas a la autoridad competente, con base en los requisitos normativos de cada país. (Administradora de Riesgos y Auditoría en Seguridad, 2010)

Verificación de la aplicación del Sistema Integral de Prevención

El oficial de cumplimiento continuamente debe verificar que al interior de la entidad se adopten y apliquen mecanismos y procedimientos específicos, adecuados y suficientes para disminuir la exposición al riesgo de lavado de activos.

Dicho Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos (SIPLA), debe ser aplicado por parte de directivos, empleados, proveedores y clientes en general, el cual está conformado por los siguientes elementos. (Administradora de Riesgos y Auditoría en Seguridad, 2010)

Informes dirigidos al gobierno corporativo

Es responsabilidad del oficial de cumplimiento, mantener informada al gobierno corporativo y al Comité de Cumplimiento sobre lo adecuado, efectivos y la calidad de los mecanismos específicos para la prevención del lavado de activos, adoptados por la entidad.

Dicho informe debe contener por lo menos:

- Procedimientos de revisión empleados
- Objetivos del informe
- Periodo objeto de revisión de operaciones
- Grado de cumplimiento de los procedimientos por parte de los empleados
- Deficiencias de control detectadas.
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Compromisos de mejoramiento
- Seguimiento a las acciones correctivas adelantadas
- Evidencia de cumplimiento de compromisos. (Administradora de Riesgos y Auditoría en Seguridad, 2010)

Coordinar la ejecución del Plan Anual de Cumplimiento (PAC) aprobado por el Comité de Cumplimiento y Directorio

Dentro de las funciones de planeación y presupuesto de la entidad financiera, se debe prever la asignación de recursos para implementar un Plan Anual de cumplimiento (PAC)

que debe ser acogido y aprobado por el Comité de Cumplimiento, que contenga las diferentes actividades sobre prevención y control del lavado de activos, que se estimen realizar periódicamente para proteger a la entidad y a sus empleados de dicho riesgo y para institucionalizar la cultura de cumplimiento.

El citado Plan puede estar compuesto de las siguientes actividades:

- Programas de capacitación dirigidos a directivos y empleados.
- Programas de capacitación dirigidos al oficial de cumplimiento.
- Implementación de nuevos procedimientos de prevención y control.
- Jornadas de sensibilización sobre protección al riesgo de lavado de activos.
- Programas de actualización del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos.
- Ejecución de campañas disuasivas que logren reflejar ambiente de control institucional.
- Programación de visitas de inspección a las agencias y/o sucursales y unidades funcionales para evaluar lo adecuado y efectivo del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos.
- Encuentro con oficiales de cumplimiento de otras entidades para intercambiar experiencias y retroalimentar el esquema de prevención y control.
- Reuniones con otros estamentos de control como la Auditoría Interna y la Auditoría Externa, la Revisoría Fiscal y con funcionarios de entidades de control estatal.
- La asistencia a eventos como seminarios, simposios, diplomados y encuentros en el ámbito nacional e internacional.

- Visitas a ciertos clientes para conocer su actividad económica y establecer el potencial de generación de ingresos operacionales y no operacionales.
- Programas que contemplen la investigación y el desarrollo de nuevos mercados para establecer agencias u oficinas de vinculación y atención de clientes, en el territorio nacional o internacional sin prescindir de mecanismos de conocimiento del mercado y del cliente, que permitan determinar el origen lícito de los recursos a tranzar en dicha zona. (Administradora de Riesgos y Auditoría en Seguridad, 2010)

Planeación del trabajo del Oficial de Cumplimiento

El oficial de cumplimiento durante el desarrollo de sus funciones debe elaborar planes de los trabajos que pretenden efectuar. La formulación de planes de trabajo es una metodología que demuestra orden y pretende racionalizar recursos en la realización del trabajo.

El plan de trabajo de cumplimiento en una entidad, desarrolla los siguientes aspectos:

- Adquirir un adecuado conocimiento de la misión, visión, políticas, principios, valores y procedimientos de la entidad y del medio ambiente donde ella opera.
- Definir claramente los objetivos del trabajo de cumplimiento.
- Determinar el grado de exposición al riesgo de lavado de activos.
- Diseñar una estrategia de cumplimiento.

Lo anterior significa que el oficial de cumplimiento debe elaborar un Plan Anual de Cumplimiento (PAC) el cual describe las actividades a desarrollar, el responsable de la ejecución del trabajo, las dependencias afectadas, el tiempo de duración, el resultado obtenido, las acciones de mejoramiento emprendidas y el monitoreo para establecer el grado de cumplimiento de los objetivos trazados.

Evaluar el riesgo del lavado de activos

Una de las responsabilidades del oficial de cumplimiento, es evaluar el grado de exposición de los empleados y de la entidad financiera, al riesgo de verse involucrados en un esquema de lavado de activos.

La medición del riesgo de lavado de activos, se efectúa a través de la elaboración de la llamada matriz de riesgo, que consiste en caracterizar las variables, los factores y situaciones generadores de riesgo; valorar el riesgo; identificar las dependencias u oficinas mayormente expuestas; formular los procedimientos específicos para atenuar la exposición; y racionalizar los recursos de prevención y control interno.

La metodología de Matriz de Riesgo, permite al oficial de cumplimiento, programar visitas de cumplimiento; diseñar programas de revisión adecuados; determinar el alcance de las revisiones; coordinar las frecuencias y alcance de las visitas de inspección con la auditoría externa y la auditoría interna; lograr un conocimiento del mercado de los servicios ofrecidos y de los clientes; entre otros aspectos.

Seguimiento a la implementación de procedimientos específicos de prevención del lavado de activos

De igual forma, es competencia del oficial de cumplimiento, diseñar procedimientos específicos para la prevención y control del lavado de activos; con base en las siguientes directrices:

Políticas de Prevención y Código de Ética

Todas las entidades financieras deben establecer un código de conducta el cual se constituye en la plataforma moral y ética institucional desarrolla el siguiente contenido:

- La declaración de principios de la entidad, inspirada en la lucha institucional contra el lavado de activos y en la colaboración con las autoridades.
 - Principios rectores.
 - Valores institucionales.

- Valores éticos.
- Sanciones impuestas ante incumplimientos al código de conducta.
- Resolución de situaciones generadoras de conflictos de interés.
- Cumplimiento de las leyes y los estatutos internos.
- Actuaciones prohibidas al personal.
- Manejo de información privilegiada.
- Relaciones con los clientes.
- Relaciones con los proveedores.
- Dedicación al trabajo.
- Conductas relacionadas con limitación de regalos y atenciones recibidas.
- Competencia profesional.
- Desarrollo del personal. (Administradora de Riesgos y Auditoría en Seguridad, 2010)

Conocimiento de los procedimientos operacionales

Es imprescindible que el oficial de cumplimiento conozca y entienda el ciclo operacional de la entidad financiera a la cual se encuentra vinculado. El diseño e implementación de procedimientos específicos para la prevención del lavado de activos, se efectúe sobre procedimientos operacionales generales. (Administradora de Riesgos y Auditoría en Seguridad, 2010)

Manual de procedimientos específicos

Consiste en un instructivo que desarrolla los procedimientos específicos que la entidad financiera adopta para protegerse del lavado de activos. Como resultados de las políticas, objetivos, normas programas y presupuestos. A continuación se relacionan los procedimientos contenidos en el manual:

- Conocimiento del mercado.
- Diseño de perfiles de los clientes.
- Conocimiento del cliente.

- Segmentación de mercado.
- Detección y reporte interno de operaciones inusuales.
- Reporte de operaciones inusuales a la Unidad que corresponda.
- Revisión de las operaciones inusuales y procedimientos para el reporte de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.
- Consolidación de la información por cliente.
- Programas de capacitación continúa.
- Responsabilidad del oficial de cumplimiento.
- Política para el conocimiento del empleado.
- Desarrollo tecnológico.
- Determinación de señales de alerta o banderas rojas.
- Procedimientos para el registro de operaciones individuales en efectivo.
- Procedimientos para la determinación de operaciones múltiples en efectivo (consolidación de operaciones un efectivo)
- Procedimientos para el registro de las operaciones realizadas por la entidad financiera.
- Estándares internacionales para la prevención del lavado de activos.
- Modelos para el reporte de información periódica a la Unidad de Información Financiera – UIF.

- Procedimientos para la atención a requerimientos formulados por las autoridades competentes.
- Procedimiento para la conservación y archivo de los documentos soportes de las operaciones.
- Procedimientos para el reporte de información periódica a las entidades de vigilancia y control o a las Unidades de Información Financiera (UIF)
- Metodología a ser empleada en las visitas de inspección a las dependencias y oficinas de la entidad financiera, por parte de los órganos de control interno (auditoría interna, contraloría)
- Modelo de las visitas a los clientes.
- Funciones de la auditoría interna con respecto a la prevención de lavado de activos.
- Funciones de la auditoría externa con respecto a la prevención de lavado de activos.
- Régimen sancionatorio ante incumplimiento de los procedimientos específicos.

El oficial de cumplimiento debe revisar y estudiar el contenido del manual para verificar que se ajuste al derecho interno, a las políticas de la entidad, y a los lineamientos generales que los supervisores bancarios determinen para el efecto.

De la evaluación y análisis que se hace de los procedimientos de control contenidos en el manual de procedimientos, determina si éstos son idóneos, si comprenden todas las operaciones de la entidad, y si los aplican todos los empleados de la entidad, así como el grado de eficacia de los mismos.

Debe sugerir a la administración efectuar los correctivos necesarios para mejorar el manual de procedimientos y su aplicación. En este sentido el oficial de cumplimiento tiene un papel de asesor frente a los directivos de la entidad, para que se adecuen a los lineamientos exigidos por las normas del país.

Así mismo, el oficial de cumplimiento debe verificar que el manual sea objeto de una permanente actualización de acuerdo con las necesidades y cambios de política de la entidad financiera y con las exigencias de legislador o del supervisor bancario. (Administradora de Riesgos y Auditoría en Seguridad, 2010)

Establecimiento de una cultura de cumplimiento

El oficial de cumplimiento debe velar por el arraigo de una cultura de cumplimiento institucional; es lograr el convencimiento de los empleados al interior de la entidad financiera, de asumir una actitud vigilante y sensible durante el desarrollo de las operaciones para evitar en todo momento que los funcionarios y la institución sean objeto de un esquema de lavado de activos.

Cuando el funcionario de cumplimiento, mediante estudio, análisis y seguimiento de las operaciones, establece el grado de exposición de la entidad al riesgo de lavado de activos, genera mecanismos de prevención y control suficientes, encaminados a preservar en todo tiempo y lugar la integridad individual e institucional.

La responsabilidad por excelencia que debe asumir el Oficial de Cumplimiento en una entidad financiera, consiste en instituir en las personas que conforman la organización, un conjunto de modos de vida, encaminados al aseguramiento de la calidad en la ejecución de los procedimientos específicos de prevención y control, así como en su comportamiento ético, para mantener a salvo a la entidad, de la influencia de los recursos provenientes de actividades delictivas.

Formulación y aplicación de programas de revisión y análisis

Este procedimiento es un elemento importante dentro de las funciones del Oficial de Cumplimiento, el cual consiste en: elaborar un plan de rutinas de revisión con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones internas, en los procedimientos diseñados por la entidad para protegerse del lavado de activos y alcanzar metas institucionales.

Existen varias clases de programas de revisión y análisis: Programa para revisión de operaciones; programa de inspección a dependencias y oficinas de la entidad; programa de inspección a clientes; programa de verificación de cumplimiento de normas; programa análisis de razonabilidad de operaciones inusuales; programa de revisión de segmentos de mercado; análisis estadístico de operaciones por cliente; programa de cruce de clientes en listas OFAC narcóticos y terroristas; programas de capacitación; y análisis de viabilidad de reporte de operaciones sospechosas.

Conformación de la evidencia documental de las revisiones y análisis efectuados

La evidencia documental, está contenida en los documentos elaborados por el Oficial de Cumplimiento, durante el período de revisiones:

- Plan Anual de Cumplimiento (PAC)
- Programa de revisión y análisis.
- Programa de inspección a dependencias y oficinas.
- Programa de inspección a clientes.
- Programa de análisis de razonabilidad de operaciones inusuales.
- Programa de cruce de alfa – numérico de clientes en Listas OFAC, narcótico y terrorista.
- Programa de revisión de segmento de mercado.
- Programa de revisión y análisis de capacitación.
- Análisis de viabilidad de reporte de operación sospechosa.
- Fotocopias de documentos fuentes sobre los cuales se efectuó trabajo de revisión.

- Informes generados por el Sistema de Información General – SIG.
- Prueba escrita de conocimientos sobre prevención de lavado de activos aplicados a todo el personal de la entidad.
- Análisis estadístico de operaciones por cliente.
- Informe producto de las revisiones y análisis.

Los documentos relacionados anteriormente, deben estar debidamente archivados en legajos rotulados con la imagen visual corporativa de la entidad financiera, el objetivo de revisión y la fecha correspondiente. (Administradora de Riesgos y Auditoría en Seguridad, 2010)

Formulación de conclusiones y recomendaciones

Toda revisión analítica efectuada por el oficial de cumplimiento, debe conducir a una conclusión sobre el estado en que se encuentra el objeto examinado y, eventualmente, a la formulación de recomendaciones tendientes a emprender acciones correctivas inmediatas por parte de los empleados indicados en coordinación con el Oficial de Cumplimiento o miembros de su grupo de apoyo.

En el informe de resultados de las revisiones y evaluaciones que periódicamente el Oficial de Cumplimiento efectúa y luego remite periódicamente a la Junta Directiva o Directorio de la Entidad, forma parte del mismo, las conclusiones y las recomendaciones correspondientes a cada objeto revisado.

Posterior a la presentación del informe ejecutivo a la Junta Directiva o Directorio, el Oficial de Cumplimiento en coordinación con la auditoría interna y la auditoría externa o revisoría fiscal, adelantan el proceso de seguimiento a las recomendaciones formuladas, a los compromisos adquiridos por los empleados indicados y a las acciones correctivas aplicadas a efectos de corroborar que la acción de mejoramiento se llevó a cabo.

Si las acciones correctivas acordadas no se llevan a cabo en el tiempo establecido, serán materia de informa al máximo órgano directivo en el periodo correspondiente, a efectos de darle aplicación al régimen de sanciones pertinente.

Ubicación de la Unidad de Cumplimiento en el organigrama de la institución

La ubicación orgánica de la Unidad de Cumplimiento en una entidad de seguros, debe ser adecuada para que permita el cumplimiento de las responsabilidades a su cargo.

El personal que ejerce sus funciones en la Unidad de Cumplimiento, debe tener el apoyo de la alta gerencia (Junta Directiva), para que se logre la colaboración de todo el personal de la entidad, y logre así, ejecutar sus labores sin impedimentos.

El Oficial de Cumplimiento, quien dirige la Unidad de Cumplimiento, debe depender de la Junta Directiva o Directorio, para respaldar su libertad y autonomía y permitirle el cubrimiento de todas las áreas críticas; la atención debida a los informes y la aplicación de acciones correctivas.

La ubicación organizacional del Oficial de Cumplimiento debe permitirle mantener un canal de comunicación abierto, dispuesto a informar sobre asuntos de mutuo interés, con el Directorio o Junta Directiva de la Institución.

La Junta Directiva o Directorio debe ser ente encargado de nombrar y remover del cargo al Oficial de Cumplimiento, este aspecto hace más independientes la labor de dicho ejecutivo.

La misión, objetivos, estrategias, autonomía y responsabilidad de la Unidad de Cumplimiento, deben estar documentados y aprobados por la Junta Directiva o Directorio.

La creación de la Unidad de Cumplimiento, debe contemplar:

- La posición orgánica de la Unidad.
- La autorización para acceder a toda la información de la entidad y para realizar las visitas de inspección a oficinas y dependencias de la entidad, con el fin de verificar el

cumplimiento de las normas y las reglamentaciones internas desarrolladas por el Sistema Integral de prevención y control del lavado de activos.

- Definir el alcance y cobertura de los procedimientos específicos de prevención y control.

El Oficial de Cumplimiento debe presentar al Comité de Prevención de Lavado de Activos un informe mensual sobre el avance de la labor que cumple la Unidad de Cumplimiento; las desviaciones o incumplimiento de las normas y reglamentaciones contenidas en el Sistema Integral de prevención y control; las causas de dichas desviaciones; las recomendaciones y, el resultado del seguimiento a las acciones de mejoramiento continuo.

Anualmente, el Oficial de Cumplimiento debe presentar a la Junta Directiva o Directorio y al Comité de Cumplimiento, para la asignación de los recursos económicos necesarios, la Planeación de Cumplimiento y Seguimiento la cual contiene las actividades en materia de cumplimiento, previstas por la entidad de seguros.

Funciones y responsabilidades de cada miembro de la Unidad de Cumplimiento

La principal función de la Unidad de Cumplimiento en una entidad financiera, es lograr proteger a la entidad de la introducción de dineros, derechos y activos provenientes de actividades delictivas.

En consecuencia, las funciones de los miembros del equipo de trabajo que conforman la Unidad de Cumplimiento, se encaminan a verificar:

- La ejecución de los procedimientos específicos para la prevención y control del lavado de activos, por parte de los empleados responsables.
- La observancia de los preceptos contenidos y desarrollados en el “Código de Conducta”, por parte de todos los empleados de la entidad.

- La ejecución de los programas de capacitación sobre prevención del lavado de activos; actualización normativa; diseño de nuevos procedimientos específicos; desarrollo de nuevas técnicas de lavado, asumidas por la delincuencia organizada y acciones internacionales para el control y represión de capitales originados en actividades delictivas.
- El análisis de razonabilidad que se debe efectuar sobre las operaciones inusuales a efectos de determinar el nivel de sospecha y la viabilidad de reporte como operación sospechosa al estamento correspondiente.
- La revisión de los reportes periódicos de información a los entes externos de supervisión y control.
- La elaboración de los informes mensuales.
- El seguimiento efectuado a las operaciones de los clientes, cotejo de las mismas con la actividad económica, la base patrimonial y las demás variables financieras declaradas al inicio del vínculo comercial, con el fin de establecer correspondencia entre unos y otros.
- El seguimiento de las acciones correctivas, como un compromiso de mejoramiento a los defectos de control, detectados en visitas de inspección.
- La conformación de estadísticas por segmento de mercado, para determinar el perfil financiero de los clientes, capacidad de operación, potencial económico y maniobra comercial, entre otros factores.
- La elaboración de consultas a fuentes secundaria y primaria, con el fin de determinar tendencias de los mercados atendidos por la empresa y el descubrimiento de nichos de mercado. (Administradora de Riesgos y Auditoría en Seguridad, 2010)

Relación con la auditoría interna y externa

La auditoría externa o revisoría fiscal, es un órgano de vigilancia y control independencia de la administración, del cual se espera imparcialidad absoluta, en sus juicios e informes.

Los objetivos de la auditoría externa o revisoría fiscal que se relacionan con las funciones de la Unidad de Cumplimiento, establecen:

- Cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la entidad se ajustan a las prescripciones legales en materia de prevención de lavado de activos y expresar su opinión sobre la suficiencia del Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos.
- Dar oportuna cuenta a la Asamblea o Junta de Socios, a la Junta Directiva o Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.
- La auditoría externa o revisoría fiscal está facultada para inspeccionar todas las áreas funcionales, incluida las acciones de la Unidad de Cumplimiento, con el propósito de establecer el cabal cumplimiento de la ley y así asegura el funcionamiento de la entidad y el desarrollo normal de las operaciones, en cumplimiento de este objetivo.
- Evaluar el sistema de control adoptado por la entidad para la prevención del lavado de activos.

Las funciones de la Unidad de Cumplimiento, forman parte integrante del Sistema de Control Interno de la entidad financiera, de tal forma que cuando los miembros del equipo de trabajo del Oficial de Cumplimiento, cumplen con la responsabilidad de verificar dicho sistema de control interno, que permita medir lo adecuado, efectivo y la calidad de dicho sistema.

De igual manera, la auditoría externa o la revisoría fiscal evalúa el Sistema de Control Interno de la entidad a efectos de adecuarlo si fuere el caso, a las condiciones de calidad exigidas en materia de prevención y control del lavado de activos.

Relación con la auditoría interna

La Unidad de Cumplimiento al igual que Unidad de Auditoría Interna, planea el trabajo a ejecutar, examina y evalúa el sistema de control interno, comunica los resultados y efectúa seguimiento a las acciones correctivas.

La labor de las dos Unidades, se diferencia en que la auditoría efectúa su trabajo orientado por las normas de auditoría generalmente aceptadas, mientras que la labor desarrollada por la Unidad de Cumplimiento, se hace sobre el Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos.

La relación existente entre las dos áreas, es de cooperación, es decir, cada una programa sus visitas de inspección y el trabajo de campo, en forma independiente, pero en el momento de ejecutar el trabajo de campo, acuerdan las fechas en que cada dependencia efectuará la vista de inspección respectiva.

Cuando las dos Unidades, determinan sus planes de revisión a ejecutar lo hacen en fecha diferentes en el año, de tal forma que la unidad visitada recibe por lo menos un par de visitas como mínimo, ejecutadas bajo dos criterios diferentes.

El alcance del trabajo, cubre los objetivos de revisión, el recurso humano comprometido, las técnicas de revisión empleadas.

4.3 POLÍTICAS DE DEBIDA DILIGENCIA

La recomendación 5 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) trata sobre las políticas de debida diligencia³³ que los Estados deben realizar, la recomendación textualmente indica:

³³ Es importante tomar en consideración lo que estipula la legislación local respecto de la debida diligencia, contenida en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Libro II, Título XII, Capítulo I, Normas para las Instituciones del Sistema de Seguros Privado sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Sección V, Abril 2013; puesto que las empresas de seguros locales deben cumplir con los procesos de debida diligencia tal cual lo establecido en la mism.

“5. Las instituciones financieras no deberían mantener cuentas anónimas o cuentas a nombre evidentemente ficticios”

Las instituciones de sistema financiero deberían tomar medidas para llevar a cabo procedimientos de debida diligencia sobre sus clientes, entre ellas, la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, cuando:

- se inicien relaciones comerciales;
- se lleven a cabo transacciones ocasionales: (i) por encima del umbral designado aplicable; o (ii) que sean transferencias electrónicas en las circunstancias cubiertas por la Nota Interpretativa de la Recomendación Especial VII;
- exista la sospecha de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo; o la institución financiera tenga dudas acerca de la veracidad o congruencia de la información identificatoria del cliente obtenida anteriormente.³⁴

Las medidas a tomar sobre procedimientos de debida diligencia, son las siguientes:

- Identificar al cliente y verificar la identidad de ese cliente empleando documentos, datos e información de una fuente independiente, confiable;
- Identificar al titular beneficiario final, y tomar medidas razonables para verificar la identidad del titular beneficiario final de modo que la institución financiera quede convencida de que conoce al titular beneficiario final. En el caso de las personas jurídicas y las entidades jurídicas, las instituciones financieras además, deberían tomar medidas razonables para conocer la estructura de propiedad y control del cliente;
- Obtención de información sobre el objeto y la supuesta naturaleza de la relación comercial;
- Llevar a cabo un procedimiento de debida diligencia permanente respecto de la relación comercial, así como un escrutinio de las transacciones realizadas durante todo el curso de esa relación, con el fin de asegurar que las transacciones que se están haciendo son compatibles con lo que la institución sabe del cliente, sus negocios y perfil de riesgo, incluso el origen de los fondos, en caso necesario.

³⁴ Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Libro II, Título XII, Capítulo I, Normas para las Instituciones del Sistema de Seguros Privado sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Art. 12, Abril 2013, habla de la Debida Diligencia que deben aplicar las empresas de seguros y reaseguros en el ámbito nacional.

Las empresas de seguros deberían aplicar cada una de las medidas sobre procedimientos de debida diligencia de los puntos precedentes, pero podrán determinar el alcance de esas medidas sobre la base de la sensibilidad al riesgo, según el tipo de cliente, relación comercial o transacción. Las medidas que se adopten deberían ser coherentes con cualquier pauta dictada por las autoridades competentes. En lo que hace a las categorías de mayor riesgo, las instituciones financieras deberían llevar a cabo un procedimiento de debida diligencia más exhaustiva. En algunas circunstancias en que los riesgos sean menores, los países pueden decidir que las instituciones financieras pueden aplicar medidas más reducidas o simplificadas.

Las empresas de seguros deberán verificar la identidad del cliente y del titular beneficiario final antes y mientras se establece una relación comercial o se hacen transacciones con clientes ocasionales. Los países pueden permitir a sus instituciones financieras que completen la verificación lo antes posible después de establecida la relación, cuando los riesgos de lavado de dinero se estén manejando con eficacia y cuando sea esencial para no interrumpir el curso normal de los negocios.

En los casos en que la institución financiera no pueda cumplir con lo previsto en los puntos (a) a (c) anteriores, no debería abrir la cuenta, iniciar relaciones comerciales ni llevar a cabo la transacción; o debería poner fin a la relación comercial; y debería pensar en hacer un reporte de operaciones sospechosas en relación con el cliente.

Estos requisitos se aplicarían a todos los clientes nuevos, aunque las instituciones financieras también deberían aplicar esta Recomendación a los clientes ya existentes en base a su importancia y riesgo, y deberían llevar a cabo un procedimiento de debida diligencia respecto de las relaciones existentes en momentos apropiados. (Financial Action Task Force, 2013)

Las políticas y procedimientos de debida diligencia en la identificación de clientes deberán contener reglas que permitan obtener un adecuado conocimiento de los clientes potenciales, actuales, permanentes y ocasionales que operan con la empresa de seguros o compañía de reaseguros, vinculados a ellas de manera directa o por medio de intermediario, según sea el caso, prestando especial atención a las características, naturaleza y dimensión de las coberturas a contratar.

La identificación del cliente implica el conocimiento y revisión de todos los datos de la persona natural o jurídica al momento de iniciar o renovar la relación contractual, ya sea en la suscripción de pólizas, al realizar pagos relacionados con el curso del seguro o reaseguro o al proporcionar cualquier otro servicio.

En el caso de personas jurídicas, el conocimiento del cliente supone, además, el conocer la estructura de su propiedad, es decir, la identidad de los accionistas o socios.³⁵

4.4 LISTAS “NEGRAS” INTERNACIONALES

Las listas negras internacionales, o blacklist son listas de personas, instituciones, organizaciones y países, entre otros, que deben ser discriminados en alguna forma con respecto a los que no están en la lista.

En el año 2000 la comunidad internacional se movilizaba en contra de las plazas offshore para lo cual El Foro de Estabilidad Financiera (creado por el G-7), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI) difundieron casi simultáneamente listas de países y territorios que incurrían en prácticas cuestionables en materia de estabilidad financiera, fraude fiscal y lavado de dinero.

Poco tiempo después sólo el GAFI siguió adelante con la lista negra que había elaborado, partiendo de 15 países y territorios no cooperantes en la lucha antilavado.

Luego de adoptar dispositivos de vigilancia real, por los atentados de septiembre de 2001, Estados Unidos en octubre de 2001 emite la Patriot Act (Ley), que coloca al sistema bancario y financiero bajo su control, y obliga a los bancos de todo el mundo que se relacionan con él a garantizar la transparencia de sus estructuras y operaciones financieras, y evitar así lavado de activos, concentrada en la financiación del terrorismo.

Como parte de sus esfuerzos de cumplimiento, la OFAC (Office of Foreign Assets Control) perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica,

³⁵ Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Libro II, Título XII, Capítulo I, Normas para las Instituciones del Sistema de Seguros Privado sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Arts. 14, Abril 2013

publica una lista de individuos y empresas propiedad o controladas por, o que actúan en nombre de los países no evaluados. También enumera los individuos, grupos y entidades, como los terroristas y narcotraficantes. En conjunto, estos individuos y empresas se llaman "Specially Designated Nationals" o "SDN". Sus activos están bloqueados y los ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica están prohibidos de mantener vínculos con ellos.

Las categorías SDN / OFAC sobre las que se imponen sanciones en los Estados Unidos de Norteamérica incluyen:

- Países
- Entidades
- Personas
- Embarcaciones
- Transacciones puntuales

Adicionalmente se han creado otras listas de la Unión europea, Naciones Unidas, Reino Unido, entre las más importantes, con el objetivo de cooperar con la erradicación del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Los países ante la creciente expansión de estos delitos van generando listas negras locales, las cuales apoyan la gestión de prevención de las entidades del sistema financiero, es así como Ecuador ha generado una lista de sindicatos cuya información es administrada por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP).

Las entidades del sector financiero y asegurador como parte de sus controles en los procesos de prevención de lavado de activos, deben permanentemente cruzar las bases de listas negras internacionales y nacionales versus su base de datos de clientes, de tal forma que, de existir una coincidencia, el oficial de cumplimiento reporte inmediatamente a los estamentos correspondientes.

4.5 SEÑALES DE ALERTA POR OPERACIONES DE RIESGO Y MECANISMOS DE DETECCIÓN DE CASOS³⁶

Hay algunas situaciones que pueden indicar posibles hechos que se estén ejecutando, o que intenten ejecutarse para involucrar a las empresas de seguros en operaciones de lavado de activos o financiación del terrorismo. A estas situaciones se las denomina señales de alerta.

Las señales de alerta muestran los comportamientos particulares de los clientes y situaciones atípicas que presentan las transacciones y que pueden encubrir operaciones de lavado de activos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las operaciones que presentan estos comportamientos son operaciones ilegales, por tal razón, el hecho de identificar señales de alerta no significa que la operación deba ser reportada como sospechosa.

Las señales de alerta se identifican a través del conocimiento de los métodos de lavado (tipologías). A su vez, el método de lavado se refiere a la operación completa desarrollada por el delincuente, desde la colocación, pasa por la estructuración, hasta que concluye en la integración de los recursos ilícitos.

Estas señales de alerta pueden ser observadas por los empleados de una empresa que se encuentren debidamente capacitados, ya que a través del comportamiento de los clientes y sus transacciones se pueden determinar situaciones anómalas.

Las señales de alerta o banderas rojas no son operaciones sospechosas, algunas autoridades y legislaciones las denominan operaciones sospechosas, esta equivocación genera confusiones. Las señales de alerta o banderas rojas ayudan a identificar o detectar comportamientos, conductas, actividades, métodos o situaciones atípicas de los clientes, pero la presencia de ellas no significa estar frente a una operación sospechosa que debe ser

³⁶ Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Libro II, Título XII, Capítulo I, Normas para las Instituciones del Sistema de Seguros Privado sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Art. 59, Abril 2013
Circular INJ-DNE-SPLA-2011-015, del 03 de marzo de 2011, Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.

objeto de reporte, simplemente deben llamar la atención para proceder al análisis detallado de una situación específica.

Como parte de los instrumentos para la identificación de las señales de alerta o banderas rojas, las entidades de seguros deberán contar con herramientas tecnológicas que permitan consolidar las operaciones o transacciones de los clientes para detectar la frecuencia, volumen y características de las mismas; y, que se enmarquen, principalmente, en la contratación de pólizas cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes; y, en las transacciones y operaciones que por su número o por las características particulares de las mismas no se adecuen al perfil económico del cliente.

Dentro de las política de debida diligencia referentes a conozca a su cliente y conozca su mercado, las empresas de seguros deben conocer a fondo las características particulares de las actividades económicas de sus clientes, así como de las operaciones que éstos realizan en los diferentes mercados a fin de adoptar procedimientos que permitan a la compañía identificar el mercado al cual dirigen los productos que ofrecen y generar señales de alerta en aquellas operaciones que, al compararlas contra las características usuales del mercado, den como resultado transacciones inusuales.

Dentro de las compañías de seguros, las principales señales de alerta o banderas rojas son:

- La existencia de un mismo beneficiario de pólizas de seguros de vida o retiros significativos, que han sido contratados por diferentes personas.
- La existencia de una misma persona en varias pólizas de seguros de vida de valores significativos, contratadas en una o distintas empresas de seguros.
- Presencia de una solicitud de una póliza de seguros de vida de valores significativos por parte de un potencial cliente desde un lugar geográfico distante, cuando cerca del su domicilio podría conseguir una póliza de características semejantes.
- Presencia de clientes que solicitan una póliza de seguros cuya suma asegurada no concuerda con su nivel de vida o perfil de actividad, o efectúa transacciones que no corresponden a ese perfil.

- Cliente que no demuestra preocupación por el costo del seguro o la conveniencia del mismo, pero si manifiesta su interés con relación a las condiciones de la cancelación anticipada.
- Cancelación de manera anticipada de pólizas con devolución de la prima al asegurado sin un propósito claro o en circunstancias no usuales, principalmente cuando el pago se lo hace en efectivo o a una cuenta de un tercero sin aparente relación.
- La existencia de pólizas cuyos contratantes son personas jurídicas o naturales que tienen una misma dirección, siendo las mismas personas firmas autorizadas a pesar de que no existe aparentemente ninguna razón económica o legal para ello.
- Clientes domiciliados en paraísos fiscales o países donde existe conocida actividad terrorista o son considerados como no cooperantes por el GAFI o sujetos mencionados en listas nacionales e internacionales de observados.
- La existencia de clientes que solicitan un producto de seguros y no muestran interés sobre el rendimiento de la póliza, pero se interesan en el procedimiento de cancelación anticipada del contrato.
- Clientes que pretenden contratar un seguro de bienes relacionados directa o indirectamente con posibles delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
- La contratación por un mismo cliente de varias pólizas por montos inferiores al límite requerido para el reporte de los umbrales establecidos, seguidas de la cancelación con devolución de primas.
- La existencia de un beneficiario de seguro sin aparente relación con el asegurado.
- Cambio de domicilio del asegurado que mantiene una póliza sobre una propiedad inmediatamente antes de la ocurrencia del siniestro.

- Solicitud o pago de primas elevadas a través de transferencia electrónica o en efectivo.
- Solicitud o devolución posterior de diferencias en el pago de primas.
- Solicitud o pago de prima con cheque u orden de pago a terceros sin aparente relación con relación con el asegurado.
- El cliente de un producto de seguros se muestra renuente a proporcionar información normal, o la información que suministra es mínima, ficticia o su investigación resulta muy costosa para la institución.
- Emisión de pólizas cuyo riesgo ya ocurrió.
- Emisión de pólizas para la cobertura de personas fallecidas.
- Pago a clientes cuya indemnización no tiene relación a la cobertura del contrato de seguro.
- Pagos cuya indemnización se la efectuó a terceros no indicados como beneficiarios o reconocidos como legítimos herederos, sin tener conexión con el titular de la póliza.
- Pagos a clientes cuya indemnización lo efectúan por valores superiores al capital declarado en la póliza.
- Solicitud o utilización de cheques de terceros para compra de pólizas.
- Intervención de un intermediario en una jurisdicción no regulada o cuya regulación es muy poco estricta o donde son frecuentes las actividades del crimen organizado (ej. Narcotráfico o terrorismo).
- Cliente que acepta condiciones muy desfavorables que no guardan relación ni con su salud ni con su edad.

- Clientes cuyas pólizas de seguro con valores que exceden los medios aparentes del cliente y sus necesidades.
- Clientes de productos de seguros que desean pedir en préstamo el máximo valor en efectivo de una póliza de prima única, poco después de pagarla. (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2011)

4.6 REPORTE DE INFORMACIÓN

De conformidad con la recomendación 13 del GAFI:

Si una institución financiera sospechara o tuviera fundamentos razonables para sospechar que ciertos fondos son el producto de una actividad delictiva, o que están relacionados con el financiamiento del terrorismo, se les debería exigir, directamente por ley o reglamentación, que reporten sus sospechas de inmediato a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). (Financial Action Task Force, 2013)

Los requerimientos de reporte varían de jurisdicción a jurisdicción. La mayoría de legislaciones de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyen como requerimiento que el sector financiero reporte todas las transacciones o actividades sospechosas. Esta obligación no debe ser subestimada por los sujetos obligados.

Es de suma importancia que el reporte de estas actividades debido a:

- Es un requerimiento legal en la mayoría de países. La falta de reporte de operaciones sospechosas puede conllevar multas onerosas, procesos penales en contra de los sujetos obligados.
- Ayuda a proteger la reputación de la institución ante eventuales casos.
- Ayuda a proteger a los sujetos obligados de contubernio con los lavadores de activos y terroristas.
- Ayuda a las autoridades en la investigación de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros crímenes.

Cada estado de acuerdo con su legislación determina diferentes requerimientos relacionados con la estructura de reporte de actividades sospechosas (STRs / SARs).³⁷ En todos los casos, sin embargo, el factor esencial es que cuando un empleado de una empresa sospecha de una transacción, inmediatamente la reporte. Cada empleado no debe asumir que alguien más hará esta tarea, ya que esto acarrearía que en un eventual caso, el empleado resulte cómplice de los delincuentes.

Algunos estados en sus legislaciones establecen umbrales para el reporte de actividades sospechosas, sin embargo los estándares internacionales no los estipulan.

Usualmente las instituciones mantienen reportes definidos para el reporte de operaciones sospechosas, a pesar de ello, las normas internacionales han establecido un método denominado la “five Ws” para completar adecuadamente los reportes SAR ó STR.

El método se detalla a continuación:

1. Who (Quién) es el cliente cuya transacción levantó su sospecha?

En este punto se debe incluir:

Detalle de la actividad económica del cliente

Objeto de la relación comercial (adquisición de seguros)

Fecha en la que empieza la relación comercial (Fecha del primer contacto con el cliente)

2. What (Qué) pasó con la transacción para que levante su sospecha?

Describe la transacción, actividad o comportamiento que por el cual se considera la sospecha.

Describe la forma de pago (efectivo, cheque, transferencia)

3. When (Cuándo) ocurrió la transacción, actividad o comportamiento sospechosa?

Si es una sola transacción, anote la fecha de la operación.

³⁷ Suspicious transactions reporting (STR); Suspicious activity reporting (SAR)

Si es un patrón de actividades, anote la fecha del primer contacto.

Describa al actividad sospechosa durante el período de la relación comercial, ejemplo: tres transferencias del mismo banco para el pago de una prima.

Destaque cuándo la actividad fue determinada como sospechosa.

4. Where (Dónde) ocurrió la actividad sospechosa?

Ubique la zona donde se realiza la relación comercial

Describa el producto objeto de la transacción

Identifique los beneficiarios de los fondos

Why (Por qué) considera que es una actividad sospechosa.

4.6.1 Reportes Internacionales

Todas las compañías y empleados bajo la cobertura de una ley local de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo deben realizar los reportes Suspicious Transaction Reporting (STR) y Suspicious Activity Reporting (SAR).

Estos reportes en las diferentes legislaciones deben constar como obligatorios y como elementos básicos para la ejecución de las políticas y procesos internos que den como resultado de un eficiente control para la identificación de clientes constituyendo así una herramienta fundamental en el proceso de prevención ya que es un elemento documental definitivo que permitirá al sujeto obligado demostrar que ha cumplido con la debida diligencia, resguardándolo a futuro de cualquier contingencia por eventuales casos.

En todos estados cooperantes, los reportes STR y SAR son entregados a las unidades de inteligencia financiera, quienes evalúan si la información remitida corresponde efectivamente a una operación sospechosa o no.

Cabe mencionar que no todas las transacciones inusuales son sospechosas. Para una mejor identificación de las transacciones, es necesaria una correcta aplicación de la política conozca a su cliente así como una adecuada identificación del principio de inconsistencia de la información.

Los resultados obtenidos por cada estado a través de las unidades de inteligencia financiera son remitidos a las diferentes organizaciones regionales y mundiales como el GAFISUD y el GAFI.

4.6.2 Locales

A nivel local, en Ecuador, las compañías de seguros deben reportar a la Superintendencia de Bancos y Seguros y a la Unidad de Análisis Financiero.

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador

De conformidad con el artículo 33, Sección VI, Capítulo I “Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos para las Personas Naturales y Jurídicas que integran el sistema de seguro”, de la Resolución No. JB – 2012-2147 de la Junta Bancaria.

ARTÍCULO 33.- Las empresas de seguros y las compañías de reaseguros enviarán mensualmente, con fines estadísticos, a la Superintendencia de Bancos y Seguros la información sobre los reportes remitidos a la Unidad de Análisis Financiero - UAF, en el formato predefinido que contendrá el siguiente detalle:

33.1 Número de reportes y valor consolidado sobre operaciones realizadas por cantidades superiores a los umbrales;

33.2 Número de reportes por operaciones inusuales e injustificadas, ejecutadas o intentadas;

33.3 Localización geográfica por ciudades de las oficinas, agencias, sucursales o matriz de las empresas de seguros y compañías de reaseguradoras en las que se verificaron las operaciones reportadas; y,

33.4 Cualquier otra que la Superintendencia de Bancos y Seguros requiera.³⁸

Unidad de Análisis Financiero

De acuerdo con la Resolución No. UIF-DG-2010-0007 de 28 de enero de 2010 las empresas de seguros deben enviar la siguiente información:

- Reporte de operaciones y transacciones económicas inusuales e injustificadas.

³⁸ Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Libro II, Título XII, Capítulo I, Normas para las Instituciones del Sistema de Seguros Privado sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Arts. 33, Abril 2013

- Reporte de no existencia de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas.
- Reporte de tentativas de operaciones y transacciones económicas inusuales e injustificadas, siempre y cuando la institución tuviere una constancia material del intento del hecho.
- Reporte de operaciones y transacciones económicas que iguallen o superen los umbrales establecidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); así como, de ser el caso, las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a tales umbrales, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un período de treinta días.
- Otros que establezca la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante circular.

La Unidad de Inteligencia Financiera con fecha 2 de julio de 2010, mediante Circular UIF-DG-DP-2010-0821, emite la estructura de los reportes para que las instituciones del sistema de seguros reporten la información requerida por ley.

Con fecha 30 de diciembre de 2010 se aprueba la “Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos” la cual en su artículo 3 estipula que:

Registrar las operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un período de treinta (30) días. La obligación de registro incluirá las transferencias electrónicas, con sus respectivos mensajes, en toda la cadena de pago. El registro se realizará en los respectivos formularios aprobados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Las operaciones y transacciones individuales y múltiples, y las transferencias electrónicas, señaladas en este literal se reportarán a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dentro de los quince (15) días posteriores al cierre del ejercicio mensual de cada entidad;

Reportar, bajo responsabilidad personal e institucional, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, dentro del término de dos (2) días, contado a partir de la fecha en que el

comité de cumplimiento de la institución correspondiente tenga conocimiento de tales operaciones o transacciones; y,

Reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dentro de los quince (15) días posteriores al cierre de su ejercicio mensual, sus propias operaciones nacionales e internacionales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas. (Registro Oficial 352 de 30 de diciembre de 2010, Primer Suplemento)

Básicamente el artículo 3 de Ley en mención establece el umbral de USD \$ 10.000 para todas las transacciones individuales y/o múltiples en un período de 30 días en beneficio de una misma persona.

Adicionalmente dispone un nuevo límite de tiempo para enviar los reportes anteriormente mencionados a la Unidad de Análisis Financiero.

4.7 CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS

La capacitación del personal en la prevención contra el lavado de dinero debe ser efectuada en forma permanente, no solo actualizando conceptos técnicos, sino creando una verdadera cultura corporativa en materia de prevención.

Las empresas de seguros que implementen sistemas de prevención contra el lavado de activos deben establecer como objetivo prioritario la adopción de las medidas necesarias para que todo el personal a su servicio tenga conocimiento de las exigencias de la normativa respecto de la prevención de lavado de activos. Los programas de formación tienen que considerar las normas internacionales y la legislación local, las últimas tendencias de la actividad delictiva, así como las normas y procedimientos internos destinados a combatir el lavado de activos, incluida la forma de reconocer la actividades sospechosas y comunicarlas.

Por ello cada entidad tiene que organizar eventos de formación y cursos especiales dirigidos a su directivos y empleados, específicamente al personal que se desempeña en aquellos puestos de trabajo que por sus funciones son idóneos para detectar los hechos u operaciones que puedan estar relacionados con el lavado de dinero a fin de capacitarlos en la detección y asesorarlos en cuanto a la manera de proceder en tales casos.

Los planes de capacitación implementados deben considerar un capítulo especial para el personal nuevo, por lo que sería de mucha utilidad implementar programas de inducción específicos para ellos.

El área de recursos humanos de las entidades, al desarrollar planes y programas de capacitación corporativos deberá tomar en consideración las acciones formativas correspondientes y determinará el personal que requiere formación especializada, en atención a la valoración del riesgo de lavado de activos inherente a su función o destino. Se deberán registrar todas las capacitaciones impartidas dejando constancia expresa en los registros de la fecha, lugar y duración de cada curso, nombre y nivel del formador, contenido de los programas, material de apoyo utilizado, documentación entregada a cada uno de los asistentes.

Independientemente de los planes de capacitación, debe existir una política en la cual se establezca que todos los responsables de la prevención de lavado de activos estén informados e informen permanentemente a los empleados dependientes de todas las modificaciones que norman esta materia, así como de todas las nuevas modalidades, técnicas o procedimientos que se observen como susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos.

Las empresas en general deben concienciar que una capacitación permanente a su personal respecto de la prevención de lavado de activos es una de las principales herramientas para evitar que este delito crezca y erosione la economía de los estados.

4.8 DEFINICIÓN DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN COMPAÑÍAS DE SEGUROS INTERNACIONALES QUE OPERAN EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Se define como mecanismos de prevención del delito de lavado de activos en compañías de seguros internacionales que operan en la República del Ecuador a los siguientes:

4.8.1 Elementos del Gobierno Corporativo

La Junta General de Accionistas de las compañías de seguros internacionales radicadas en el Ecuador, deberán nombrar un Directorio conforme lo establecido en los estatutos de las mismas. El Directorio a más de las definiciones de carácter societario, definirá las medidas de control orientadas a prevenir y mitigar los riesgos que en el ejercicio de las operaciones de la compañía puedan ser utilizadas como instrumentos para lavar activos o financiar delitos; estas medidas de control son:

- Desarrollo e implementación del Código de Ética dentro del cual se incluyan las reglas de conducta y procedimientos que orienten la actuación de los empleados respecto al cumplimiento de normas internas y procedimientos de prevención de lavado de activos, los cuales se estén armonizados con lo estipulado en la Resolución No. JB- 2012 – 2147, contentiva de las normas de prevención de lavado de activos para compañías de seguros.

Anualmente cada empleado firmará una certificación, la cual constituirá la constancia de que leyó el código de conducta y se compromete a cumplir todo allí estipulado, sujeto a que de existir una falta ésta será sancionada de conformidad al Reglamento Interno de la compañía.

- Conformación de Comités:
 - Comité de Riesgos, el cual estará encargado de diseñar y proponer estrategias, políticas, procesos y procedimientos de la administración integral de riesgos, así como monitorear los riesgos de la compañía respecto al apetito de riesgos de la compañía debidamente aprobado por el Directorio.

El Comité de Riesgos estará conformado por un vocal del Directorio, que lo presidirá, el representante legal de la institución, el responsable del área técnica de seguros de la compañía, así como también deberá contar con la participación del especialistas de cada uno de los riesgos, los funcionarios de las áreas de negocios y funcionarios que se consideren vinculados con los temas a tratarse.

Sus funciones, responsabilidades, objetivo, quórum se detallan en el numeral 4.1.1.

- Comité de Cumplimiento, el cual deberá cumplir con lo estipulado con la Resolución JB- 2012-2147 respecto a sus funciones y cuya conformación, será la siguiente:

1. El representante legal o su delegado
2. Un miembro del directorio o su delegado,
3. Un responsable del área comercial o su delegado
4. Un responsable del área técnica o su delegado
5. Un responsable de control interno o su delegado
6. El oficial de cumplimiento
7. El asesor legal

Sus funciones, responsabilidades, objetivo, quórum se detallan en el numeral 4.1.2.

- Comité de ética, el cual se encargará de establecer vigilará el cumplimiento de las disposiciones del Código de Ética en las prácticas y procedimientos relacionados con el comportamiento de quienes conforman una compañía.

Sus funciones, responsabilidades, objetivo, quórum se detallan en el numeral 4.1.3.

- Comité de auditoría cuyo objetivo es fortalecer el sistema de control interno. Este comité constituirá una unidad de asesoría y consulta del Directorio.

El Comité deberá estar integrado por dos miembros designados por el Directorio y el tercero elegido por dicho organismo colegiado, fuera de su seno, conforme lo estipula la legislación local vigente.

Sus funciones, responsabilidades, objetivo, quórum se detallan en el numeral 4.1.4.

- Designación del Oficial de Cumplimiento, el cual deberá ser nombrado por el Directorio de la compañía; estará calificado como ejecutivo de alta gerencia, y dependerá del mismo organismo colegiado. Adicionalmente una vez nombrado el Oficial de Cumplimiento por parte de Directorio, deberá enviar a la Superintendencia de Bancos y Seguros su curriculum vitae, conforme lo requerido por la Resolución JB – 2012 – 2147, para su calificación por parte del regulador; y, con ella incorporarse a la compañía.

Anualmente, hasta el mes de marzo, el Oficial de Cumplimiento deberá actualizar su información en la Superintendencia de Bancos y Seguros para mantener su calificación y poder ejercer las funciones de Oficial de Cumplimiento.

El oficial de cumplimiento será encargado de ejecutar el programa de cumplimiento definido para la organización según las normativa local y conforme con las políticas de la casa matriz.

4.8.2 Procedimientos específicos de prevención

El Oficial de Cumplimiento es el responsable de la implementación y ejecución del código de ética, programa y manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los cuales deberán contener los siguientes procedimientos específicos:

- Procedimientos para impulsar el conocimiento de la normativa de en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Definir factores críticos y categorías de riesgo de prevención de lavado de activos.
- Lineamientos de la entidad frente a factores de riesgo y exposición de lavado de activos.
- Monitoreo de transacciones de los clientes.
- Garantizar la reserva y confidencialidad de la información obtenida de los clientes.

- Implementación de procesos de identificación de condiciones básicas del perfil de riesgo de los clientes.
- Establecimiento de perfiles operativos y de comportamiento del cliente, antes de la vinculación, con cada cambio que se produzca y en las renovaciones o actualizaciones.
- Proceso de implementación de metodologías y procedimientos para detectar operaciones inusuales e injustificadas.
- Envío oportuno de la información solicitada por los organismos de control, Superintendencia de Bancos y Unidad de Análisis Financiero – UAF.
- Aplicación de las políticas de conozca a su cliente, conozca a su accionista y empleado, conozca a su proveedor de servicios de seguros y conozca a su mercado, que básicamente son:
 - Política conozca a su cliente, la cual se refiere a la implementación de formularios de vinculación que deberán ser entregados a cada cliente, en los que constarán la información básica del contratante, la información financiera, declaración de origen lícito de fondos, declaración de privacidad y autorización de para la aplicación del buen manejo de la información conforme las mejores prácticas locales y de la organización. Adicionalmente los clientes deberán anexar documentos que validen: su existencia legal, tales como RUC, Estatutos Sociales, nombramientos, documentos que validen su solvencia y cumplimiento con las autoridades tributarias, tales como balances, estados de cuenta, impuesto a renta y copia de un servicio básico que valide la dirección de residencia o trabajo.
 - Política conozca a su prestador de servicios de seguros, la cual se refiere a la implementación de formularios e información anexa que acrediten la existencia legal, autorizaciones del organismo de control, solvencia, cumplimiento de obligaciones con reguladores y declaraciones de origen lícito de fondos y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

- Política conozca a su accionista y empleado, la cual conlleva la implementación de un proceso de conocimiento exhaustivo de los accionistas, funcionarios y empleados de la organización, a través de formularios de información básica y financiera de los empleados, así como información procedimientos de inspección y validación de la información obtenida.

Adicionalmente se deberá realizar una matriz de riesgos por cada empleados de la institución, la misma que deberá actualizarse permanentemente de ser el caso.

- Política conozca a su mercado, la cual se refiere al conocimiento y monitoreo de las características particulares de las industrias en la que los clientes se desarrollan económica y comercialmente, de tal forma que la institución identifique y diseñe señales de alerta para detectar operaciones inusuales.
- Procedimientos para la aplicación de procesos de monitoreo permanentes
 - Procedimientos para el oportuno reporte interno y externo de operaciones inusuales e injustificadas.
 - Capacitación y evaluación permanente en materia de prevención de lavado de activos.
 - Políticas y procedimientos para la conservación de documentos
 - Mecanismos para la recopilación, verificación y actualización de la identidad de los clientes, al inicio de la relación comercial, cuando existan cambios y cuando se realice la renovación de transacciones.
 - Establecimiento de perfiles operativos y de comportamiento de los clientes.
 - Identificación de beneficiarios de todos los productos comercializados.

- Screening de listas negras nacionales e internacionales a cada uno de los clientes tanto antes de la vinculación comercial, así como al menos una vez por mes un screening de toda la base de datos de clientes de la compañía y cada vez que se realice un pago a un beneficiario.
- Definición de señales de alerta conforme la legislación local e internacional e implementación de procesos de identificación de las mismas.

4.8.3 Generación de matrices de Riesgo

El área de riesgos conjuntamente con el departamento de Cumplimiento, realizarán las matrices del riesgo de lavado de activos para cada uno de los clientes de la compañía. Estas matrices deberán realizarse teniendo en consideración cuatro factores: cliente, producto jurisdicción y canales de distribución.

Las matrices deberán incorporar identificación del riesgo inherente, controles, calificación del control, riesgo residual y monitoreo de los controles y del riesgo residual.

Para una adecuada administración del riesgo de lavado de activos, las matrices deberán ser parametrizadas en un sistema computarizado que permita manejo de grandes bases de datos y señales de alerta.

4.8.4 Personas Políticamente Expuestas (PEPS)

Las compañías de seguros internacionales radicadas en Ecuador, deben mantener listas actualizadas de todas las personas políticamente expuestas ecuatorianas y extranjeras, definidas por la Unidad de Análisis Financiero – UAF. Toda la base de datos de clientes de la compañía debe ser validada permanentemente contra la lista actualizada de PEPS; y, en caso de coincidencias el oficial de cumplimiento debe ampliar la investigación y monitoreo de las transacciones de aquellas coincidencias.

4.8.5 Reportes de información a entidades de control

- **Locales**

- Las compañías de seguros deben reportar a la Superintendencia de Bancos y Seguros toda la información de los asegurados y sus transacciones, a través de archivos definidos, llamados “estructuras”. La información de dichas estructuras se deben enviar mensualmente; y, su fin es para que el regulador realice análisis estadísticos y de riesgos para generar matrices institucionales y nacionales.
- Adicionalmente las compañías de seguros deben enviar reportes a la Unidad de Análisis Financiero. En estos reportes se debe enviar toda la información respecto a la información del cliente y sus transacciones realizadas en un período de tiempo de 30 días.

Los reportes contienen todas transacciones por cliente iguales o superiores a USD \$10.000, o que sumadas den este umbral, así como todas las operaciones inusuales o sospechosas. Con esta información la Unidad de Análisis Financiero – UAF, genera mapas de vinculación para evidenciar posibles casos de lavado de dinero.

- **Internacionales**

- Las compañías de seguros internacionales radicadas en Ecuador deben realizar un plan de prevención de lavado de activos armonizado con todos los procesos locales y con el plan de local de prevención. Dicho plan debe enviarse a casa matriz para su aprobación y publicación en la intranet mundial de la corporación.
- Mensualmente las compañías de seguros internacionales deben enviar a casa matriz el reporte de transacciones inusuales e injustificadas, en su traducción en inglés Suspicious Activity Reporting (SAR), las cuales fueron reportadas a las autoridades locales.
- Trimestralmente se enviará los reportes de todos los eventos de existir, respecto de faltas al código de ética, fraudes y conflictos de interés.

- Mensualmente el departamento de Siniestros enviará a casa matriz el reporte de transacciones sospechosas de fraudes.
- Permanentemente se enviará a casa matriz todas coincidencias llamadas “falsos positivos” del screening de listas internacionales, para que sean investigados en los departamentos especializados y poder determinarlos como coincidencias negativas o positivas y que darles de alta o a su vez tomar las acciones correspondientes.

4.8.6 Capacitación

Las compañías de seguros internacionales radicadas en Ecuador deben impartir capacitación en materia de lavado de activos en forma permanente a toda la compañía, de tal forma de crear una verdadera cultura corporativa de prevención.

Anualmente las compañías enviarán a la Unidad de Análisis Financiero – UAF, un reporte de capacitación respecto de lavado de activos y financiamiento del terrorismo impartido a todos sus empleados. Dicho informe debe contener el nombre del empleado, posición y nombre del curso de dictado.

El departamento de Recursos Humanos en el proceso de inducción de nuevos empleados, incluirá una capacitación en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

- El sector de los seguros corre el riesgo de que se lo emplee indebidamente para actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Los delincuentes están siempre en la búsqueda de mecanismos para ocultar el origen ilícito de los fondos. Los productos y las transacciones de las aseguradoras ofrecen la oportunidad de blanquear capitales o financiar el terrorismo.
- Si bien organismos internacionales como la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) no considera que el sector de los seguros es tan vulnerable como los demás sectores que prestan servicios financieros, es un posible blanco para quienes necesitan lavar dinero. Las aseguradoras podrían, con o sin su conocimiento, verse involucradas en este tipo de actividades ilícitas, lo que las expone a problemas legales, y ponen en riesgo a sus operaciones y su reputación.
- Las compañías de seguros tienen establecer sistemas de prevención que deben estar básicamente fundamentados en principios y elementos técnicos que han sido sugeridos por las organizaciones internacionales especializadas en el tema. Estos principios empiezan con la educación civil, creando conciencia en los clientes de la importancia que tiene su participación en el accionar contra toda organización delictiva; ya que de lo contrario se destruyen los principios de justicia, libertad y democracia de los países.
- La verdadera esencia de la prevención en materia de lavado de dinero está en que los propios sujetos obligados denuncien todo hecho que conlleve este delito y desarrollen e implementen sistemas de control y prevención en sus organizaciones, que mediante señales de alerta o alarmas en sus sistemas operativos les permita

detectar clientes y operaciones sensibles o sospechosas del delito de lavado de activos.

- También los sujetos obligados deberán contar con un marco regulatorio que defina el proceso de prevención para que las organizaciones sepan cómo actuar ante la evidencia de actividades sospechosas.
- El Ecuador a partir del año 2010 empieza a tomar acciones frente al delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Parte de estas acciones tienen que ver con la reestructuración de su legislación en el ámbito penal, así como la intervención de las entidades reguladoras en varios sectores económicos como el de seguros, a través de normas que están dirigidas a la implementación de sistemas para la prevención de estos delitos.
- Las aseguradoras tanto nacionales como extranjeras, que forman parte del Sistema Financiero Nacional del Ecuador, se encuentran implementando sistemas de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de conformidad con la norma vigente, sin embargo, es de mención que la falta conocimiento de los clientes respecto al delito de lavado de activos lo que hace más difícil la obtención de información para que las organizaciones, validen, investiguen y analicen las transacciones y determinen perfiles de riesgo y por consiguiente potenciales eventos a reportar.
- Es emergente que las entidades nacionales y extranjeras que componen el Sistema de Seguros, continúen implementando sistemas de prevención sugeridos por normas locales y principios internacionales de tal forma que este delito no erosione este importante sector económico, ya que si bien el sector a avanzado en la implementación de herramientas y procesos de prevención, aun no se evidencian resultados significativos que sirvan como estadísticas y certezas para definir tipologías del sector respecto de este delito.
- Es de suma importancia la concienciación de contrarrestar el delito de lavado de activos en la sociedad ecuatoriana, ya que con la cultura de prevención de los

ciudadanos, es posible para las compañías mantener información que permita analizar y detectar donde está proliferando este delito y tomar medidas que ayuden a eliminarlo.

5.2 RECOMENDACIONES

- El delito de lavado de activos se ha propagado a todas las economías del mundo sin fronteras, ni ideologías políticas y/o económicas, por lo que combatir sus acciones trasciende ampliamente la jurisdicción de un país.
- Por lo que se considera, de acuerdo con principios internacionales, que para atacar esta problemática es importante atacar su raíz a través de la prevención. Cada sujeto activo de la economía debe trabajar con el fin de que en su negocio o actividad económica se dificulte el ingreso de flujos provenientes de actividades de origen ilícito.
- Por esta razón las empresas del sector asegurador deben implementar elementos técnicos básicos que se refieren a:
 - Educar a sus clientes, creando conciencia de la importancia que tiene su accionar contra toda actividad criminal.
 - Formar personal con cultura corporativa en materia de lavado de dinero, cuya prioridad sea denunciar todo evento que considere sospechosos.
 - Contar con un marco regulatorio que defina un mínimo de procesos de prevención, así como la implementación de códigos de Ética, políticas y procedimientos contra el delito de lavado de activos.
 - Mantener un compromiso corporativo de lucha contra el lavado de activos a través de normas y políticas internas.
 - Incorporación de una unidad de Cumplimiento, dentro de su estructura organizacional, cuyo función prioritaria sea el monitoreo del cumplimiento de las

leyes y políticas de prevención de lavado de activos, y el reporte de todo evento sospechoso a las entidades de control correspondientes.

- Implementación de políticas y manuales de debida diligencia respecto a conozca a su cliente, conozca a su empleado, conozca a su mercado, conozca a su proveedor de servicios de seguros y conozca a su proveedor, enfoque basado en el análisis de riesgos para la prevención de lavado de activos.
- Capacitación permanente a todos los miembros de la organización dentro del marco de una cultura de reporte y denuncia.
- Los directivos, gerentes y empleados de las entidades aseguradoras deben vigilar permanentemente si existen operaciones sospechosas e informarlas a los órganos internos establecidos en las políticas y procedimientos.
- Las empresas de seguros deben fortalecer sus mecanismos para la aplicación de las medidas de prevención, a través de la implementación de programas de cumplimiento y riesgos que se estructuren con etapas y elementos, de la siguiente manera:

Etapas - Administración general de riesgos:

Identificación de los riesgos

Medición de los riesgos

Monitoreo de los riesgos

Control de operaciones

Elementos

Código de conducta

Manual de procedimientos

Archivos de información

Órganos de control

Directivos y administradores de la Entidad

Oficial de Cumplimiento

Auditoría Interna

Infraestructura para control y reporte de operaciones

Reportes Internos

Reportes Externos

Capacitación

BIBLIOGRAFÍA

1. Acuerdo de Capital o Basilea II. (2004).
2. Administración Integral de Riesgo Operacional y Gobierno Corporativo en el Sector de las Compañías de Seguros y Reaseguros. (2012). *Manual CAEFYC*.
3. Administradora de Riesgos y Auditoría en Seguridad. (2010). *Experto en Prevención de Lavado de Activos*. Curso Internacional.
4. Allan, P. (2006). *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*. (2da. Ed.). Washington DC: The World Bank.
5. Aller, G. (1998). *Prevención y Represión del Crimen Organizado en el Mercosur*. RFD, No. 14.
6. Altvater, E. & Mahnkopf, B. (2008). *El Lavado del Dinero Sucio*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
7. Álvarez, D. & Eguidazu, F. (1998). *La Prevención del Blanqueo de Capitales*. Aranzadi, Pamplona.
8. Antolinez, B. (2009). *Lavado de Activos*. (1ra. ed.). Colombia: Editorial ABC.
9. Aránguez, C. (2000). *El Delito de Blanqueo de Capitales*. Madrid: Marcial Pons.
10. Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. (2011). *Guía de Principios Básicos de Seguros, Estándares, Guía y Metodología de Evaluación*.
11. Chambost, E. (1982). *Los Paraísos Fiscales*. Madrid: Pirámide.
12. Circular INJ-DNE-SPLA-2011-015, del 03 de marzo de 2011, Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.
13. Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Libro II, Título XII, Capítulo I, Normas para las Instituciones del Sistema de Seguros Privado sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Abril 2013.
14. Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Título XII Del Control Interno, Capítulo II Del Comité de Auditoría para empresas de Seguros y Compañías de Reaseguros, Sección I De la Conformación, Art. 3.
15. Comité de Basilea. (2001). *Debida Diligencia con clientela de los bancos*.

16. Decreto Supremo No. 1147 publicado en el Riesgo Oficial No. 123 de 7 de diciembre de 1963
17. Diccionario Enciclopédico Larousse. Editorial Planera Internacional S.A., Barcelona, Volumen 4.
18. Diccionario MAPFRE.
19. GAFISUD. (2008). *Documento “Tipologías Regionales” Grupo de Trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera GTUIF.*
20. GAFISUD. (2008). *Informe de Avance de la Evaluación Mutua del Ecuador Seguimiento Intensificado.*
21. Gafisud. (2009). *III Informe de Avance de la Evaluación Mutua del Ecuador Seguimiento Intensificado.*
22. GAFISUD. (2010). *Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Ecuador Sobre Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.*
23. GAFISUD. (2010). *V Informe de Avance de la Evaluación Mutua del Ecuador Seguimiento Intensificado.*
24. GAFISUD. (2010). *VI Informe de Avance de la Evaluación Mutua del Ecuador Seguimiento Intensificado.*
25. Gobris Consultor. (2010). *La Administración de Riesgos como Política de Prevención de Lavado de Activos.*
26. IAIS. (2004). *Documento Guía sobre la Lucha Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.*
27. Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos - Ley 12, publicada en el Registro Oficial 127 del 18-Oct-2005, contiene hasta la reforma del 26-Jun-2012
28. Ley General de Seguros – Codificación
29. Naciones Unidas. (1988). *Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.*
30. Naciones Unidas. (2000). *Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transaccional.*
31. Orsi, O. (2007). *Lavado de Dinero de Origen Delictivo.* (1ra. ed.). Buenos Aires, Hammurabi.
32. Palacios, F. (2007). *Seguros Temas Esenciales.* (3ra. ed.). Bogotá.
33. Pérez, H. (2006). *Lavado de dinero doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas.* (1ra. ed.). Argentina: Lexis Nexis.

34. Pierre Laurent C., McDowell, J., Mousset, C., Allan, P. & Van Der Does De Willebois, E. (2009). *Preventing Money Laundering and Terrorist Financing*. Washington DC: The World Bank.
35. Reglamento a la Ley General de Seguros
36. Resolución JB- 201 – 2248 – Principios de un Buen Gobierno Corporativo del 26 de julio de 2012.
37. Rodríguez, P. & Germán, M. (2001). *Prevención del lavado de dinero en el sector financiero*. Argentina: Ad-Hoc.
38. Souto, M. (2002). *El Blanqueo de Dinero en la Normativa Internacional: especial referencia a los aspectos penales*. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.
39. Uzcátegui, F. (2011). *El Contrato de Seguros, Base Legal*. Seres de Excelencia.
40. [http://es.wikipedia.org/wiki/comit%ca9_de_basilea]
41. [http://statetrustbank.eu/img_pdf/45ea0stb_web_page_aml_ley_secreto_bancario_es_050310.pdf <http://www.gafisud.info>]
42. [http://www.cicad.oas.org/main/default_spa.asp]
43. [<http://www.cicad.oas.org/main/template.asp?file=/main/aboutcicad/history.asp>]
44. [http://www.cpbcs.tesoro.es/organizaciones/creacion_gafic.htm]
45. [<http://www.egmontgroup.org>]
46. [<http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/38/53/34030987.pdf>]
47. [http://www.felaban.com/boletin_clain/basileaii.pdf]
48. [http://www.felaban.com/felaban_espanol.php]
49. [http://www.fincen.gov/financial_institutions/msb/materials/spa/bank_reference.pdf]
50. [http://www.gafisud.info/documentos/eng/doc_interes/gafi-tipologias.pdf]
51. [http://www.gafisud.info/documentos/esp/doc_interes/tipologias.pdf]
52. [http://www.gafisud.info/documentos/esp/evaluaciones_mutuas/ecuador_3era_ronda_2011.pdf]
53. [<http://www.gafisud.info/quienes.php>]
54. [<http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/aml.htm>]
55. [<http://www.imf.org/external/spanish/index.htm>]
56. [<http://www.mapfre.com/wdiccionario/terminos/vertermino.shtml?P/prima.htm>]

57. [http://www.shcp.gob.mx/inteligencia_financiera/ambito_internacional/paginas/grupoe_gmont.aspx]
58. [http://www.wds.worldbank.org/external/default/wdscontentserver/wdsp/ib/2014/01/20/000442464_20140120112406/rendered/pdf]
59. [<https://www.pwc.com/ve/es/asesoria-gerencial/boletin/assets/boletin-advisory-edicion-08-2008.pdf>]
60. [www.wolfsberg-principles.com]

ANEXOS

ANEXO 1**40 RECOMENDACIONES DEL GAFI****A. SISTEMAS JURÍDICOS****Alcance del delito penal de lavado de dinero**

1. Los países deberían tipificar como delito el lavado de dinero, en base a la Convención de 1988 de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena) y la Convención de 2000 de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo).

Los países deberían aplicar el delito de lavado de dinero a todos los delitos graves, a los efectos de incluir la gama más amplia de delitos subyacentes. Los delitos subyacentes se pueden definir tomando como base todos los delitos, o a partir de un umbral vinculado ya sea con una categoría de delitos graves o con la pena de prisión aplicable al delito subyacente (criterio del umbral) o construyendo una lista de delitos subyacentes, o usando una combinación de estos dos criterios.

Cuando un país aplica el criterio del umbral, los delitos subyacentes deberían comprender, como mínimo, todos los delitos que caen dentro de la categoría de delitos graves dentro de su legislación nacional o debería incluir delitos punibles con una pena máxima de más de un año de prisión. En los países que en sus sistemas jurídicos tienen un umbral mínimo para los delitos, los delitos subyacentes deberían comprender a todos los delitos que se castigan con una pena mínima de más de seis meses de prisión.

Cualquiera sea el criterio que se adopte, cada país debería incluir por lo menos una serie de delitos dentro de cada una de las categorías de delitos tipificados.

Los delitos subyacentes en materia de lavado de dinero deberían abarcar toda conducta que haya tenido lugar en otro país, que constituya un delito en ese país, y

que habría constituido un delito subyacente de haberse cometido localmente. Los países pueden establecer que, como único requisito previo para ser considerada un delito subyacente, la conducta incurrida sea una considerada como tal por la legislación interna.

Los países pueden establecer que el delito de lavado de dinero no sea aplicable a personas que hayan cometido el delito subyacente, cuando así lo requieran los principios fundamentales de sus legislaciones nacionales.

2. Los países deberían garantizar que:

- a) la intencionalidad y el conocimiento requeridos para probar el delito de lavado de dinero sea coherente con las normas establecidas en las Convenciones de Viena y de Palermo, incluyendo el concepto de que ese estado mental se pueda inferir a partir de circunstancias de hecho objetivas,
- b) Se debería aplicar a las personas jurídicas la responsabilidad penal y, en los casos en que no sea posible, la responsabilidad civil o administrativa,. Esto no debería obstaculizar a los procedimientos penales, civiles o administrativos paralelos con respecto a personas jurídicas en aquellos países en que se apliquen esas formas de responsabilidad. Las personas jurídicas deberían estar sujetas a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas. Estas medidas se aplicarían sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas físicas.

Medidas provisionales y decomiso

- 1. Los países deberían adoptar medidas similares a las previstas en las Convenciones de Viena y de Palermo, entre ellas medidas legislativas, para que sus autoridades competentes puedan decomisar los activos lavados, el producto del lavado de dinero o de delitos subyacentes, los instrumentos utilizados o destinados al uso en la comisión de estos delitos, o activos por un valor equivalente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

2. Estas medidas deberían incluir la autoridad para: 1) identificar, localizar y evaluar los activos objeto del decomiso; 2) implementar medidas provisionales, tales como el congelamiento y el secuestro, para impedir cualquier comercialización, transferencia o enajenación de dichos activos, 3) adoptar medidas que impidan o eviten actos que perjudiquen la capacidad del Estado para recuperar activos sujetos a decomiso; y (4) tomar medidas de investigación apropiadas.
3. Los países también pueden considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean embargados sin que se requiera una condena penal, o que requieran que un infractor demuestre el origen lícito de los activos eventualmente sujetos a decomiso, en la medida en que ese requisito sea compatible con los principios de sus respectivas legislaciones nacionales.

B. Medidas que deben tomar las instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras para impedir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

1. Los países deben asegurarse de que las leyes de secreto financiero no impidan la implementación de las Recomendaciones del GAFI.

Procedimientos de debida diligencia y registros actualizados sobre clientes

1. Las instituciones financieras no deberían mantener cuentas anónimas o cuentas a nombre evidentemente ficticios.

Las instituciones financieras deberían tomar medidas para llevar a cabo procedimientos de debida diligencia sobre sus clientes, entre ellas, la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, cuando:

- se inicien relaciones comerciales;
- se lleven a cabo transacciones ocasionales: (i) por encima del umbral designado aplicable; o (ii) que sean transferencias electrónicas en las circunstancias cubiertas por la Nota Interpretativa de la Recomendación Especial VII;

- exista la sospecha de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo; o
- la institución financiera tenga dudas acerca de la veracidad o congruencia de la información identificatoria del cliente obtenida anteriormente.

Las medidas a tomar sobre procedimientos de DDC, son las siguientes:

- a) identificar al cliente y verificar la identidad de ese cliente empleando documentos, datos e información de una fuente independiente, confiable;
- b) identificar al titular beneficiario final, y tomar medidas razonables para verificar la identidad del titular beneficiario final de modo que la institución financiera quede convencida de que conoce al titular beneficiario final. En el caso de las personas jurídicas y las entidades jurídicas, las instituciones financieras además, deberían tomar medidas razonables para conocer la estructura de propiedad y control del cliente;
- c) obtención de información sobre el objeto y la supuesta naturaleza de la relación comercial;
- d) llevar a cabo un procedimiento de debida diligencia permanente respecto de la relación comercial, así como un escrutinio de las transacciones realizadas durante todo el curso de esa relación, con el fin de asegurar que las transacciones que se están haciendo son compatibles con lo que la institución sabe del cliente, sus negocios y perfil de riesgo, incluso el origen de los fondos, en caso necesario.

Las instituciones financieras deberían aplicar cada una de las medidas sobre procedimientos de DDC de los puntos a) a d), precedentes, pero podrán determinar el alcance de esas medidas sobre la base de la sensibilidad al riesgo, según el tipo de cliente, relación comercial o transacción. Las medidas que se adopten deberían ser coherentes con cualquier pauta dictada por las autoridades competentes. En lo que hace a las categorías de mayor riesgo, las instituciones financieras debería llevar a cabo un procedimiento de debida diligencia más exhaustiva. En algunas

circunstancias en que los riesgos sean menores, los países pueden decidir que las instituciones financieras pueden aplicar medidas más reducidas o simplificadas.

Las instituciones financieras deberían verificar la identidad del cliente y del titular beneficiario final antes y mientras se establece una relación comercial o se hacen transacciones con clientes ocasionales. Los países pueden permitir a sus instituciones financieras que completen la verificación lo antes posible después de establecida la relación, cuando los riesgos de lavado de dinero se estén manejando con eficacia y cuando sea esencial para no interrumpir el curso normal de los negocios.

En los casos en que la institución financiera no pueda cumplir con lo previsto en los puntos (a) a (c) anteriores, no debería abrir la cuenta, iniciar relaciones comerciales ni llevar a cabo la transacción; o debería poner fin a la relación comercial; y debería pensar en hacer un reporte de operaciones sospechosas en relación con el cliente.

Estos requisitos se aplicarían a todos los clientes nuevos, aunque las instituciones financieras también deberían aplicar esta Recomendación a los clientes ya existentes en base a su importancia y riesgo, y deberían llevar a cabo un procedimiento de debida diligencia respecto de las relaciones existentes en momentos apropiados.

2. En relación con las Personas con Exposición Política, las instituciones financieras, además de implementar las medidas sobre procedimientos de debida diligencia normales deberían:

- contar con sistemas de gestión de riesgos apropiados para determinar si el cliente es una persona políticamente expuesta;
- obtener la aprobación de los directivos de mayor jerarquía para establecer relaciones comerciales con esos clientes;
- tomar medidas razonables para determinar cuál es el origen de la riqueza y el origen de los fondos;
- llevar a cabo un monitoreo permanente más exhaustivo de la relación comercial.

3. En relación con los bancos corresponsales transnacionales y otras relaciones similares, las instituciones financieras, además de implementar las medidas sobre procedimientos de debida diligencia normales deberían:
 - a) reunir información suficiente sobre una institución corresponsal que le permita comprender cabalmente la naturaleza de sus negocios y para determinar, en base a la información de dominio público, cuál es la reputación de la institución y la calidad de su supervisión, incluso si ha estado investigada por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o por acciones de origen reglamentario;
 - b) evaluar los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de la institución corresponsal;
 - c) obtener la aprobación de los directivos de mayor jerarquía antes de establecer nuevas relaciones de corresponsalía;
 - d) documentar las respectivas responsabilidades de cada institución;
 - e) con respecto a las cuentas a través de las cuales se puede acceder a otras plazas, estar convencidas de que el banco originario ha verificado la identidad y ha realizado el procedimiento de debida diligencia permanente de los clientes que tienen acceso directo a las cuentas del corresponsal y que está en condiciones de suministrar los datos identificatorios de un cliente a pedido del banco del que es corresponsal.
4. Las instituciones financieras deberían poner especial atención a cualquier amenaza de lavado de dinero que surja a raíz de tecnologías nuevas o en desarrollo que favorezcan el anonimato, y adoptar medidas, si fuera necesario, para impedir su utilización en planes de lavado de dinero. En particular, las instituciones financieras deberían instaurar políticas y procedimientos para hacer frente a cualquier riesgo específico asociado con las relaciones comerciales o transacciones que no se hacen cara a cara.

5. Los países pueden permitir a las instituciones financieras que utilicen a intermediarios y otros terceros para llevar a cabo los elementos (a) a (c) del procedimiento de DDC o para atraer nuevos negocios, siempre que se cumplan los criterios establecidos a continuación. En los casos en que se permita lo antedicho, la responsabilidad final por la identificación y verificación del cliente recae sobre la institución financiera que utiliza a terceros.

Los criterios a cumplir son los siguientes:

- a) Una institución financiera que utiliza a terceros debería obtener, de inmediato, la información necesaria relativa a los elementos (a) - (c) del procedimiento de DDC. Las instituciones financieras deberían tomar medidas adecuadas para quedar convencidas de que, a pedido, se podrá acceder sin demora a las copias de los datos identificatorios y demás documentación relevante relacionadas con los requisitos de DDC de esos terceros.
 - b) La institución financiera debería quedar convencida de que esos terceros están regulados y supervisados y que ha tomado medidas para cumplir con los requisitos de DDC en línea con las Recomendaciones 5 y 10.
 - c) Queda a decisión de cada país determinar en qué países pueden tener su sede los terceros que cumplan con las condiciones, teniendo en cuenta la información disponible sobre los países que no aplican las Recomendaciones del GAFI o no las aplican adecuadamente.
-
1. Las instituciones financieras deberían conservar, durante no menos de cinco años, todos los documentos necesarios sobre las transacciones realizadas, tanto nacionales como internacionales, que les permitan cumplir rápidamente con las solicitudes de información de las autoridades competentes. Esos documentos deberían permitir reconstruir las diferentes transacciones (incluidos las cuantías y los tipos de moneda utilizados, en su caso) con el fin de aportar pruebas, si fuera necesario, en el caso de acciones judiciales por conductas delictivas.

También deberían conservar registro de los datos identificatorios de sus clientes obtenidos a través del procedimiento de debida diligencia sobre el cliente (por ejemplo, copias o registros de documentos de identidad oficiales tales como pasaportes, cédulas de identidad, permisos de conducir o documentos similares), los expedientes de cuentas y la correspondencia comercial durante no menos de cinco años después de haber concluido la relación comercial.

Estos datos identificatorios y los registros de transacciones deberían estar a disposición de las autoridades nacionales competentes, mediante la autorización apropiada.

2. Las instituciones financieras deberían prestar especial atención a todas las transacciones complejas e inusualmente grandes, así como a todos los patrones de transacciones inusuales, que no tengan un objeto económico aparente o legítimo visible. Dentro de lo posible, se deberían analizar los antecedentes y el propósito de dichas transacciones, asentándose los resultados por escrito, y deben estar a disposición para ayudar a las autoridades competentes y a los auditores.
3. Los requisitos del procedimiento de debida diligencia respecto del cliente y de conservación de los registros expuestos en las Recomendaciones 5, 6 y 8 a 11 se aplican también a las actividades y profesiones no financieras en las siguientes situaciones:
 - a) Casinos - cuando los clientes se dedican a transacciones financieras iguales o mayores que el umbral designado aplicable;
 - b) Agentes inmobiliarios - cuando participan en transacciones para sus clientes relacionadas con la compra y venta de bienes inmuebles;
 - c) Comerciantes dedicados a la compraventa de metales preciosos y piedras preciosas - cuando hagan alguna transacción en efectivo con un cliente, igual o mayor que el umbral designado aplicable;

d) Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores cuando preparan o llevan a cabo transacciones para su cliente, relacionadas con las actividades siguientes:

- compraventa de bienes inmuebles;
- administración del dinero, títulos valores y otros activos del cliente;
- administración de cuentas bancarias, de ahorro o títulos valores;
- organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías;
- creación, operación o administración de personas jurídicas o entidades jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.

e) Proveedores de servicios de fideicomiso y para compañías, cuando preparan o llevan a cabo transacciones para un cliente en relación con las actividades detalladas en la definición del Glosario.

Reporte de operaciones sospechosas y cumplimiento

1. Si una institución financiera sospechara o tuviera fundamentos razonables para sospechar que ciertos fondos son el producto de una actividad delictiva, o que están relacionados con el financiamiento del terrorismo, se les debería exigir, directamente por ley o reglamentación, que reporten sus sospechas de inmediato a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
2. Las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados deberían ser:
 - a) protegidos por medio de disposiciones legales respecto de la responsabilidad penal y civil por incumplimiento de alguna restricción referida a la divulgación de información impuesta por contrato o por disposición legislativa, reglamentaria o administrativa, en el caso de que reporten sus sospechas de buena fe a la UIF, aún

si no supieran exactamente cual era la actividad ilegal y con independencia de si tuvo lugar esa actividad ilegal.

- b) imposibilitados por ley de divulgar el hecho de que se está haciendo un reporte de operaciones sospechosas (ROS) o información relacionada a la UIF.

15* Las instituciones financieras deberían desarrollar programas para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estos programas deberían incluir:

- a) el desarrollo de políticas, procedimientos y controles internos, incluyendo dispositivos apropiados para gestionar el cumplimiento, y procedimientos de detección adecuados para asegurar que haya un estándar elevado para la contratación de empleados;
- b) un programa permanente de capacitación de empleados;
- c) una función de auditoría para hacer pruebas sobre el sistema.

16* Los requisitos dispuestos en las Recomendaciones 13 a 15 y 21 se aplican a las actividades y profesiones no financieras designadas, con sujeción a las siguientes salvedades:

- a) Se debería requerir a los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores que reporten operaciones sospechosas cuando, por cuenta o en representación de un cliente, participen en una transacción en relación con las actividades descritas en la Recomendación 12 (d). Se alienta enfáticamente a los países a que hagan extensivo el requisito de reporte al resto de las actividades profesionales de los contadores, incluyendo auditorías.
- b) Se debería requerir a los comerciantes dedicados a la compraventa de metales preciosos y piedras preciosas que reporten operaciones sospechosas cuando hagan alguna transacción en efectivo con un cliente, igual o mayor que el umbral designado aplicable.

- c) Se debería requerir a los proveedores de servicios de fideicomiso y para compañías, que reporten operaciones sospechosas de un cliente cuando, por cuenta o en nombre de un cliente, participen en una transacción en relación con las actividades descritas en la Recomendación 12(e).

No se requiere que los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes, y contadores que actúen como profesionales independientes, reporten sus sospechas si la información relevante ha sido obtenida en circunstancias en las que estaban sujetos al privilegio de secreto profesional o secreto legal.

Otras medidas para desalentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

1. Los países deberían asegurar que se disponga de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas, sean de orden penal, civil o administrativo, para tratar a las personas físicas o jurídicas cubiertas por estas Recomendaciones que no cumplan con los requisitos para combatir el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

Los países no deberían aprobar la instalación o aceptar la continuidad de la operatoria de bancos pantalla. Las instituciones financieras debería negarse a entrar o permanecer en una relación de corresponsalía bancaria con bancos pantalla. Asimismo, las instituciones financieras deberían cuidarse de establecer relaciones con instituciones financieras extranjeras que sean su corresponsales, cuando estas permitan que sus cuentas sean utilizadas por bancos pantalla.

2. Los países deberían considerar:

- la implementación de medidas viables para detectar o monitorear el transporte físico trans fronterizo de dinero e instrumentos negociables al portador, sujetas a resguardos estrictos para asegurar el uso correcto de la información y sin impedir en modo alguno la libertad de movimientos de capital.
- la viabilidad y utilidad de un sistema donde los bancos y demás instituciones financieras e intermediarios reporten todas las transacciones en divisas locales e internacionales por encima de una cuantía determinada, a una agencia central

nacional dotada de una base de datos computerizada, disponible a las autoridades competentes para usar en casos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, sujetas a resguardos estrictos para asegurar el uso correcto de la información.

3. Los países deberían considerar la aplicación de las recomendaciones del GAFI a otras actividades y profesiones además de las empresas y profesiones no financieras designadas que presenten un riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

Los países deberían además alentar el desarrollo de técnicas modernas y seguras de administración del dinero que sean menos vulnerables al lavado de dinero.

Medidas a adoptar con respecto a países donde no se aplican las Recomendaciones del GAFI o se las aplica insuficientemente

4. Las instituciones financieras deberían prestar especial atención a las relaciones comerciales y transacciones con personas, incluso empresas e instituciones financieras, de países donde no se aplican las Recomendaciones del GAFI o no se las aplica suficientemente. Cuando estas transacciones no tengan un propósito económico aparente o legítimo visible, se debería analizar su trasfondo y fines, en la mayor medida posible, plasmándose los resultados por escrito, los que deben estar disponibles para ayudar a las autoridades competentes. En el caso de que ese país siga sin aplicar o aplicando de modo insuficiente las Recomendaciones del GAFI, las jurisdicciones deberían poder aplicar contramedidas apropiadas.
5. Las instituciones financieras deberían asegurarse de que los principios aplicables a las instituciones financieras mencionados anteriormente, también se apliquen a las sucursales y a filiales ubicadas en el exterior en las que posean la mayoría, especialmente en países donde no se aplican las Recomendaciones del GAFI o se las aplica de manera insuficiente, en la medida en que las leyes y reglamentaciones locales lo permitan. Cuando las leyes y reglamentaciones aplicables prohíban esta implementación, las instituciones financieras deberían informar a las autoridades

competentes del país de la institución matriz que no pueden aplicar las Recomendaciones del GAFI.

Regulación y supervisión

1. Los países deberían asegurarse de que las instituciones financieras estén sujetas a una regulación y supervisión adecuadas y que estén implementando efectivamente las Recomendaciones del GAFI. Las autoridades competentes deberían adoptar las medidas legales o reglamentarias necesarias para impedir que delincuentes o sus asociados tengan o sean titulares beneficiarios finales de participaciones importantes o controlantes o que ocupen una función gerencial en una institución financiera.

Para las instituciones financieras sujetas a los Principios Centrales, las medidas reglamentarias y de supervisión que se aplican con fines de precaución y que también son relevantes para el lavado de dinero, deberían aplicarse de manera similar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Se debería otorgar nuevas licencias o registrar, regulándolas apropiadamente, a otras instituciones financieras que estén sujetas a la supervisión o control en lo concerniente a los fines de lucha contra el lavado de dinero, teniendo en cuenta el riesgo que constituyen el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en ese sector. Como mínimo, las actividades que presten el servicio de transferencias de dinero o valores, o de cambio de moneda o divisas, deberían trabajar con licencia o bajo registro, y deberían estar sujetas a sistemas efectivos de monitoreo y asegurar el cumplimiento de los requisitos nacionales destinados a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

2. Las actividades y las profesiones no financieras designadas deberían estar sujetas a medidas reglamentarias y de supervisión en la forma anteriormente expresada.
 - a) Los casinos deberían estar sometidos a un régimen reglamentario y de supervisión integral que asegure que tienen implementadas efectivamente las medidas necesarias contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Como mínimo:

- los casinos deberían funcionar bajo licencia;
 - las autoridades competentes deberían adoptar las medidas legales o reglamentarias necesarias para impedir que delincuentes o sus asociados tengan o sean titulares beneficiarios finales de participaciones importantes o controlantes o que ocupen una función gerencial o sean operadores de un casino;
 - las autoridades competentes deberían asegurar la efectiva supervisión de los casinos en lo tocante al cumplimiento de los requisitos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- b) Los países deberían asegurarse de que las demás categorías de actividades y profesiones no financieras designadas estén sujetas a sistemas de monitoreo eficaces y que aseguren su cumplimiento de los requisitos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este monitoreo se debería realizar sobre la base de sensibilidad al riesgo. Esto podría estar a cargo de una autoridad gubernamental o algún órgano autárquico apropiado, siempre que tal órgano sea capaz de garantizar que sus miembros cumplirán con las obligaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
3. *Las autoridades competentes deberían establecer pautas y dar retroalimentación que ayuden a las instituciones financieras y a las actividades y profesiones no financieras a aplicar las medidas nacionales destinadas a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y, en particular, a detectar y reportar operaciones sospechosas.

C. Medida institucionales y de otros tipos necesarias en los sistemas destinados a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Autoridades Competentes, sus Facultades y Recursos (nuevo)

1. Los países deberían crear una UIF que se desempeñe como organismo central nacional para la recepción (y, si estuviera permitido, solicitud), el análisis y la

divulgación de ROS y otras informaciones relacionadas con un posible lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La UIF debería tener acceso, directa o indirectamente, y oportunamente, a la información financiera, administrativa y de aplicación de la ley que necesite para cumplir apropiadamente con sus funciones, incluyendo el análisis de los ROS.

2. *Los países deberían asegurar que las autoridades de seguridad pública designadas tengan a su cargo la responsabilidad de las investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Se alienta a los países a apoyar y desarrollar, en la mayor medida posible, técnicas de investigación especiales adecuadas para la investigación del lavado de dinero, tales como entrega controlada, operaciones encubiertas y otras técnicas relevantes. También se alienta a los países a que utilicen otros mecanismos eficaces tales como el uso de grupos permanentes o temporarios especializados en la investigación de activos y las investigaciones en colaboración con las autoridades competentes correspondientes de otros países.
3. Cuando se llevan a cabo investigaciones de lavado de dinero y de los delitos subyacentes sobre los que aquél se funda, las autoridades competentes deberían estar en condiciones de obtener documentos e información para emplearlos en esas investigaciones, y en los procesos judiciales penales y acciones relacionadas. Esto debería incluir facultades para usar medidas compulsivas para la presentación de registros por parte de las instituciones financieras y otras personas, para la inspección de personas o el allanamiento de locales, y para secuestrar y obtener evidencia.
4. Los supervisores deberían tener facultades adecuadas para monitorear y asegurar el cumplimiento, por parte de las instituciones financieras, de los requisitos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluyendo la autoridad para realizar inspecciones. Se los debería autorizar a exigir la presentación de cualquier información de las instituciones financieras que sea pertinente al monitoreo de ese cumplimiento, y a imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de esos requisitos.
5. Los países deberían proporcionar a sus autoridades competentes involucradas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo los recursos

financieros, humanos y técnicos adecuados. Los países deberían contar con procesos que aseguren que el personal de esas autoridades sean personas de gran integridad.

6. Los países deberían asegurar que los encargados de formular las políticas, las UIF, las autoridades de seguridad pública y los supervisores cuenten con mecanismos efectivos que les permitan cooperar y, en los casos apropiados, coordinar a nivel nacional entre varios con respecto al desarrollo y la implementación de políticas y actividades destinadas a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
7. Los países deberían asegurarse de que sus autoridades competentes sean capaces de revisar la eficacia de sus sistemas para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, llevando estadísticas completas respecto de las cuestiones relevantes a la efectividad y eficiencia de esos sistemas. Éstas deberían incluir estadísticas sobre los ROSs recibidos y divulgados; sobre investigaciones, las acciones judiciales y condenas referidas al lavado de dinero, sobre bienes congelados, secuestrados y decomisados; y sobre asistencia legal mutua u otros pedidos internacionales de cooperación.

Transparencia de las personas jurídicas y entidades

1. Los países deberían tomar medidas para impedir el uso ilícito de personas jurídicas por parte de quienes se dedican al lavado de dinero. Los países deberían asegurarse de contar con información adecuada, precisa y oportuna sobre los titulares beneficiarios finales y el control de personas jurídicas que las autoridades competentes puedan obtener o a las que puedan acceder sin demora. En particular, los países que tengan personas jurídicas autorizadas a emitir acciones al portador deberían tomar medidas apropiadas para asegurar que dichas acciones no sean empleadas incorrectamente para el lavado de dinero, y poder demostrar que esas medidas son adecuadas. Los países deberían considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre la titularidad beneficiaria y el control a las instituciones financieras que encaren el cumplimiento de los requisitos de la Recomendación 6.

2. Los países deberían tomar medidas para impedir el uso ilícito de entidades jurídicas por parte de quienes se dedican al lavado de dinero. En especial, los países deberían asegurarse de contar con información adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomitentes, fideicomisarios y beneficiarios que las autoridades competentes puedan obtener o a las que puedan acceder sin demora. Los países deberían considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre la titularidad beneficiaria y el control a las instituciones financieras que encaren el cumplimiento de los requisitos previstos en la Recomendación 5.

D. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1. Los países deberían adoptar medidas inmediatas para adherir como parte y aplicar sin restricciones la Convención de Viena, la Convención de Palermo y la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo de 1999. Los países también son alentados a ratificar e implementar otras convenciones internacionales pertinentes, tales como la Convención sobre Lavado, búsqueda, Decomiso y Decomiso del Producto del Delito del Consejo de Europa, y la Convención Interamericana contra el Terrorismo de 2002.

Asistencia legal mutua y extradición

1. Los países deberían prestar, rápida, constructiva y efectivamente, la gama más amplia posible de asistencia legal mutua en relación con las investigaciones, procesos judiciales y procedimientos relacionados referidos al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En especial, los países:
 - a) No deberían prohibir o imponer condiciones irrazonables o excesivamente restrictivas sobre la prestación de asistencia legal mutua.
 - b) Deberían asegurarse de contar con procedimientos claros y eficientes cumplir con los pedidos de asistencia legal mutua.
 - c) No deberían negarse a cumplir con los pedidos de asistencia legal mutua fundándose exclusivamente en que se considera que el delito también involucra cuestiones fiscales.

- d) No deberían negarse a cumplir con un pedido de asistencia legal mutua fundándose en que las leyes exigen que las instituciones financieras mantengan el secreto o la confidencialidad.

Los países deberían asegurarse de que las facultades de sus autoridades competentes requeridas según la Recomendación 28 también estén disponibles para emplearlas en respuesta a los pedidos de asistencia legal mutua, y si fuera compatible con sus marcos nacionales, en respuesta a los pedidos directos de autoridades extranjeras judiciales o encargadas de la aplicación de la ley a sus contrapartes nacionales.

Para evitar conflictos de jurisdicción, se debería considerar la creación y aplicación de mecanismos para determinar cuál es la mejor jurisdicción territorial para enjuiciar a los acusados en interés de la justicia, en aquellos casos en que estén sujetos a causas penales en más de un país.

2. Los países deberían prestarse, en la mayor medida posible, asistencia legal mutua no obstante la ausencia de doble delito.

Cuando se requiera la existencia de doble delito para la asistencia legal mutua o para la extradición, ese requisito se debería considerar cumplido sin tener en cuenta si ambos países ubican al delito dentro de la misma categoría de delitos o si lo denominan con la misma terminología, siempre que ambos países penalicen la conducta subyacente del delito.

3. Debería existir la facultad de realizar acciones sumarias en respuesta a los pedidos de otros países de identificación, congelación, secuestro e decomiso de bienes lavados, del producto del lavado de dinero o de delitos subyacentes, instrumentos utilizados o destinados al uso en la comisión de estos delitos, o activos por un valor equivalente. También deberían existir acuerdos para coordinar el secuestro y la decomiso del producto, que podrían incluir el compartir los activos decomisados.
4. Los países deberían reconocer al lavado de dinero como delito extraditable. Cada país debería extraditar a sus propios ciudadanos o, en los casos en que un país no lo haga únicamente en base a la nacionalidad, ese país debería, a pedido del país que

pretende la extradición, someter el caso sin demora indebida a sus autoridades competentes para la iniciación de acciones judiciales por los delitos indicados en la solicitud. Dichas autoridades deberían tomar su decisión y llevar a cabo sus procedimientos de la misma manera que en el caso de cualquier otro delito de carácter grave bajo la legislación nacional de ese país. Los países involucrados deberían colaborar entre sí, especialmente en los aspectos de procedimientos y pruebas, para asegurar la eficiencia de dichas acciones judiciales.

Con sujeción a sus respectivos marcos legales, los países pueden considerar simplificar la extradición permitiendo la transmisión directa de pedidos de extradición entre los ministerios apropiados, extraditando a personas sólo en base a órdenes de detención o sentencias, y/o introduciendo una extradición simplificada de personas que por propia y libre voluntad renuncia los procedimientos de extradición formales.

Otras formas de cooperación

1. Los países deberían asegurarse de que sus autoridades competentes presten la gama más amplia posible de cooperación internacional a sus contrapartes extranjeras. Debería existir una vía clara y efectiva para facilitar el intercambio inmediato y constructivo entre contrapartes, ya sea espontáneamente o a pedido, de información relacionada tanto con el lavado de dinero como con los delitos subyacentes en los que aquél se funda. Se deberían permitir los intercambios sin condiciones demasiado restrictivas. En particular:
 - a) Las autoridades competentes no deberían rechazar una solicitud de asistencia fundándose solamente en que se considera que la solicitud también involucra cuestiones fiscales.
 - b) Los países no deberían invocar leyes que requieran que las instituciones financieras mantengan el secreto o la confidencialidad como fundamento para rehusarse a cooperar.

- c) Las autoridades competentes deberían estar en condiciones de realizar indagatorias, y en los casos en que sea posible, investigaciones en representación de contrapartes extranjeras.

Cuando la capacidad de obtener la información que busca una autoridad competente extranjera no esté dentro de la autoridad de su contraparte, también se alienta a los países a que permitan un intercambio de información rápido y constructivo con otros que no sean contrapartes. La cooperación con autoridades extranjeras que no sean contrapartes podría darse directa o indirectamente. En caso de no se sepa con certeza cuál es la vía adecuada a seguir, las autoridades competentes deberían ponerse en contacto primero con sus contrapartes extranjeras solicitando ayuda.

Los países deberían establecer controles y resguardos para asegurar que la información intercambiada por las autoridades competentes se use sólo en la forma autorizada, compatible con sus obligaciones relacionadas con la privacidad y la protección de datos. (Financial Action Task Force, 2013)

ANEXO 2**9 RECOMENDACIONES CONTRA EL TERRORISMO****I. Ratificación e implementación de los instrumentos de la ONU**

Cada país debe, inmediatamente, tomar pasos para ratificar e implementar completamente lo acordado en la Convención Internacional de la Organización de Naciones Unidas para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo llevada a cabo en 1990.

Los países también deben implementar inmediatamente las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas relacionadas con la prevención y supresión del financiamiento de los actos terroristas, especialmente la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

II. Tipificando como crimen el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero relacionado

Cada país debe tipificar como crimen el financiamiento del terrorismo, de los actos terroristas y de las organizaciones terroristas. Los países deben asegurarse que tales delitos se designan como delitos predicativos de lavado de dinero.

III. Congelando y confiscando bienes de los terroristas

Cada país debe implementar medidas para congelar, sin demora, los fondos u otros bienes de los terroristas, de las personas que financian el terrorismo y de las organizaciones terroristas de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas, relacionadas con la prevención y supresión del financiamiento de los actos terroristas.

Cada país deben también adoptar e implementas medidas, incluyendo medidas legislativas, que puedan permitir a las autoridades competentes el tomar y confiscar propiedades, entiéndase, los resultados de, o usados en, o con el propósito o

dispuestos para usarse en, el financiamiento del terrorismo, de los actos terroristas o de las organizaciones terroristas.

IV. Reportando transacciones sospechosas relacionadas con el terrorismo

Si las instituciones financieras, u otros negocios o personas obligadas sospechan o tienen bases sólidas para sospechar que los fondos tienen conexión o están relacionados o se usarán para financiar el terrorismo, actos terroristas o lo usaran organizaciones terroristas, deben informar lo más pronto posible sus sospechas a las autoridades competentes.

V. Cooperación internacional

Cada país debe proporcionar a otro país—basándose en un tratado o entendimiento, arreglos u otros mecanismos de asistencia legal mutua o intercambio información—la mayor asistencia posible, en relación con investigaciones criminales, administrativas de cumplimiento de la ley civil, preguntas y procedimientos relacionados con el financiamiento del terrorismo, de los actos terroristas o de las organizaciones terroristas.

Los países también deben tomar todas las medidas posibles, para asegurarse de no proveer guaridas seguras a los individuos que enfrentan cargos por financiar al terrorismo, actos terroristas u organizaciones terroristas y deben tener procedimientos para extraditar, cuando sea posible, a dichos individuos.

VI. Remesa Alternativa

Cada país debe tomar medidas para asegurarse que las personas o entidades legales, incluyendo agentes que proveen servicios para la transmisión de dinero o valores, transmisión por medio de sistemas o cadenas informales de dinero o valores, tengan licencia, estén registradas y se sujeten a todas las Recomendaciones FATF que aplican a bancos e instituciones financieras no bancarias. Cada país debe asegurarse que las personas o entidades legales que prestan este servicio ilegalmente, estén sujetas a sanciones administrativas, civiles o criminales.

VII. Transmisiones Cablegráficas

Los países deben tomar medidas para requerir a las instituciones financieras, incluyendo a las que transfieren dinero, que provean información precisa y significativa sobre su origen (nombre, dirección y número de cuenta) sobre transferencias de fondos y mensajes relacionados que se envían y que la información permanezca con el mensaje relacionado o transferido a través de la cadena de pago.

Los países deben tomar medidas para asegurarse que las instituciones financieras, incluyendo a las que transfieren dinero, lleven a cabo un escrutinio reforzado y monitoreen actividades sospechosas en transferencias de fondos, los cuales no contengan información completa sobre su origen (nombre, dirección y número de cuenta).

VIII. Organizaciones No Lucrativas

Los países deben revisar que las leyes y las regulaciones que se relacionan con entidades de las que se puede abusar para financiar el terrorismo, sean adecuadas. Organizaciones no lucrativas son particularmente vulnerables y los países deben asegurarse que éstas no puedan ser mal utilizadas:

1. Por organizaciones terroristas que se hacen pasar por entidades legítimas;
2. Para explotar entidades legítimas como conductos para financiar el terrorismo, incluyendo para el propósito de evadir las medidas de congelamiento de los bienes; y

Para conciliar u ocultar la diversidad de fondos clandestinos, que las organizaciones terroristas tratan de utilizar para propósitos legítimos

IX. Correos de efectivo (Cash courries)

Los países deberían tener medidas para detectar el transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, incluyendo un sistema de declaración, u otra obligación de revelación.

Los países deberían asegurarse que sus autoridades competentes tienen la atribución legal para detener o retener dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador que se sospecha están relacionados con el financiamiento del terrorismo o lavado de activos, o que son falsamente declarados o revelados.

Los países deberían asegurarse que sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas estén disponibles a ser aplicadas a las personas que realizan una falsa declaración o revelación.

En aquellos casos que el dinero en efectivo o los instrumentos negociables al portador estén relacionados con el financiamiento del terrorismo o lavado de activos, los países también deberían adoptar medidas, incluyendo las legislativas, consistentes con la Recomendación 3 y la Recomendación Especial III, que habilitarían el decomiso de dicho dinero en efectivo o instrumentos. (Gasifud, 2010)

ANEXO 3**LOS PAÍSES QUE CONFORMAN EL GRUPO EGMONT****EUROPA**

Albania DBLKPP	Israel IMPA
Alemania FIU	Italia UIC/SAR
Andorra UPB	Jersey FCU-Jersey
Austria A-FIU	Letonia KD
Bélgica CTIF-CFI	Liechtenstein EFFI
Bosnia y Herzegovina FID	Lituania MDP prie VRM
Bulgaria FIA	Luxemburgo FIU-LUX
Chipre MOKAE	Macedonia MLPD
Croacia AMLD	Malta FIAU
Dinamarca HVIDVASK	Mónaco SICCFIN
Eslovaquia OFIS UFP	Montenegro APML
Eslovenia OMLP	Noruega OKOKRIM
España SEPBLAC	Polonia GIIF
Estonia	Portugal UIF
Finlandia RAP	Reino Unido NCIS/FID
Francia TRACFIN	República Checa FAU-CR
Georgia FMS	Rumanía ONPCSB
Gibraltar GGID/GFIU	Rusia FMC
Grecia CFCI	San Marino FIU
Guernsey FIS	Serbia
Holanda MOT	Suecia NFIS
Hungría ORFK	Suiza MROS
Irlanda MLIU	Turquía MASAK
Isla de Man FCU-IOM	Ucrania SDFM
Islandia RLS	

AMÉRICA

Anguila MLRA	El Salvador UIF
Antigua y Barbuda ONDCP	Estados Unidos FINCEN
Antillas Holandesas MOT-NA	Ecuador UAF
Argentina UIF	Granada FIU
Aruba MOT-Aruba	Guatemala IVE
Bahamas FIU	Honduras FIU
Barbados FIU	Islas Caimán CAYFIN
Belice FIU	Islas Vírgenes Británicas
Bermuda BPSFIU	Méjico DGAIO/UIF
Bolivia UIF-Bolivia	Panamá UAF-Panamá
Brasil COAF	Paraguay UAF-Paraguay
Canadá FINTRAC/CANAFÉ	Perú FIU
Chile CDE	República Dominicana UIF
Colombia UIAF	San Cristóbal y Nieves FIU
Costa Rica CICAD/UAF	San Vicente y Granadinas FIU
Dominica FIU	Venezuela UNIF

ASIA

Bahrain AMLU	Líbano SIC
Corea (República de) KOFIU	Malasia UPW
Emiratos Árabes Unidos AMLSCU	Qatar QFIU
Filipinas AMLC	Singapur STRO
Indonesia PPATK/INTRAC	Tailandia AMLO
Hong Kong JFIU	Taiwán MLPC
Japón JAFIO	

ÁFRICA

Egipto EMLCU	Sudáfrica FIC
Mauricio FIU	

OCEANÍA

Australia AUSTRAC

Islas Cook CIFIU

Islas Marshall DFIU

Nueva Zelanda NZ Police FIU

Vanuatu FIU